

BBVA

Creando Oportunidades

Aplazar el dolor
no es posible,
pero sí **la terapia** para
volver a ponerte de pie

DIFERIR

**TERAPIA
FÍSICA**

\$7,800

9 meses

12 meses

**Tú decides
qué gastos
diferir a plazos
desde tu app
con las Tarjetas
de Crédito BBVA.**

Términos y condiciones en: bbva.mx/difiere

Protégete, que no te engañen.

Un mensaje de la

ABM ASOCIACIÓN DE
BANCOS DE
MÉXICO **95**
AÑOS



Llegamos a **La Villa** para
redefinir el futuro de la movilidad



HAVAL H6
HÍBRIDA



HAVAL JOLION
HÍBRIDO Y GASOLINA



ORA 03
ELÉCTRICO

7 Años de garantía
Kilometraje ilimitado
DEFENSA A DEFENSA

Visita nuestra sucursal en:
Av. Ferrocarril Hidalgo 1008
Col. La Villa, Gustavo A. Madero

Tel: 55 9377 2666

Síguenos en FB e IG



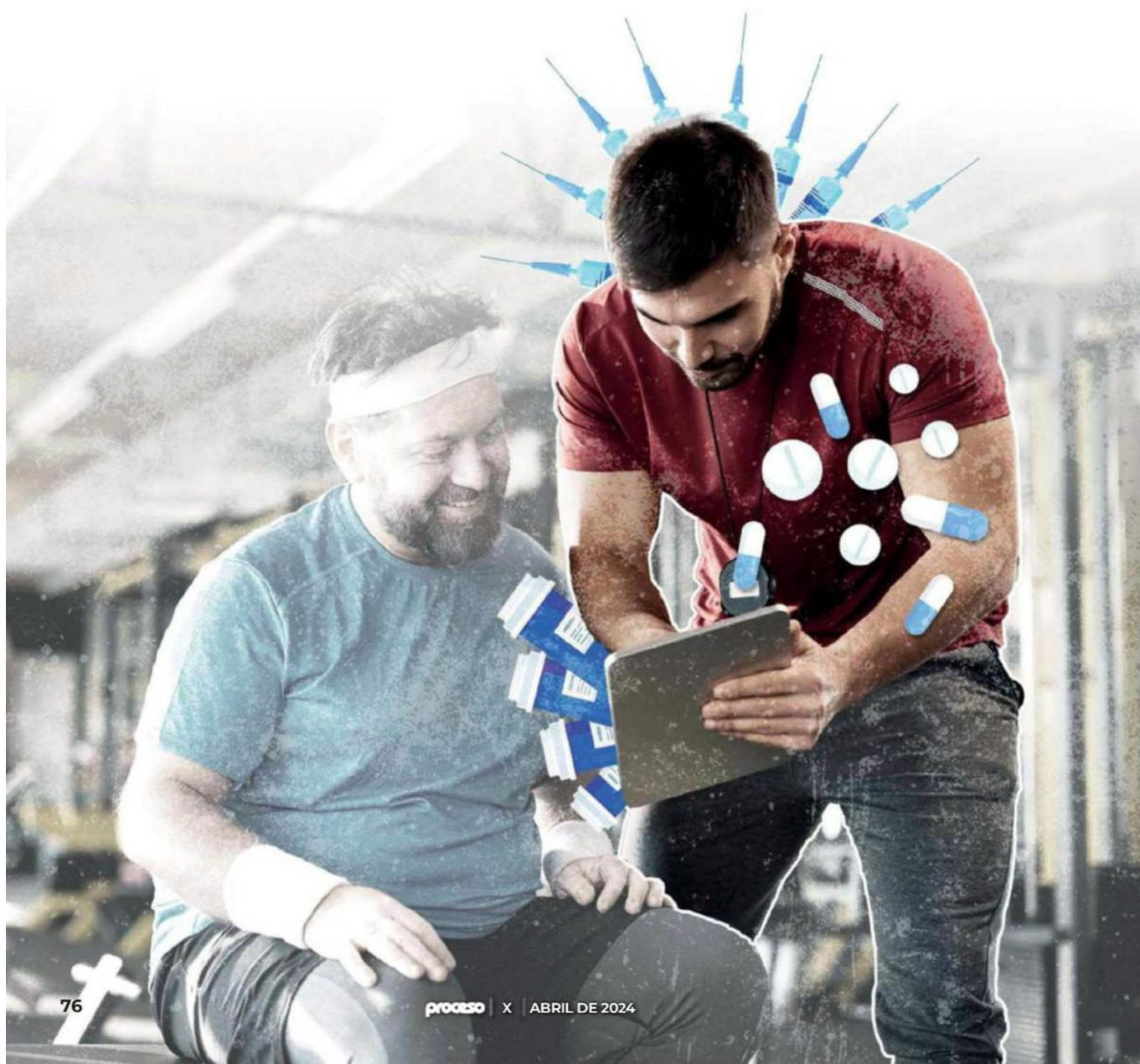
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ

Ayotzinapa, 10 años



***** DEPORTES

ENTRENADORES DE GIMNASIOS: LA MANO QUE MECE LA CUNA DEL DOPAJE



DEPORTES

EL DESEO DE OBTENER RESULTADOS RÁPIDOS Y DE VER COMPENSADO EL ESFUERZO FÍSICO HA PROVOCADO QUE EN LOS GIMNASIOS PROLIFERE EL USO DE ESTEROIDES, ANABOLIZANTES Y ESTIMULANTES ENTRE PERSONAS COMUNES Y CORRIENTES POR RECOMENDACIÓN DE LOS PROPIOS ENTRENADORES, QUIENES SON LOS DISTRIBUIDORES DE ESTAS SUSTANCIAS QUE TIENEN CONSECUENCIAS FUNESTAS PARA LA SALUD: DAÑO A ÓRGANOS VITALES, DESCALCIFICACIONES Y FRACTURAS, ASÍ COMO PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS Y CÁNCER. COMO SIEMPRE, LA FALTA DE REGULACIÓN GUBERNAMENTAL CONTRIBUYE A ACRECENTAR EL PROBLEMA.

KARLA CABRAL, JOSÉ LUIS MACÍAS*,
RICARDO OLÍN Y BEATRIZ PEREYRA

Entre 2018 y 2023, 76 deportistas mexicanos fueron sancionados por haber dado positivo a una sustancia prohibida, de los cuales 18 practican powerlifting, otros cuatro son de fisicoculturismo y cinco más pertenecen a una modalidad llamada body building, estos datos revelan que el 35.5 por ciento de los castigados están ligados a ejercicios de fuerza como los que cualquier persona realiza en un gimnasio.

El Comité Nacional Antidopaje (CNA) dio a conocer dichas cifras en las que también hizo públicos los nombres y apellidos de los infractores—como lo marca el Código Mundial Antidopaje—, el tiempo durante el cual no podrán competir y los nombres de las sustancias que consumieron: estimulantes, esteroides anabólicos y diuréticos, que se encuentran en suplementos alimenticios y medicamentos de libre venta en farmacias, tiendas autorizadas y en línea.

De acuerdo con la información disponible en el microsítio del CNA —organismo que opera en México bajo el auspicio económico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y cuya responsabilidad es prevenir y luchar en contra del dopaje— 2018 fue el año con mayor número de casos positivos reportados en el powerlifting con ocho, de los cuales seis son hombres y dos mujeres; en 2019 fueron dos (uno y una), en 2021 tres (dos y una), en 2022 también tres (uno y dos) y en 2023 otros dos hombres.

A estos hay que añadir los cinco positivos registrados durante 2022 en body building (tres mujeres y un hombre) y cuatro en fisicoculturismo (una mujer y tres hombres) para un total de 27 personas, 17 hombres y 10 mujeres que, si bien las disciplinas que practican están federadas, ninguno aspira a participar en competencias internacionales del ciclo olímpico, es decir, están en el deporte competitivo, pero alejados de los reflectores. Lo anterior no los exenta de cumplir con las disposiciones que marca el Código Mundial Antidopaje que se aplican a través del CNA.

La alerta que encienden estos resultados no sólo tiene que ver con no hacer trampa en competencias donde existen premios económicos para los ganadores, también está relacionada con el daño a la salud que genera el uso de las sustancias que se les detectó a estos deportistas que forman parte del sector amateur.

Los resultados de los controles antidopaje arrojaron anabólicos como el clembuterol y la trembolona, esteroides como la boldenona, el estanozolol; moduladores hormonales como el anastrozol, la ostarina y el tamoxifeno, éste es un medicamento con el que se trata el cáncer de mama. A quienes lo usan con otros fines les sirve para bloquear la aromatasa, una enzima que el cuerpo produce por el consumo de anabólicos esteroideos que propicia en los hombres el crecimiento de las glándulas mamarias (ginecomastia).

DEPORTES

En el cuerpo de los deportistas también hallaron diuréticos como la furosemida y la canrenona que se utilizan para perder peso, pero a la vez enmascaran el uso de otras sustancias. En cuanto a los estimulantes, el más presente es la metilhexanamina, un compuesto sintético parecido a la anfetamina.

LA TENTACIÓN

Quienes practican el powerlifting suelen ser personas comunes y corrientes que asisten a un gimnasio y son captados por los entrenadores para ayudarlos a conseguir sus objetivos que siempre son los mismos: perder grasa y aumentar la masa muscular. Se trata de hombres y mujeres de todas las edades que no tienen una formación sobre el uso de las sustancias para mejorar el rendimiento y que son víctimas fáciles para persuadirlos de que usen suplementos alimenticios.

Estas personas no informadas quedan a merced de los entrenadores quienes lo mismo les sugieren planes alimenticios no personalizados, rutinas de ejercicios sin importar su condición física y de salud y suplementos como los famosos "pre entrenos" que les ayudan a tener energía y muchas ganas de entrenar fuerte, pero no les dicen que son estimulantes cuyo abuso incluso podría ocasionar la muerte.

Como suelen no conseguir sus metas, entonces el segundo paso es seducirlos con el uso de esteroides y hormonales y la sugerencia de qué y dónde comprar para hacer los llamados "ciclos", es decir, el periodo en el que recibirán cocteles de inyecciones y pastillas sin saber los daños que pueden sufrir en riñones, hígado y corazón, o impotencia sexual y atrofia testicular en el caso de los hombres, así como patologías psiquiátricas.

"Es la situación de los gimnasios. Yo acudo un gimnasio, me meto al vestidor y ahí hay ampollitas. Todo esto tiene una consecuencia no benéfica para tu cuerpo: hay asociación de cáncer, infartos, pérdida de testosterona y de testículos, fracturas. El Comité Nacional Antidopaje no ha logrado permear toda esta información hacia la parte deportiva de la gente común y corriente.

"Tiene un programa enfocado más a los atletas, pero a todas estas personas que hoy quieren tener un beneficio rápido nadie las controla y es muy difícil controlarlo. Súmale la falta de cultura deportiva y médica que tenemos", asegura el doctor Héctor Martínez, quien el sexenio pasado fungió como responsable de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte de la Conade.

Hoy día Martínez tiene una clínica de medicina deportiva y rehabilitación en la que atiende a entre 10 y 14 pacientes por día, de los cuales entre el uno y el tres por ciento llegan para pedirle ayuda para mejorar su rendimiento deportivo mediante el uso de sustancias prohibidas. Al no ser deportistas de alto rendimiento que tienen que cumplir los lineamientos de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) no corren el riesgo de perder fama, prestigio o dinero.

Aclara que él no accede a atenderlos debido a que su trabajo en otros lugares como el club América o los ocho años que fungió como subdirector médico en la propia Conade consistió justamente en prevenir y luchar contra estas prácticas.

"No va con mi ética. Hay un grupo de médicos que sí lo hacen y me gusta transferir a este tipo de personas con quien sí lo sabe hacer, son quienes están en el fisicoconstructivismo o en el ciclismo y atletismo profesional que no se rigen por la WADA. Van a cuidar un poco más al deportista que aquellos entrenadores o preparadores físicos que lo hacen con menos conocimiento, más empírico y menos científico. No es que sea correcto, pero es menos perjudicial que cuando lo hacen en un gimnasio, porque un influencer se los recomienda o lo vieron en un video de YouTube".

LOS ENTRENADORES SON LOS "DEALERS"

Héctor Troncoso es uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes donde están afiliados dos mil establecimientos de este tipo de los nueve mil que existen en todo México. Fue el fundador de la cadena de gimnasios llamada Sports World, ha estado durante 37 años en la industria del fitness (tener una buena condición física y estar sano) y del wellness (bienestar) y ahora es el líder de un nuevo proyecto llamado Fitsi.

La cifra que ofrece es espeluznante: hay siete mil gimnasios conocidos como "de barrio" que no tienen una adecuada regulación, entre ellas la recomendación y distribución de sustancias dopantes por parte de los entrenadores o de los propios dueños de estos negocios.

"Es imposible controlar todo. Es un gran negocio. Tratar de controlar a este grupo de instructores, que son los menos, pero son los *dealers* (distribuidores). Venden estimulantes, esteroides anabólicos y también se los inyectan a los clientes dentro de los propios gimnasios.

DEPORTES

Suplementos alimentos, negocio jugoso a costa de la salud

Foto: Saúl López

"El instructor motiva a que usen las sustancias dopantes. La gente los ve fuertes y por eso acceden, se quieren ver así. También es una falta de amor propio y el ego los hace tomar un atajo que en lugar de llevarlos alto los encamina a un barranco. Cada vez hay menos instructores de ese tipo, en donde yo he trabajado se les castiga. Si nosotros sabemos de alguien se le da de baja de inmediato y entre los gimnasios nos pasamos información sobre lo que hace ese entrenador", explica el empresario.

Una vez que algunos de los clientes de gimnasios comienzan a ver los resultados del uso de sustancias para mejorar el rendimiento y que su esfuerzo al hacer ejercicio es premiado con un físico envidiable el siguiente paso es demostrar públicamente en las competencias lo que sus cuerpos son capaces de hacer.

El powerlifting o levantamiento de potencia consiste en levantar el mayor peso posible mediante tres ejercicios: peso muerto, sentadilla y press de banca que se realiza acostado para demostrar la fuerza al empujar con el pecho.

Los levantadores de poder están afiliados a la Federación Mexicana de Powerlifting (Femepo) que preside Gabriel García Corona, quien tiene 48 años y ha practicado este deporte durante 25. Asegura que cuando comenzaron los controles antidopaje había muchos casos porque prevalecía la cultura de "ganar y que no me cachén", pero que de ese momento a la fecha se nota un cambio, pues hay menos casos positivos.

"Confieso que sí son bastantes, sobre todo en el primer año. En otros países también cuando empezaron su control de dopaje pasaron por la mismas, empezaron con muchas pruebas positivas y después se fue regulando. Yo vengo de un ambiente en donde anteriormente no se hacían pruebas de doping, en donde se buscaba el protagonismo deportivo. Llegué a ver que gente que se metía al baño y olía a farmacia. Era terrible. Supe de una persona que llegaba a sacarse sangre para dar el peso y se la volvía a meter. Eso ya es muy extremo. Antes era común, pero con los controles de dopaje que llevamos en México desde 2018 la verdad es que no.

"Supe de un caso que salió positivo por un producto veterinario. La persona no sabía de dónde le llegó. Investigando se supo que era un complemento alimenticio que estaba consumiendo, pero el producto no estaba en la etiqueta. Eso sucedió en 2018 y al año siguiente me salió uno igual. Los dos consumían el mis-

mo producto que no estaba regulado y ambos salieron positivos", cuenta García, quien fue entrevistado durante el Campeonato Selectivo de Powerlifting y Bench Press que tuvo lugar en la Ciudad de México a finales del año pasado.

De acuerdo con García Corona en ocasiones los deportistas no saben que algún suplemento alimenticio que están consumiendo está contaminado con alguna sustancia prohibida. Tal fue el caso de Faridi Saavedra Salazar, una powerlifter que en 2018 fue castigada durante seis meses.

"Mi única recomendación sería que leyeran bien las etiquetas de sus suplementos. Afortunadamente fue una sustancia menor y me dieron la sanción mínima, pero no me lo esperaba. Sí hay que tener cuidado con los suplementos y ver bien qué tienen", le respondió a José Luis Macías cuando éste le pidió información sobre las personas que acuden a entrenar a un gimnasio.

A Saavedra Salazar se le detectó metilhexanamina, el ingrediente principal del *Black Blood* (sangre negra) y del *Cannibal Ferox* que pueden comprarse a través de páginas de internet. Son dos de los muchos "pre entrenos" que existen, igual que el *Hemo-Rage*. Todos ofrecen "ingredientes seguros", supuestamente hechos a base de plantas o frutas, para animar a los consumidores a adquirirlos.



En México han proliferado las tiendas donde venden muchas marcas de "pre entrenos" y otros suplementos alimenticios que se expenden indiscriminadamente. Incluso en la zona de Tepito hay un pasillo donde se ofrecen este tipo de productos, originales y "piratas" que da cuenta de un mercado negro que no ha sido controlado. En los botes que sí cuentan con un etiquetado en español, como lo marca la norma, también está la leyenda de que estos productos son responsabilidad de quien los consume.

La WADA no hace excepciones cuando un deportista falla un control antidopaje por el consumo de sustancias prohibidas que no están declarados en las etiquetas. Si bien puede haber una reducción del castigo al quitar la intencionalidad de doparse y cambiarla por negligencia la recomendación es que no los usen y si lo hacen es bajo su propio riesgo.

"Hay ocasiones en que no saben qué es lo que están consumiendo sobre todo en complementos alimenticios que son en los últimos casos que me han salido con dopaje positivo. Han sido como dos personas que han salido positivos por diuréticos, lamentablemente no se fijan en la lista de WADA que está prohibido consumirlos. No puede ser que no te metas en el tema, digo porque la lista de WADA está en español, en inglés y en infinidad de idiomas", se queja Gabriel García.

A pesar de las sanciones existen casos como el de Milton Alemán Barreto, quien fue suspendido en el 2022 durante cuatro años por el consumo de un esteroide anabolizante androgénico, ahora es el entrenador de José Luis Hernández, un joven que está iniciando en el powerlifting y ya ha ganado algunas competencias.

Héctor Martínez recuerda que cuando trabajó en la Conade los estudios científicos que hicieron indicaban que el uso de los estimulantes es tan común como el de los anabolizantes. Los estimulantes ayudan a resistir las cargas de entrenamiento, pero son sustancias derivadas de las anfetaminas.

"Incluso en las publicaciones científicas que sacábamos de México para el mundo hablábamos de cuáles son las que más se utilizan y aquí las usan los deportistas federados y es extremadamente común en los deportistas a los que no necesariamente se les da seguimiento de acuerdo a lo que marca el Código Mundial Antidopaje".

LOS DAÑOS

Marco Reyes ha competido en el powerlifting durante 17 de los 44 años que tiene. Señala que hasta ahora no conoce a nadie que se haya enfermado o muerto por el uso de esteroides, aunque en el fisicoculturismo sí. "Parte de los efectos secundarios es la pérdida de cabello, enfermedades en los riñones, descalcificaciones, infertilidad. Está tan abierto al público que creo que cualquier persona podría acceder a ellos, dependería de la cantidad de productos que vaya a usar, pero yo creo que sí está a la mano de cualquier persona de cualquier condición económica.

Los gimnasios, donde incitan al dopaje

Foto: Especial



"Es muy fácil, está muy a la mano la venta tanto en tiendas de suplementos como en farmacias de cadena. Ahí puedes conseguir sustancias como anabólicos, esteroides porque no solamente son ocupados indebidamente en el deporte, sino que también son utilizados con fines médicos".

El mejoramiento del rendimiento deportivo mediante el uso de sustancias dopantes es como venderle el alma al diablo porque los efectos son inmediatos, pero las consecuencias son devastadoras. El beneficio contra la parte perjudicial no suele tomarse en cuenta. Ninguna ventaja está por encima del daño que causan.

"Si yo tomo una hormona voy a tener un beneficio. ¿Qué va a pasar? Si la utilizo inadecuadamente va a llegar un punto en el que mi organismo ya no la produzca o utilice un sistema alterno para producirla y eso va a generar problemas en mi cuerpo, metabólicamente va a cambiar la forma de adquirir energía a partir del músculo, de la grasa, de otras proteínas y entonces a la mejor una de las consecuencias, una de muchas, es que descalcificó el hueso y entonces me fracture. Esa es una de las más habituales.

"O utilizo un estimulante y provoca que brote una enfermedad neurológica, mental y trastornos mentales y haga una psicosis determinada y le pegue o mate a alguien. Ya hay estudios psicológicos acerca de eso. Otra cosa es que se tiende a coagular un poco más la sangre, se asocia a efectos cardiovasculares, pulmonares o renales. Si benefician porque para esto están hechos, pero tienen repercusiones", insiste el doctor Héctor Martínez.

—¿Qué opina sobre el libre acceso a las sustancias dopantes?—, se le pregunta.

—Aquí el tema es mucho más complejo porque la creación, la distribución y la venta de las sustancias dopantes no está regulada en el planeta. Por ejemplo, ayudas ergogénicas —procedimiento o agente que mejora la producción de energía y proporciona al deportista una ventaja que le permite rendir por encima de lo que conseguiría con su habilidad natural o con el entrenamiento— que se venden en Estados Unidos y que pueden estar contaminadas, nadie las controla.

"Si a la FDA (la agencia del gobierno de Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos, etc) le cuesta trabajo hacer eso, ahora imagínense a la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) en México, es mucho más complejo. Ahora vemos a la Cofepris que de repente avienta una alerta: 'La alcachofa (pastillas) tiene una sustancia prohibida y afecta al cuerpo, así como a la cabeza del sujeto'. ¡Es uno de 300 que se venden en México!", recalca.

AL GOBIERNO LE VALE: TRONCOSO

"En México estamos en pañales en la regulación de sustancias dopantes. No quiero culpar a ninguna instancia, pero hay falta de cultura a nivel de salud, los usuarios deben de saber los pros y los contras del uso. A nivel nacional sólo el cuatro por ciento de la población va a los gimnasios, es una industria pequeña, y el gobierno no la pela para apoyarla ni para regular esas sustancias. En el gobierno tienen cosas más importantes que estar penalizando a alguien que se meta esteroides anabólicos. Se deben fortalecer los mecanismos de control de calidad, de etiquetado; así como lo hacen con los productos chatarra, también con aquellos que le hacen mal cuerpo. Deben de implementar campañas de uso responsable para decir qué tanto mal hace si se inyectan esteroides anabólicos.

"Hay gimnasios que están muy regulados, pagan impuestos, siguen las leyes, pero hay otros donde inclusive desde las cabezas están involucradas en la venta de las sustancias dopantes. Si en tu gimnasio castigas que ese tipo de sustancias estén circulando, eres institucional, pero si eres de los que todo está libre porque todo mundo gana, entonces no vas de la mano con la cultura del wellness que no sólo es que la gente haga ejercicio sino que la empresa pague sus impuestos, le pague a sus empleados, que los trate bien, los capacite, los mande a cursos y los motive a no meterse drogas", concluye Héctor Troncoso.

*José Luis Macías está recién graduado de la Maestría de Periodismo y Comunicación Deportiva de la Universidad Amerike Campus CDMX. Parte de este trabajo lo realizó para la materia de Seminario de Investigación y Emprendimiento en el Deporte.



La Red de Teatros del IMSS, gran proyecto desperdiciado

ESTELA LEÑERO FRANCO

Los teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son la red más grande de América Latina y desde hace años se encuentran en total abandono. Muchos de los teatros cerraron y algunos siguen funcionando como auditorios, rentados o en comodato. Ha habido intentos para aprovecharlos, pero desde una perspectiva errónea.

En 2017 Mikel Arreola, director en ese momento del IMSS, lanzó el Programa IMSS Cultural con 500 millones de pesos, de los que apenas 1.8% se dedicarían al teatro. Y en cuanto a los recintos, el Nuevo Teatro de la Nación en realidad no era un proyecto como se festejó: consistía simplemente en que cinco grupos teatrales se presentaran en 12 teatros del Seguro Social en una gira nacional.

Otro intento fue la firma de un convenio entre el IMSS y la Secretaría de Cultura federal, el 15 de agosto del año pasado, con una inversión de 400 mil pesos, para convertirlos en cines, lo cual causó una gran oposición entre la comunidad artística y teatral. Los espacios escénicos, además de su larga tradición, cuentan con una infraestructura escénica impresionante: Poseen una maquinaria compleja (parrilla, tiros, varas, poleas, disco giratorio, trampillas, piernas, camerinos, etcétera) que requiere mantenimiento y modernización, pero que hoy en día sería carísimo construir.

La Red de Teatros del

IMSS es una gran iniciativa que, con voluntad política, amor al teatro, a nuestro país y sus habitantes, se podría rehabilitar para llevar puestas de escena en beneficio de los derechohabientes y propiciar no sólo la salud física sino también la educativa y de recreación, como se pensó en su origen.

El proyecto inició en el sexenio de Adolfo López Mateos, por iniciativa de Benito Coquet, director del IMSS; y de 1958 a 1963 se construyeron 26 teatros cerrados y 42 al aire libre a lo largo de la República. En la Ciudad de México se implementó el Programa de Teatro en siete recintos y cuatro auditorios reestructurados, encabezado por Ignacio Retes y su grupo, acompañado



Volver al origen
teatrodelanacion.com.mx



de Julio Prieto y José Solé en la dirección artística. Un teatro que trajo de vuelta a los clásicos griegos y shakesperianos, y poco menos a la dramaturgia contemporánea y mexicana.

En una entrevista de 2002 (Carlos Paul en *La Jornada*), Ignacio Retes señaló que cuando el Programa de Teatro pasó a ser dirigido por la institución, "la burocracia se comió al sistema cultural y se gastaba más en las oficinas que en una puesta en escena". Esta experiencia ilustra lo que pasa ahora, donde se habla de un 80% del presupuesto cultural en mantener a la burocracia. Por eso, volver la responsabilidad a las compañías de teatro y grupos de creadores podría evitar esta situación.



También sería importante establecer reglamentos que no propicien el acaparamiento de las puestas en escena en pocas personas, como sucedió en la Ciudad de México, pues como ha señalado la especialista Jovita Millán, Ignacio Retes dirigió 19 obras y José Solé 15 de las 39 producciones.

En los noventa, Mario Espinosa, jefe de Teatros del IMSS, ideó un sistema en comodato, para en coproducción con grupos difundir obras y programas complementarios. Un sistema que por recortes de presupuesto y falta de visión política y social, se dejó morir.

El mejoramiento de la infraestructura con la construcción de teatros a través de la Red Nacional requiere de inversión en coproducción con los grupos teatrales, para que sean centros de producción y empleo en beneficio de sus derechohabientes y el público en general. Que sea punto de reunión comunitario donde se incluyan programas y talleres para la formación de públicos, quienes se contagiarán y contagiarán a su familia y amigos para convertirse en amantes del teatro, asiduos al teatro de su barrio o de su zona.



Mejoramiento de la infraestructura
teatrodelanacion.com.mx

Mediante un diagnóstico de la Red se conocerían los posibles recintos para ser rehabilitados, los que se encuentran en problemas legales y burocráticos o subarrendados, inclusive los auditorios con potencial de ser condicionados como teatros. Así se consolidarían Centros Comunitarios a nivel nacional que trabajen y mantengan vivos las comunidades artísticas, grupos y compañías, en colaboración con el Estado a través del IMSS y la Secretaría de la Cultura.

Esta Red podría ser nuevamente un hito para fortalecer el tejido social e impulsar un teatro interesado en la cultura y no en el mercado, un teatro de arte para la recreación y la educación, un teatro que fortalezca nuestra identidad. 🗣️

CULTURA

Voz y lengua indígenas, en su universidad

proceso | X | ABRIL DE 2024



Derecho e identidad
Foto: Miguel Dimayuga

Enmarcada en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032) coordinado por la UNESCO —sobre la necesidad urgente de combatir la grave pérdida de lenguas indígenas a nivel nacional e internacional—, la ULIM ya opera con 36 alumnos. Sus instalaciones están en construcción en Milpa Alta, CDMX. Aunado a ello, el 5 de febrero se envió la iniciativa de reforma sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que, de aprobarse, dice Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sería un paso histórico. Él, con alumnos del plantel y el rector, Juan Carlos Reyes Gómez, de Santa María Achtepec Mixe, doctor por la Universidad de Leiden, Países Bajos, explican el proyecto universitario.

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

La Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM) ya opera con la licenciatura en Enseñanza de las Lenguas Indígenas, con 36 alumnos (21 mujeres y 15 varones) provenientes de varias partes de la República.

Y es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) el coordinador para concretar el organismo que, de acuerdo al decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 6 de noviembre del 2023, es descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública.

El abogado, luchador social y académico mixe Adelfo Regino Montes, director del INPI, luego de señalar que “no poseemos conocimiento de que en el mundo haya una universidad dedicada específicamente a las lenguas indígenas”, expresa en entrevista que no ha sido fácil el proceso de creación de la ULIM:

“Hay determinadas universidades o instituciones de educación superior que han retomado este tema de las lenguas indígenas, pero en nuestro país no contábamos con una universidad abocada específicamente a ellas”.

Cuenta que el 9 de febrero del 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con autoridades nahuas en Milpa Alta, quienes plantearon el rescate y revitalización de las lenguas. Entonces el presidente propuso, ante la comunidad ahí reunida, la creación de una universidad dedicada a ellas, “porque estamos hablando de una gran diversidad, de por lo menos sesenta y ocho lenguas indígenas”.

Informa que sus hablantes son alrededor de siete millones y medio de personas, “pero varias de estas lenguas están en peligro de desaparición”, y que la ULIM ya funciona desde el pasado 12 de octubre.

El decreto establece que el nuevo plantel debe “impartir educación superior para la formación de profesionistas en lenguas indígenas en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta y dual; y realizar investiga-

CULTURA

ción, promoción y vinculación, con el propósito de proteger, revitalizar, fortalecer y desarrollar el patrimonio lingüístico de los pueblos indígenas de México, y contribuir en la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento y respeto de su diversidad lingüística, étnica y cultural" (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5707680&fecha=06/11/2023).

Su sede, en Milpa Alta

La ULIM tendrá sus instalaciones en Santa Ana Tlacotenco (alcaldía de Milpa Alta, CDMX), en un terreno de aproximadamente 1.7 hectáreas donado por Susana Flores, nativa del lugar. Son tierras comunales, y la construcción está a cargo del arquitecto Hugo Lino Mendoza. Por ahora la universidad funciona en un edificio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al sur de la Ciudad de México, en tanto se construyen sus instalaciones definitivas.

Regino Montes, quien durante los llamados Acuerdos de San Andrés fuera asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), informa que desde el año pasado se hicieron todos los trámites del terreno:

"Tenemos listo el proyecto ejecutivo. Antes de que termine este gobierno espero que podamos tener por lo menos el primer edificio".

—Se termina el sexenio, ¿qué garantiza que la ULIM siga?

—Es un proyecto que está en manos de nuestros pueblos, de nuestra gente. Muchos de los académicos e investigadores que laboran en la universidad provienen de una comunidad indígena y hablan una lengua indígena. Son los que van a laborar por el crecimiento de esta instancia. Esperamos que en los próximos meses ya esté operando con otras tres licenciaturas".

Ellas son: Traducción e Interpretación, Literatura Indígena y Comunicación Indígena Intercultural.

Subraya:

"No poseemos conocimiento de que en el mundo haya una universidad dedicada específicamente a las lenguas indígenas. En ese sentido este proyecto es pionero, y está dentro del contexto del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (que comprende el periodo del 2022 al 2032, coordinado por la UNESCO), sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas, y de adoptar medidas urgentes a nivel nacional e internacional".

De Santa María Alotepec Mixe, Juan Carlos Reyes Gómez es el encargado de la rectoría de la ULIM. Doctor por la facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden, Países Bajos, estudió Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social. Cuenta:

"Es una oportunidad muy grande que vemos los pueblos indígenas, justamente porque responde a una petición que ellos le hicieron al Presidente de la República, además por su derecho a la educación.

"En nuestro caso las lenguas indígenas han sido desplazadas por el español, y esto deriva de las políticas lingüísticas que se aplicaron después de la Revolución mexicana. Se quiso imponer un solo modelo de nación en donde se hablara una sola lengua y se practicara una sola cultura, obviamente la lengua castellana y la cultura de occidente. El mismo Estado prohibió nuestras lenguas en las escuelas".

Menciona que el primer semestre en la ULIM finalizó ya a mediados de marzo, y este 1 de abril empezará el segundo, y que la primera convocatoria para el ingreso se lanzó desde la página del INPI:



Los primeros alumnos, con Reyes (al centro, abajo)

Foto: Eduardo Miranda

"Quedaron treinta y seis alumnos, quince hombres y el resto son compañeras mujeres, de diferentes pueblos indígenas, de varios estados. Hablan once lenguas indígenas diferentes, seis familias lingüísticas, y los profesores son quince, la mayoría de ellos con grado de doctor, otros de maestría y sólo tres de licenciatura".

El antropólogo social de Tlahuitolpec Mixe, Oaxaca, Crisóforo Cardoso Jiménez, director de Área en la ULIM, tiene como función coordinar el diseño curricular de las licenciaturas e imparte la clase Pensamiento y Valores Comunitarios. Dice que se aceptan alumnos de 18 hasta 63 años:

"Aquí tenemos estudiantes que hablan mazahua, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, otomí, tlapaneco, tojolabal, tzotzil, huichol y zapoteco, y obviamente el español de las personas que no son hablantes de alguna de las lenguas indígenas, pero que se consideran indígenas porque sus abuelos emigraron de la comunidad y llegaron a la Ciudad de México, y aquí nacieron y crecieron, mas ahora están en proceso de recuperación de la lengua de sus abuelos y abuelas".

Pero hay obstáculos que enfrenta la ULIM:

"Quizá es el presupuesto, aunque entendemos que la universidad está dentro del proceso de inicio. Apenas se hizo el decreto, tampoco se podría al día siguiente ya contar con presupuesto, que está en proceso de trámite. Por ahora tenemos el respaldo del INPI".

Los alumnos Juan Carlos Cabrera (mazateco, Ciudad de México), Sergio González López (wixárika, Ocotá de la Sierra, Tenamaxtlan, Jalisco), Abelardo Raúl Hernández (mixteco, Pinotepa de Don Luis, Oaxaca), Guadalupe Juárez Silva (mazateca, Sitio Iglesia, San José Tenango, Oaxaca) y María Leonides Carreño Prado (mazateca, Santa María Chilchotla, Teotitlán, Oaxaca) platican a este medio que ingresaron a la ULIM para enseñar sus lenguas e incluso quieren aprender a escribirlas.

Los sitios sagrados

El 9 de agosto pasado, el presidente López Obrador firmó el decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados de las comunidades originarias y las rutas de peregrinación de los pueblos huichol, cora, tepehuano y mexicano de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí. Los sitios son: La Isla del Rey, municipio de San Blas, Nayarit; La Isla del Alacrán, Chapala, Jalisco; Cerro Gordo, San Bernardino de Milpilla, Durango; Wirikuta, Real de Catorce, San Luis Potosí, y Santa Catarina, Jalisco.

Por otro lado, el 3 de mayo del 2021, López Obrador viajó a Yucatán para pedir perdón a los pueblos mayas "por los abusos cometidos durante cinco siglos desde la conquista española", y solicitó nuevamente al gobierno de España que extendiera una disculpa a los mexicanos.

En septiembre de ese año igual pidió perdón al pueblo yaqui y firmó el Plan de Justicia de la comunidad, con los acuerdos para resarcir el territorio y el agua de la nación yaqui, conforme a lo establecido en los decretos del presidente Lázaro Cárdenas del Río de 1937 y 1940. Informa Regino Montes que se creó la Universidad del Pueblo Yaqui, y que en 2022 propuso la Universidad Forestal de San Andrés Milpillitas, Nayarit, la cual, enfatiza, ya abrió con licenciaturas en Educación Comunitaria, Indígena e Intercultural; Salud y Medicina Comunitaria; Derechos Indígenas, así como la ingeniería en Procesos de Producción Sustentable y Economía Social Comunitaria:

"Jóvenes de los ocho pueblos yaquis pueden estudiar aquí. Es la primera universidad indígena en Sonora".

—¿Qué opina de que el presidente le pidió perdón a los yaquis y mayas?

—Es muy importante porque no hay modo de que este país pueda encontrar la reconciliación. Creo que ese es el fondo del mensaje del presidente.

—También lanzó un mensaje a la monarquía de España, ¿se debe seguir con esta petición?

—Es una idea válida porque no hay que olvidar que quien hace formalmente la conquista y la colonización pues es la corona española, y lo mismo El Vaticano. Atendiendo a esta situación histórica fue que el presidente, con mucho respeto, planteó que pidamos perdón, a nombre del Estado mexicano.

López Obrador despertó en las comunidades indígenas esperanzas de cambio. No obstante, el Tren Maya indignó a algunos pueblos mayas en Yucatán, mientras que en Chiapas la violencia desplaza a las comunidades de sus territorios.

En este sexenio se ha enfatizado la nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y afromexicanos, y de ahí la creación del INPI, que cuenta con 130 oficinas en todo el país. En el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, López Obrador subraya: "Daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México".

—¿Qué tanto se cumplió con el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas?

—Lo que podemos decir a estas alturas, ya en la recta final, es que hemos sentado las bases. Es muy importante que el presidente haya enviado el 5 de febrero pasado la iniciativa de reforma sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, porque justamente establece las bases constitucionales y normativas. Además se da reconocimiento a pueblos y comunidades como sujetos de derecho público.

Y de las comunidades mayas, tsotsiles, tzeltales y choles que se ampararon contra el Tren Maya, menciona:



Regino Montes. Al frente del INPI
Foto: Germán Canseco

"Creo que los pueblos indígenas por naturaleza son diversos. No sólo en el ámbito cultural y lingüístico, también en el ámbito político y social, y eso hay que reconocerlo, y no lo veo como una cuestión negativa, sino positiva. No luchamos nosotros por la homogeneidad política o ideológica, sino porque se fortalezcan los procesos de autonomía y organización de nuestros pueblos.

"En el caso del Tren Maya se hizo un amplio proceso de diálogo y consulta. La opinión mayoritaria fue acompañar esta propuesta, y en efecto hubo voces críticas, distintas, que nosotros respetamos. La esperanza que todos tenemos es que el Tren Maya contribuya a mostrar la riqueza cultural y étnica del sureste de nuestro país.

También que pueda traer beneficios justos y equitativos para las comunidades".

— ¿Cómo ve ese distanciamiento del EZLN y el presidente de México?



— Hemos dicho que hay respeto hacia el movimiento zapatista. Creo que muy difícilmente los mexicanos hubiéramos volteado a ver la realidad de nuestras comunidades sin el levantamiento del 1 de enero de 1994. Hay que reconocer este aporte, y por eso hay respeto.

“Ahora vivimos otro momento en la historia de nuestro país en el que nuestros pueblos están participando, en el que están dando su palabra en este proceso de transformación que encabeza el presidente, y de cara al futuro yo espero que a partir de esta diversidad ideológica y política podamos seguir construyendo la grandeza de nuestra patria. Es mucho más fuerte lo que nos une como mexicanos que aquello que nos divide y separa”.

— Si se aprueba la iniciativa de reforma sobre los derechos, ¿sería un triunfo histórico?

— Sí, un paso histórico. En el año de 1992 se hizo la primera reforma al artículo cuarto de la Constitución, fue muy limitada. La siguiente fue en el 2001, a propósito de los diálogos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, lamentablemente no se atendieron los postulados fundamentales de estos acuerdos, y por eso aho-

ra es muy necesario retomar los planteamientos principales.

Y por último se le recuerda que López Obrador fue el primer presidente en recibir el tradicional bastón del mando indígena, y él mismo se lo entregó a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum en septiembre pasado.

— No se esperó a los resultados de las elecciones. ¿Qué opina?

— Lo que hay que destacar es que sí fue un acontecimiento histórico que el presidente recibiera de manos de los pueblos indígenas el bastón de mando, no lo habíamos visto en este país. A este momento al que te refieres es un tema que será materia de análisis, de reflexión, por parte de los actores políticos y también por parte de los propios pueblos.

“Yo espero que quien quede como la futura presidenta o presidente de este país pueda retomar esta sabia lección de nuestros pueblos, porque eso es lo que nos une, y es para tomar decisiones y resolver problemas”. 



INTERNACIONAL

La guerra sin tregua de Israel, **AHORA CONTRA LA ONU**

ANNE MARIE MERGIER



Gaza. Ataque aéreo israelí
Foto: Especial

64

proceso | X | ABRIL DE 2024

Ataque aéreo israelí
CONTRA

INTERNACIONAL



Acusada por Israel de ser cómplice de la organización terrorista Hamás, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) –que emplea a 30 mil personas, 90% de las cuales son palestinas– sortea desde el inicio de la guerra una serie de ataques militares y políticos por parte del gobierno hebreo, principalmente del primer ministro Benjamin Netanyahu, que la deja “al borde del colapso”.

PARÍS.- “La UNRWA está al borde del colapso”, advirtió el 3 de marzo último Philippe Lazzarini ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) le sobran razones de preocupación.

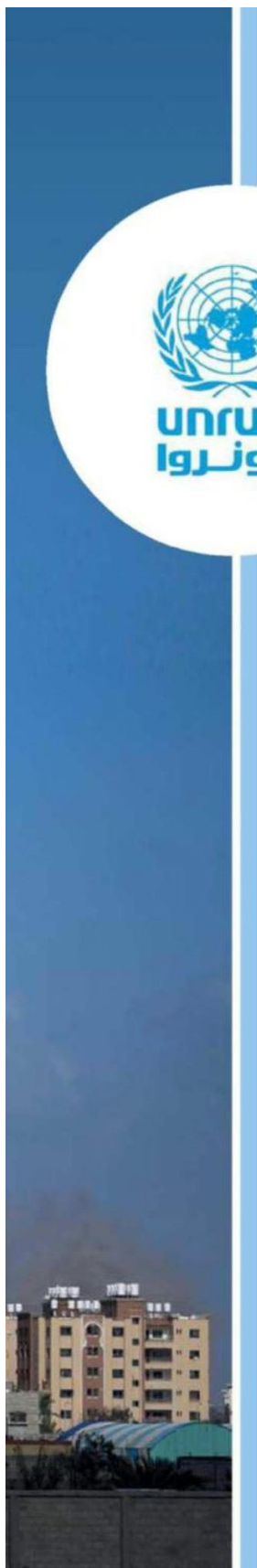
Acusada por las autoridades israelíes de ser cómplice de la terrorista Hamas, la organización que dirige el economista y diplomático –una de las más antiguas y respetadas de la ONU, que además condenó de manera contundente el sangriento atentado del 7 de octubre último, perpetrado contra Israel por la organización terrorista– es el blanco de violentos e incesantes ataques de parte de militares y políticos hebreos, empezando por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Desde el inicio de la guerra de Gaza, 166 de sus empleados fueron asesinados en operativos lanzados en su contra y más de 150 de sus instalaciones fueron parcial o totalmente destruidas.

Lazzarini recordó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el 18 de enero último las autoridades israelíes le habían informado que 12 de los 13 mil empleados de la agencia que operan en Gaza estuvieron involucrados en los atentados del 7 de octubre pasado. Lazzarini insistió en que estas mismas autoridades no le habían entregado pruebas para sostener estas acusaciones, mientras que habían filtrado “documentos confidenciales” a medios de comunicación occidentales, como las cadenas televisivas Sky News, Chanel 4, BBC, France 24, CNN... En su conjunto, los medios de información se mostraron sumamente cautelosos con estos documentos.

En aras de preservar los intereses de la agencia, y contrario al reglamento interno de la entidad, el comisionado general de UNRWA despidió de inmediato a las personas señaladas al tiempo que la Oficina de Servicios de Control Interno de la ONU lanzó su propia investigación.

El 5 de febrero último, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, creó, además, un comité independiente de evaluación de la neutralidad de la UNRWA. Dicho comité encabezado por Catherine Colonna, exministra de Relaciones Exteriores de Francia, e integrado por expertos de Suecia, Dinamarca y Noruega, inició sus labores el 14 de febrero último y presentó un reporte interino confidencial a António Guterres el 20 marzo y dará a conocer públicamente su informe definitivo a finales de abril.



Sin embargo, Lazzarini se indignó en la ONU apenas se enteraron de las acusaciones lanzadas por Israel; 17 países, entre ellos Estados Unidos y Alemania, suspendieron su contribución financiera a la UNRWA privando a la agencia de 450 millones de dólares. Una catástrofe en la situación de desesperanza total que prevalece en Gaza.

Creado en 1949 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la UNRWA debía hacerse cargo de los 700 mil palestinos expulsados de su tierra a raíz del nacimiento del Estado de Israel (1948) mientras se iba solucionando "su situación en forma justa y duradera".

Pero a lo largo de 75 años nunca se logró semejante solución y hoy seis millones de palestinos viven en 58 campos esparcidos en Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria y Líbano. En su mayoría siguen dependiendo de la UNRWA, cuyo mandato es renovado cada tres años por la misma Asamblea General de la ONU. El mandato actual acabará en 2026. Esa situación inédita convierte a la agencia en una institución única en el sistema de las Naciones Unidas.

La UNRWA, que emplea a 30 mil personas, 90% de las cuales son palestinas, administra 137 clínicas y centros de salud en los que trabajan cuatro mil 200 médicos y personal sanitario y 709 escuelas en las que 22 mil maestros dictan clases a 543 mil alumnos en sus "cinco zonas de intervención". El sistema educativo de la

UNRWA tiene fama de ser el mejor de Medio Oriente.

La agencia también asiste a los refugiados más desfavorecidos con alimentos, agua, medicina y ropa. Gaza es la zona que más requiere sus servicios, ya que 80% de su población necesita ayuda de emergencia. Hasta el 7 de octubre último, la agencia tenía a su cargo la tercera parte de las escuelas primarias de la Franja.

La UNRWA carece de presupuesto fijo y depende de "la buena voluntad" de sus proveedores históricos de fondos: Estados Unidos, Reino Unido, los países europeos y, de manera particular, Alemania. También participan en su financiamiento organizaciones regionales como la Unión Europea y en menor medida países musulmanes y árabes, así como Rusia y China... En total, la agencia contó con 848 millones de dólares en 2023. Privarla de 450 millones es condenarla a muerte.

"La UNRWA no puede absorber semejante choque financiero, y menos aún con la guerra desatada en Gaza", deploró Lazzarini antes de acusar a las autoridades hebreas de ensañarse contra la agencia.

De hecho, el mismo 3 de marzo último el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, no vaciló en afirmar en la Asamblea General que en realidad un mínimo de mil empleados de la agencia pertenecía a Hamas y reiteró lo que Benjamin Netanyahu repite incansablemente: "No habrá cupo para la UNRWA en Gaza después de la guerra".

La réplica de Lazzarini no se hizo esperar. El comisionado general denunció la detención masiva de trabajadores de la UNRWA por militares israelíes y enfatizó:

"Nuestros empleados nos hablan de cosas atroces que les fueron infligidas durante su detención y sus interrogatorios. Describen torturas para obligarlos a confesar relaciones con Hamás".

Tan amplia y radical es la campaña de desinformación y difamación israelí contra la UNRWA que la Agencia tuvo que crear un espacio específico en su página web para contestar punto por punto a las acusaciones de las que es objeto. La lista de sus desmentidos se alarga día tras día. Resaltan dos:

La agencia recuerda, por ejemplo, que cada año entrega a Israel la lista detallada y actualizada de los 13 mil trabajadores que emplea en Gaza y que nunca antes de enero último le había advertido sobre personas sospechosas de su personal.

Israel y grupos de cabildeo proisraelíes, como las organizaciones UN Watch e IMPACT, aseguran que los maestros de la agencia usan libros escolares tendenciosos para difundir una enseñanza antisemita y mensajes de violencia. Falso, replica la UNRWA, que reafirma que los libros y los programas de las escuelas de la agencia en Siria, Líbano y Jordania son los que prevalecen en los países huéspedes y que en Gaza y Cisjordania obedecen a las normas de la UNESCO. En todas partes la enseñanza es objeto de un estricto control por parte de la ONU. En Gaza lo es más aún y la UNRWA señala a Israel en forma sistemática los problemas detectados y las sanciones tomadas.



INTERNACIONAL

Catástrofe. Palestinos claman por comida
Foto: Especial



Por si eso fuera poco, la agencia sufre un hostigamiento administrativo de parte de las autoridades locales hebreas. En una carta entregada el 22 de febrero último a Dennis Francis, en ese entonces presidente de la asamblea general de la ONU, Philippe Lazzarini hizo la lista de las represalias tomadas contra la institución:

La alcaldía de Jerusalén busca expulsar la UNRWA de la sede que ocupa en la parte oriental de la ciudad desde hace 75 años, el Ministro de Hacienda hebreo anunció su decisión de cancelar la exoneración fiscal de la que goza la UNRWA, un banco israelí llegó al extremo de congelar una de las cuentas de la agencia, las auto-

ridades migratorias israelíes otorgan visas muy restringidas —de un máximo de dos meses— al personal internacional de la UNRWA mientras que centenares de sus empleados locales radicados en Cisjordania tienen prohibido viajar a Jerusalén para atender reuniones en la sede de la institución o frecuentar centros de salud ubicados en la parte oriental de la ciudad; además, diputados presentaron ante la Knesset (parlamento israelí) un proyecto de ley que busca cancelar todos los tratos preferenciales atribuidos a la UNRWA.



INTERNACIONAL

"Semejantes acciones son sumamente perjudicables para las actividades de la agencia y generan riesgos para su personal", enfatizó Lazzarini.

Tanto en la carta dirigida a Dennis Francis como ante la Asamblea General de la ONU, el alto responsable de la agencia fue contundente:

"Los llamados lanzados por Israel para dismantelar la UNRWA no conciernen la neutralidad de la agencia. En realidad, se trata de modificar los parámetros políticos establecidos hace décadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, expresó. El mandato confiado a la UNRWA por la Asamblea General encarna la promesa de una solución política. Pero no hay que olvidar que dos semanas antes del 7 de octubre el primer ministro israelí presentó ante la Asamblea General de la ONU un mapa del "futuro Israel" que abarcaba toda Palestina dejando claro que el mandato de protección y asistencia a los refugiados palestinos confiado a la UNRWA, obstaculizaba la concreción de ese mapa".

Y aclaró: "Durante décadas, y en el contexto de arreglos insostenibles, a la UNRWA le tocó cumplir su misión de agencia humanitaria; es decir, llenar el vacío creado por la falta de paz e inclusive por la falta de proceso de paz. La Asamblea General enfrenta actualmente una decisión fundamental. ¿Permitirá que los parámetros de paz para palestinos e israelíes sean aniquilados al impedir que la agencia cumpla su mandato y al cancelar su financiamiento fuera de todo acuerdo político y sin consultar a los palestinos?"

La respuesta a esa pregunta es capital, no sólo para Gaza sino para todos los refugiados palestinos atendidos por la Agencia en Cisjordania, Jordania, Siria y Líbano

En las últimas semanas y bajo la creciente presión israelí algunos de los principales proveedores de fondos de la UNRWA se preguntan sobre la posibilidad de remplazar la institución por un "consorcio" de agencias de la ONU y de organizaciones humanitarias. Pero ninguna tiene la experiencia de la UNRWA que a lo largo de tres cuartos de siglo creó infraestructuras eficientes y contactos estrechos con todas las comunidades palestinas de la región convirtiéndose en su "espina dorsal".

Ayuda humanitaria de la UNRWA en la Franja de Gaza

Foto: Especial



Es lo que recalca Catherine Colonna, quien dirige el comité independiente de investigación sobre la neutralidad de la UNRWA.

"Los Estados miembro de la comunidad internacional consideran que la agencia juega un papel insustituible, inclusive después de esa ofensiva mediática desatada en su contra", aseguró a la prensa gala.

Semejante declaración no facilitó los contactos que la exministra de Relaciones Exteriores de Francia sostuvo con las autoridades israelíes el 11 de marzo último en Jerusalén en el contexto de su investigación. Ninguna información filtró sobre sus entrevistas con altos responsables de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Asuntos Estratégicos, de las Fuerzas de Defensa y del Consejo Nacional de Seguridad del país.



INTERNACIONAL



Dos días más tarde, el 13 de marzo, y unas horas después de que Catherine Colonna se entrevistara con Philippe Lazzarini en Aman (Jordania) —ciudad que alberga una de las sedes de la UNRWA— las fuerzas aéreas israelíes bombardearon una bodega de la agencia ubicada al este de la ciudad de Rafah matando a cinco personas —entre ellas, un empleado de la agencia— y dejando a una veintena de heridos.

“Semejante ataque contra uno de los pocos centros de distribución de comida de la UNRWA que queda en la Franja de Gaza se produce cuando los suministros de alimentos se están agotando, el hambre es generalizado y, en algunas zonas, se está convirtiendo en hambruna”, denunció de inmediato Lazzarini.

Haciendo caso omiso de sus protestas, voceros de las fuerzas armadas hebreas anunciaron que el operativo había permitido la “eliminación de un terrorista que fungía como agente de apoyo al brazo armado de Hamás” y cuya misión era “desviar” la ayuda humanitaria para entregarla a los terroristas de la organización.

El 18 de marzo último la embestida israelí contra Lazzarini alcanzó su clímax, cuando las autoridades hebreas negaron al máximo responsable de la UNRWA la entrada a Gaza. Lazzarini y Sameh Shoukry, canciller de Egipto, dieron a conocer la noticia en una rueda de prensa realizada en El Cairo.

Dirigiéndose a Lazzarini, Shoukry expresó ante los reporteros: “Es el gobierno israelí que le niega a usted la entrada a Ráfah. Se trata de un acto sin precedente tratándose de un alto funcionario de las Naciones Unidas de su nivel...”.

Lazzarini recordó que la UNRWA tiene “la mayor presencia de todas las organizaciones humanitarias en Gaza” y que su visita “debía servir para coordinar y mejorar la respuesta humanitaria. Esa hambruna provocada por el hombre bajo nuestra mirada es una mancha en nuestra humanidad colectiva”, concluyó.

Sin embargo, existen algunas señales de esperanza en esa guerra sin tregua que Israel libra contra la UNRWA: Australia, Canadá y Suecia, que habían suspendido su financiamiento a la agencia, volvieron a apoyar a la organización de la ONU, pese a las virulentas críticas hebreas.

“La opinión actual de las agencias y de los abogados del gobierno australiano es que la UNRWA no es una organización terrorista. Fue lo que dictaminó el Comité de Seguridad Nacional, razón por la que Australia reanuda su contribución financiera a la agencia”, anunció Penny Wong, canciller australiana, el 15 de marzo último.

El 20 de marzo último Canadá interrumpió su ayuda militar a Israel, mientras Arabia Saudita anunció su decisión de entregar 40 millones de dólares a la UNRWA. Ese mismo día Vedant Patel, uno de los voceros del departamento de Estado estadounidense, y Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, condenaron el veto hebreo que impidió a Philippe Lazzarini entrar a Gaza. 📍



CARLOS MARTÍNEZ ASSAD

La guerra de los “locos extremistas” en Gaza

Resulta difícil tomar una posición cuando fue el brazo armado de Hamás el que desencadenó la guerra con Israel luego de su asalto del 7 de octubre último, con las consecuencias de lo que su ejército ha provocado en Gaza, lo que el mundo ha seguido de cerca a través de los medios. Una controversia reciente por el video de un joven periodista en Líbano fue importante porque permitió volver de nuevo a cuestionarse por los actores de ese conflicto.

En Gaza sus habitantes desplazados y arrinconados en la frontera con Egipto lamentan a sus víctimas, algunos quizás se pregunten dónde están sus autoridades porque hay que recordar algo que se ha olvidado a lo largo de cinco meses del conflicto: Hamás no solamente es el grupo que Occidente ha calificado de terrorista, sino que también forma parte del gobierno institucional al lado de la Autoridad Palestina.

Sin embargo, desde las elecciones de 2006 ninguna de las partes de eso que se llama gobierno aparece para apoyar en las tareas que se imponen en la franja que está siendo arrasada.

Por lo demás, las negociaciones se dan entre los líderes de Hamás e Israel, es cierto que apadrinados por Catar o por Egipto, pero hasta donde se sabe no se llamó al gobierno que encabeza la Autoridad Palestina. Es decir, no están quienes representan a más de cinco millones de palestinos de Cisjordania y a los dos millones de gazatíes, los que juntos forman la población de la misma entidad política.

Como otras muchas carencias en los territorios que no cuentan con un Estado, Palestina no tiene algún organismo o institución que pudiera dirigir o establecer algo semejante al orden, porque si no lo hacen en tiempos de paz menos pueden hacerlo en tiempos de guerra. Más complicado aún, por la división de los territorios ocupados que ahora puede considerar que evita incidir en el conjunto de la población de la misma catastrófica forma.

La guerra de Israel contra Hamás en Gaza está creando tensiones relacionadas con lo que ocurre más allá de las batallas y la inclemencia de la vida de los gazatíes.

Manifestaciones en favor o en contra de uno y otro bando se están dando en varios países y ha dividido a los mismos israelíes entre los que, debido a sus posiciones ideológicas y los críticos al gobierno que encabeza Netanyahu, se han hecho patentes sus contradicciones.

Las reacciones por supuesto se han dado también en los países árabes, creando fuertes tensiones entre sus ciudadanos. Uno de los ejemplos más notables de esas diferencias entre puntos político-ideológicos diferenciados ha tenido lugar en Líbano, país cuyos ciudadanos han expresado su rechazo a la guerra intentando frenar las acciones provocadoras de la milicia de Hezbolá, que opera en su territorio, temiendo puedan repetirse los bombardeos de la aviación israelí que en el verano de 2006 llegó hasta Beirut.

La guerra de los
“locos extremistas”
en Gaza



El 14 de marzo último el joven periodista Rawad Taha desencadenó una controversia luego de mostrar un video en el que calificó la guerra en Gaza de una batalla de "locos y extremistas". Consideró que la Operación Diluvio de Al-Aqsa tomó rehenes con el fin de lograr la liberación de miles de palestinos detenidos en las cárceles israelíes, aunque podría agregarse que con un grado de violencia injustificable. Pero en su cálculo no consideró las represalias que emprendió el Estado de Israel, que llegaría a los bombardeos masivos que han tenido lugar causando miles de víctimas y la destrucción de viviendas e infraestructura de Gaza.

Taha llamó locos a los líderes terroristas de Hamas y a los líderes de la derecha de Israel, caracterizándolos como las dos caras de la misma moneda. Recordó que hace casi veinte años, en 2005, Bezalel Smotrich, el actual ministro de Finanzas, para presionar al ejército israelí de no retirarse de Gaza —lo que unilateralmente decidió el entonces primer ministro Ariel Sharon contra la voluntad de los colonos que debieron abandonar los asentamientos—, amenazó con incendiar un puente con 700 litros de gasolina. Lo que evidentemente anunciaba un acto terrorista. De la misma manera se refirió a Mohammed Deif, líder de las brigadas de Al-Qassem, por negarse a seguir los Acuerdos de Oslo de 1990 que buscaban conducir a un Estado palestino independiente.

La crítica del periodista fue más lejos al mencionar también a Yahya Sinwar, el jefe de Hamas, porque ambos continuaron recurriendo a "ataques civiles matando a civiles israelíes" y construyendo túneles que, sin duda, costaron millones de dólares, sustrayéndolos de paliar las necesidades de los refugiados pales-

tinios. Además, agregó, se deshicieron de los líderes de Fatah; una acusación bastante fuerte que debía rastrearse porque en otros círculos se responsabiliza en particular al actual gobierno israelí de haberlos debilitados.

Las críticas al periodista de quienes siguieron el video fueron subiendo de todo, hasta llamarlo traidor. Sin embargo, para muchos había hecho un análisis y debía respetarse la libertad de expresión de Taha con el matiz de lo excesivo de su fórmula.

Rita El Jammal, periodista de Al Araby TV, escribió que "el problema con el informe de Rawad Taha es que este tema complejo no puede explicarse y resumirse en un reel, probablemente hecho con un teléfono móvil, lo que hace fácil caer en la trampa de la narrativa israelí cuando te ves obligado a resumir. El conflicto tiene una historia profunda que no podemos resumir en dos minutos y conversaciones coloquiales con expresiones que se alejan del estilo periodístico profesional".

Después de enfrentar fuertes críticas, la plataforma LBCI, que difundió la posición de Taha eliminó la publicación de X, pero la mantuvo en Instagram. En su cuenta personal de Instagram, Taha agradeció a quienes lo apoyaron y dijo que seguirá ignorando a los "trolls" y aseguró que la libertad de expresión es "sagrada" en Líbano.

El reportaje puso de manifiesto la dificultad de compartir puntos de vista, y más cuando se está tan cerca de la guerra que Líbano ya tiene en sus fronteras, aunque la mayor parte de su población ha rechazado las acciones de Hezbo-lá que las ponen en riesgo. 🌐

OLGA PELLICER

Las debilidades del primer piso

Durante los últimos días, ya en plena actividad de las campañas electorales, los miembros de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo) se han referido frecuentemente al propósito de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación. Tales intenciones obligan a preguntarse qué tan sólidos son los cimientos del primer piso y hasta dónde pueden soportar el segundo sin que se detecten las fallas estructurales que no permiten seguir adelante sin antes remediar los errores en que se ha incurrido.

Por deformación profesional comenzaré refiriéndome a las debilidades que se advierten en el campo de las relaciones con el exterior. Por su ubicación geográfica, por las características de su economía, por la complejidad que nos une con el país del norte y por los momentos que atraviesa la política internacional es imposible entender a México y trazar su ruta hacia el futuro sin incorporar una seria reflexión sobre la relación con el exterior. Desafortunadamente la evaluación de la herencia que deja el gobierno de López Obrador (AMLO) no es positiva.

Desde su toma de posición, AMLO dejó clara su decisión de no conceder atención a la política exterior. Lanzó una serie de mensajes que pretendían justificar tal decisión: él sólo viajaba en avión comercial (descartada cualquier visita de Estado), la austeridad que caracterizaba su gobierno no permitía los gastos en que se incurre al viajar al extranjero; la mejor política exterior es la política interna, por lo tanto, dedicaría

dos años a concentrarse en los problemas domésticos dejando abierta la puerta para más tarde dedicar atención a lo que ocurre allende las fronteras.

El resultado de tales decisiones fue muy costoso desde diversos puntos de vista: a) no permitió tener una estrategia bien elaborada para relacionarse con Estados Unidos, b) dejó abierto numerosos frentes en la relación con ese país tanto desde el punto de vista económico como político, c) perdió el lugar que México venía ocupando en los foros multilaterales como uno de los líderes más reconocidos de América latina; d) abandonó las relaciones con otras regiones y países, como es el caso de Europa y Asia, e) debilitó la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en particular, al Servicio Exterior Mexicano de carrera, uno de los acervos más valiosos de capital humano que tiene el país.

La realidad modificó rápidamente su actitud aislacionista. Lo primero fue la relación con Estados Unidos. Una llamada telefónica y la comitiva de alto nivel enviada por Trump a visitarlo, cuando era presidente electo, fue al mismo tiempo halagadora y comprometedora. La química telefónica entre ellos, al parecer fue buena, pero obligó a tomar posiciones frente a problemas de gran envergadura, como la migración y la relación con Centroamérica que se colocaron en primer plano.

Se hizo evidente entonces el problema de no tener listo un buen equipo de trabajo que tuviera preparada la estrategia para relacionarse con Estados Unidos sobre esos temas. Ni entonces, ni ahora, ese equipo existe.

La improvisación y las decisiones poco elaboradas tuvieron de inmediato consecuencias negativas. El primer encuentro de quien sería su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, ha sido relatado por el último en su libro *Never give an inch* (HarperCollins Publishers, 2023, pp.163-171).

Ahí se recuerda con detalle la difícil posición en que se colocó al futuro canciller mexicano al comunicarle la decisión de cerrar la frontera el día que tomaba posesión López Obrador si no se llegaba a un acuerdo para enviar a México a quienes estaban esperando respuesta, por parte de las autoridades estadounidenses, a su solicitud de asilo. La experiencia demostró que tales solicitudes podrían esperar meses o años. Fue el comienzo del famoso programa "Quédate en México", de consecuencias graves y dolorosas para México.

Desde entonces fue clara la advertencia de que México no se puede permitir dejar en segundo término la política exterior. El lugar que tenemos en el mundo, vecinos de la primera potencia del mundo al norte y al sur de una región problemática con gobiernos frágiles, obliga a una diplomacia muy cuidadosa que debe encontrar equilibrios difíciles y resistencias firmes, pero negociables.

Sin embargo, el comportamiento anunciado no cambió. AMLO perseveró en su convicción de no otorgar prioridad a la relación con el exterior. Elaboró, a cambio, un narrativa que gira en torno de la defensa de la soberanía (amenazada implícitamente por Estados Unidos) emprendiendo controversias inesperadas con países que mantienen una importante relación económica y política con México, como fue el caso de la solicitud a España para que pidiera perdón por los agravios al pueblo mexicano durante La Conquista; colocó, en primer lugar, la amistad con países que llevan una relación difícil con Estados Unidos y, en general, el mundo occidental, como es el caso de Cuba y Venezuela.

En resumen, si tomamos en cuenta que no asistió a las cumbres presidenciales muy importantes, como las del G20 o la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y no llevó a cabo ninguna visita a Europa, Asia o África, se puede concluir que México perdió aliados, visibilidad, influencia y liderazgo en el mundo.

Las primeras señales del programa de gobierno de quien construiría el segundo piso de la Cuarta Transformación no son alentadoras. La política exterior es una de las secciones más cortas y menos elaboradas de su programa de gobierno. Llama la atención el contraste entre la sección de soberanía energética, detallada y bien sustentada, con el de política exterior de gran pobreza conceptual y propositiva.

Está por verse cómo construiría Sigamos Haciendo Historia el segundo piso al que le falta un pilar fundamental: el que contiene los elementos para entender qué lugar ocupamos en el mundo. 

JAVIER SICILIA

Ideología y violencia

El pasado 11 de marzo, las y el candidato a la Presidencia de la República comparecieron en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) para posicionarse ante la agenda más importante del país: la paz.

No es la primera vez en los últimos tres sexenios que un ejercicio semejante se realiza. Se llevó a cabo en 2012, mediado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), con los candidatos de entonces en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Lo que concluyó con la promulgación, por parte de Peña Nieto, de la *Ley General de Víctimas* y la creación de su órgano ejecutivo, la CEAV. Ambos se degradaron a fuerza de desprecio por parte del Estado. Volvió a repetirse en 2018, a instancias del propio MPJD, pero esta vez mediado por la Universidad Iberoamericana, en el Museo Memoria y Tolerancia. Aquel ejercicio derivó en la creación de una política de Estado basada en la justicia transicional, fundamento de la *Ley General de Víctimas*, que López Obrador, ya como presidente electo, suscribió en el mismo CCUT y, luego, traicionó.

El ejercicio volvió a repetirse, mediado, esta vez, por el Episcopado Mexicano y la Compañía de Jesús. El documento, que lleva por título *Compromisos por la paz. Estrategias de políticas públicas para la paz*, retoma los diagnósticos, hechos en los otros dos ejercicios, sobre la violencia y los profundiza. Retoma también muchas de sus propuestas —entre ellas la de la justicia transicional y la de búsqueda de desaparecidos— y ahonda en otras como seguridad, tejido social y cárceles.

Sus diagnósticos y sus propuestas son buenas, como también lo fueron las otras. Y a semejanza a esas otras, los candidatos y los partidos las manosearán, las deformarán o las guardarán en un cajón. La clase política, profundamente corrompida, medra con el infierno y las víctimas. Su interés no es la paz sino la administración del horror del que forma parte.

Lo expresó con claridad Claudia Sheinbaum en esta comparecencia.

A diferencia de Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez, quien de los tres expresó cosas más sensatas, pero que de llegar a la Presidencia harán lo mismo que sus antecesores: suscribir y traicionar, Sheinbaum no fue hipócrita, sino cínica en su honestidad: aceptó, pero no concedió. Su firma de los compromisos fue acompañada por una adenda que rechaza el diagnóstico y, pasándose por el forro las propuestas, confirmó las suyas, las mismas que, llevadas a cabo por López Obrador, han ahondado el infierno.

Hija de la ideología y de la era de la posverdad, la realidad no existe para Sheinbaum. La científica, cuya fuerza debe radicar en la comprobación de los datos, decidió mirar desde lo ideológico y negar lo que a diario vivimos los mexicanos: injusticia, impunidad, inseguridad, miedo, impotencia e incertidumbre. Para ella no existen los casi 200 mil muertos que la política de seguridad que defiende ha cobrado en este sexenio. Tampoco las 300 mil de los sexenios de Calderón y Peña Nieto (las víctimas, no me cansaré de repetirlo, son deudas de Estado) ni los desaparecidos que el propio López Obrador se ha empeñado en desaparecer del padrón de búsqueda. No existen los secuestros, las carreteras tomadas, la extorsión, la militarización ni la corrupción de la 4T. Mucho menos



existe un Estado capturado por el crimen organizado que necesita del apoyo de organismos internacionales para sanarse.

Por ello se aferra a una política tan pobre e insuficiente como la que critica en sus adversarios. Si bien tiene razón al decir que la paz es fruto de la justicia y que no se resolverá con mano dura y más cárceles, se equivoca al omitir la verdad como el fruto de la propia justicia. Sin verdad —lo que implica una gran comisión formada por ciudadanos y apoyada por la comunidad internacional que la haga— la justicia será lo que hasta ahora ha sido, un ejercicio discrecional amparado por pactos de impunidad. El caso de Ayotzinapa y de la Guerra Sucia lo muestran con creces.

Lo único valioso del cinismo y la ceguera ideológica de Sheinbaum es que muestra, como un espejo invertido, lo que la propia oposición hará con la agenda de paz si llega a ganar: continuar administrando el infierno y ahondando su horror, como hasta ahora lo ha hecho en gobernaturas y municipios, y como lo hizo en el pasado.

Mientras no se reconozca que el Estado está podrido, que su descomposición moral es galopante como una metástasis, y que no alcanza para sanarlo las correcciones cosméticas ni la transformaciones vacías y arrogantes; mientras no se asuma, en un pacto de unidad nacional, y como prioridad absoluta de la nación la agenda expresada en los *Compromisos por la paz*, el infierno, como ha sucedido con las traiciones a los acuerdos de 2011 y 2018, se volverá más ancho y más profundo.

¿Podría ser distinto? Sí, a condición de que esa agenda sea respaldada por una gran movilización ciudadana que obligue a la clase política a comprometerse con lo que hipócrita o cínicamente no está dispuesta a asumir y que Claudia, con la arrogancia del poder, puso de manifiesto. La única que puede convocarla hoy es, como lo he dicho en varias ocasiones, la propia Iglesia. Pero parece que la prudencia, que a veces frisa en ella la cobardía, no lo hará.

Entonces, si el país sobrevive a su caos, otros volverán, el próximo sexenio, a sentarse en una mesa parecida a negociar, ahora directamente con los cárteles, una agenda de paz entre más cadáveres, más fosa y una pistola apuntándoles en la cabeza.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México. 🇲🇽

KAROLINA GILAS

¿Cuál es su *democracia*?

Hace algunas semanas, después de la marcha en defensa de la democracia, organizada por la sociedad civil el 18 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador preguntó, retóricamente: "¿Cuál es su democracia?".

La pregunta presidencial no sólo cuestiona las posiciones ideológicas e intereses políticos de los participantes de la multitudinaria manifestación, sino que invita a un análisis más amplio y crítico del propio concepto de democracia. Las críticas dirigidas a la marcha de la sociedad civil, que ostensiblemente se oponía a diversas propuestas de políticas públicas del presidente, subrayan la tensión entre las distintas interpretaciones de la democracia y sirven de ejemplo del debate global sobre la naturaleza de la democracia en una época en la que sus pilares liberales tradicionales están siendo cuestionados y reinterpretados.

Este incidente refleja el discurso más amplio que desafía la asociación convencional entre democracia y liberalismo, y sugiere la aparición de modelos democráticos alternativos que se apartan de la norma occidental de la democracia liberal.

En su esencia, la democracia suele equipararse a la democracia liberal, un sistema que hace hincapié en la protección de los derechos individuales, el Estado de derecho y el mantenimiento de controles y equilibrios dentro de una estructura gubernamental. Esta forma de democracia hunde sus raíces en los ideales de la Ilustración, que abogan por las libertades personales, la igualdad ante la ley, el pluralismo político y la limitación del poder. El modelo democrático liberal postula que la salvaguarda de las libertades y derechos de las personas, en lo individual, y de las minorías existentes en las sociedades es esencial para una sociedad verdaderamente democrática.

Los cuestionamientos del modelo liberal de la democracia vienen, principalmente, desde los liderazgos populistas. Sus discursos suelen centrarse en la regla de la mayoría como el elemento central de la democracia, cuestionando la existencia e importancia de las instituciones contra mayoritarias, de pesos y contrapesos, que pretenden limitar el ejercicio del poder para proteger a los individuos y a las minorías frente a las imposiciones mayoritarias.

Se trata de una propuesta de la democracia populista que pretende hablar por "el pueblo" y estar al servicio "del pueblo". La categoría se define, en estos contextos, de manera acotada considerando como sus integrantes a quienes apoyan al proyecto político y dejando fuera a quienes se le oponen o lo cuestionan.

Esta perspectiva que desafía la democracia liberal aboga por su redefinición que trasciende sus fundamentos liberales en favor de modelos que prioricen valores o estructuras organizativas diferentes. El debate no es meramente académico, sino que tiene implicaciones prácticas en la forma en que las sociedades se organizan política, económica y socialmente.

Las críticas y cuestionamientos de la democracia liberal –como concepto y como un régimen político– son parte de un debate académico, político y social, así como de una búsqueda de un sistema de gobierno que promueva la justicia, igualdad y respeto por todos los integrantes de la sociedad.

¿Cuál es su *democracia*?

Sin embargo, en estos debates es también válido preguntarse qué queda de la democracia cuando la despojemos del adjetivo "liberal".

El término "democracia iliberal", popularizado por Fareed Zakaria, describe una desviación del marco democrático liberal tradicional. Las democracias iliberales, aunque mantienen la fachada de las estructuras democráticas, como las elecciones o división de poder, carecen de la protección de las libertades civiles y del apego al Estado de derecho. El análisis de Zakaria evidencia una tendencia preocupante: naciones que respetan los procedimientos democráticos para elegir a sus líderes, pero que flaquean a la hora de garantizar los principios fundamentales que permiten el pleno funcionamiento de la democracia.

Así se produce una situación paradójica en la que los gobiernos son elegidos democráticamente, pero gobiernan de una manera que erosiona la esencia misma del gobierno democrático. En la teoría y en la práctica, esa "democracia iliberal" termina siendo, simplemente, un cascarón, un régimen autoritario.

La pregunta de qué constituye una verdadera democracia es más pertinente que nunca. Los ejercicios y las propuestas de construcción de las democracias iliberales desafían el modelo democrático liberal tradicional, pero también nos invitan a reconsiderar nuestra comprensión de la democracia.

La experiencia mexicana, evidenciada por la pregunta de López Obrador, refleja la reevaluación más amplia de los ideales democráticos.

Es crucial participar en este diálogo reconociendo la naturaleza polifacética de la democracia, para asegurar que el sistema evolucione de manera que respete tanto la voluntad de la mayoría como a las minorías y a los derechos de los individuos.

Necesitamos recordar que la democracia, en cualquiera de sus formas, tiene que encarnar los principios de libertad, igualdad y justicia para todos, y tiene que contar con los mecanismos institucionales que mantengan firmes los límites al poder.

Eliminar cualquiera de estos elementos –los procedimentales o los ideales que debe perseguir y proteger– no implica deconstruir o reconstruir la democracia, sino destruirla. 

Foto: J. Raúl Pérez

POLÍTICA



BANCO DE MEXICO

INFLACIÓN: EL SABOR AMARGO

del dinero en efectivo por las
elecciones, remesas y apoyos sociales

El circulante monetario en la economía –billetes, monedas y depósitos en cuenta corriente– se ha disparado a niveles históricos durante los últimos años, pese al esfuerzo del Banco de México por restringir la liquidez. Los programas sociales, remesas récord y ahora el ciclo electoral, entre otros factores, no sólo alargarán la lucha contra la inflación, sino que, además, causarán que las empresas sigan enfrentando un crédito caro y que las finanzas públicas sufran por el mayor costo del servicio de la deuda.



CLAUDIA VILLEGAS

Aunque analistas califican como positivas la gestión de la política monetaria y las decisiones de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) para combatir la inflación, el histórico ingreso de remesas y la inyección anual de al menos 700 mil millones de pesos a la economía, vía programas sociales, elevan el circulante monetario y consolidan una presión constante con precios más altos para productos, servicios y créditos.

En otras palabras, mientras el banco central ha mantenido al alza las tasas de interés para encarecer el financiamiento y desincentivar el consumo de empresas y familias, el gobierno federal mantiene una política fiscal expansiva que generará este año un déficit de 5% que, además, compromete la efectividad a la política monetaria. La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-

co (SHCP) defiende el gasto en la economía mientras el Banxico, desde enero de 2022, ha dejado claro en sus decisiones de política monetaria que su prioridad es el combate a la inflación y no el impacto de mayores tasas en las finanzas públicas.

De acuerdo con el histórico de minutas de la Junta de Gobierno del Banco de México, el exsubgobernador Gerardo Esquivel advirtió que si la Junta de Gobierno del Instituto Central mantenía su posición –como lo hizo–, de “adelantarse demasiado al proceso de normalización de la Reserva Federal” (aumentar tasas), se corría el riesgo de caer en una trampa de bajo crecimiento e inestabilidad financiera.

En enero de 2022 integrantes de la Junta de Gobierno alertaron sobre el riesgo del fenómeno conocido como “dominancia fiscal”, la intención de mantener bajas las tasas de interés, pese a los riesgos inflacionarios, para ayudar a la política fiscal, al costo de la deuda del gobierno federal más que a la economía.



Rodríguez Ceja. Reducción de tasas
Foto: José Manuel Jiménez



Sólo para 2024 el costo del servicio de la deuda para este año aumentaría 11.8% y se ubicaría en 1.2 billones de pesos.

Así, en línea con sus mandatos, el Banco de México y el gobierno federal vía la SHCP y la Secretaría del Bienestar avanzan en sentidos opuestos mientras las tasas de interés, pese al reciente ajuste de un cuarto de punto desde el primero desde febrero de 2021, siguen caras afectando a las empresas que necesitan créditos; los analistas se preguntan si la política monetaria es suficiente mientras el gobierno decreta una política fiscal expansiva.

Un análisis del área de Estudios Económicos de Citibanamex confirma que el crédito bancario se desacelera en el contexto de una política monetaria muy restrictiva. Sin embargo, las monedas y billetes en circulación no han dejado de aumentar y ya tocan niveles de los tres billones de pesos.

El crédito vigente total durante enero de este año, indica Citibanamex, se mantuvo sin cambios respecto de diciembre en términos reales y desestacionalizados. El crédito al consumo sólo se expandió 0.3% mensual, ritmo menor al crecimiento mensual promedio de 1.0% registrado durante 2023, mientras que el crédito a empresas y el hipotecario disminuyeron 0.2% mensual. Citibanamex recordó, además, que en años electorales la base monetaria se expande y que ha alcanzado crecimientos hasta de dos dígitos.

Por casi tres años y en un intento por contener la inflación, la Junta de Gobierno del Banxico mantuvo el incremento en las tasas de interés. En marzo de 2021 la tasa de interés interbancaria se ubicó en 4% y, desde entonces, las decisiones de política monetaria del Banco de México la llevaron a niveles de 11.25%. Así, la inflación pasó de 8.77% en agosto de 2021 a 4.4% en febrero de 2024; luego de que se eliminó la inflación importada se registró el efecto de los subsidios a los combustibles, pero, sobre todo, de la política monetaria restrictiva.

Sin embargo, la cantidad de dinero en la economía aumentó y, desde 2020 mantiene una trayectoria al alza, según se observa en una revisión desestacionalizada de los registros del circulante monetario y depósitos en cuenta corriente del Banco de México que forman parte de los Agregados Monetarios.

Además de los ciclos electorales, como se confirma en 2000, 2006, 2012 y 2018, dos factores estarían modificando el ritmo con el que aumenta el dinero en efectivo en la

economía: la entrega de recursos a la población para programas de apoyo, la llamada red de protección social, y la llegada de remesas.

Más inflación por remesas

El economista Alejandro Gómez, fundador y director general de la consultoría GAEAP, consideró en entrevista que durante el último año la base monetaria (circulante y depósitos a la vista) en México aumentó 11.7% en el último año, una tasa tres veces más alta que el crecimiento de PIB y más del doble de la inflación.

En su opinión, el Banxico no ha podido *esterilizar* la entrada de remesas al país, lo que representa una fuente consistente de inflación. Además, expone que "claramente la política fiscal expansiva representa una contradicción en la economía y, de mantenerse, no se avanzará en la lucha contra el incremento en los precios.

Tendremos –vaticina el experto– un año más de tasas altas y un año más de inflación superior a 4% por esta contradicción, generada principalmente por el incremento del circulante en la economía y la política fiscal expansiva.

Así, asegura, la inflación en México enfrenta un problema estructural.

Valdría la pena preguntarse, reflexionó el economista Jorge Flores Kelly, fundador del Observatorio Nearshoring y Datamétrica, si la política monetaria está siendo realmente efectiva en un país con un bajo nivel de bancarización, alta informalidad y ahora creciente circulante monetario.

POLÍTICA

Liquidez. Efectos secundarios económicos

Foto: Crisanta Espinosa Aguilar @Cuartoscuro



Mientras tanto, este 21 de marzo, la Junta de Gobierno del Banco de México aprobó su primer recorte de la tasa de interés desde febrero de 2021, de 11.25% a 11 por ciento. Sin embargo, la subgobernadora Irene Espinosa, propuesta para ser parte de la Junta de Gobierno del Banco de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, emitió un voto contra el ajuste en la tasa de referencia. Será en diciembre de 2024 cuando concluya el periodo en la Junta de Gobierno del Banco Central para el cual fue ratificada por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en 25 puntos el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día y a un nivel de 11%, con efectos a partir del 22 de marzo de 2024. A favor de reducir la tasa de interés votaron la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez, y los subgobernadores Galia Borja, Jonathan Heath y Omar Mejía Castelazo.

Así se interrumpió, por ahora, el ciclo de alza en el costo del dinero luego de que al interior de la Junta de Gobierno Irene Espinosa encabezara la diferencia de opiniones sobre el momento oportuno para relajar la política monetaria y reducir el costo del dinero.

El Banco de México advirtió en un comunicado que se mantendrá alerta, con una "postura monetaria restrictiva" buscando acercarse a la meta de una inflación de 3%. Los analistas calculan que aún será un camino doloroso.

A principios de este año, y por cinco semanas consecutivas, el ritmo de incremento de los precios se aceleró y tocó niveles de 4.90% en enero de 2024, ubicándose en su nivel más alto para el inicio de un año desde 2021. La batalla contra la inflación aún no termina.

Voz disidente

En febrero de 2023 la subgobernadora Espinosa aseguró que, aunque las presiones externas habían comenzado a ceder, la economía mexicana exhibía una elevada incertidumbre sobre la dinámica inflacionaria con una mayor persistencia y mayores presiones internas.

"Debemos ser extremadamente cautelosos en nuestra guía prospectiva. Ésta debe ser creíble y factible, sin arriesgar la reputación del Banco y minar la efectividad de la comunicación con el mercado", dijo hace un año la banquera central.



Ha pasado un año desde aquella declaración disidente sin que Irene Espinosa variara su opinión respecto de la necesidad de mantener altas las tasas de interés mientras las finanzas públicas del gobierno federal crujen ante el encarecimiento del servicio de la deuda. En Estados Unidos el exsecretario del Tesoro Lawrence Summers lanzó una severa crítica al Banco de la Reserva Federal por enviar señales de que sí buscará ajustar a la baja las tasas de interés frente a la fortaleza que muestra la economía estadounidense.

En la economía mexicana, en tanto, los billetes y monedas en circulación, el dinero en efectivo, desafían la política monetaria restrictiva del Banco de México. No se trata, sin embargo, de una batalla nueva para la Junta de Gobierno del Instituto Central.

Desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2018, el saldo de la base monetaria, integrada por billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios de cuenta corriente pasó de un billón 494 mil 948.9 millones de pesos a dos billones 960 mil 35 millones de pesos hacia finales de 2023.

Respecto del cierre de 2022, el incremento de la liquidez en la economía fue de 10% arriba del alza en la inflación.

Óscar Vera, exdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), consideró que el Banco de México, más allá del flujo de recursos, tiene que indagar el impacto de las remesas y de los apoyos sociales en el dinero disponible en la economía.

Los dólares que envían los migrantes desde Estados Unidos parecen ser inmunes al incremento en las tasas de interés y, mientras más se aprecia el peso frente al dólar, el monto promedio de los envíos aumenta a casi 400 dólares para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Lo mismo sucede con los programas sociales que constituyen combustible directo para el consumo interno de la economía.

Para Vera no sólo se trata de la inflación sino del costo que representa para el gobierno mantener las tasas altas para el servicio de la deuda y los créditos del banco central, lo que también afectaría al sector productivo. El impacto de los programas sociales también debe analizarse.

La presión del SAT y el circulante

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) impulsó la fiscalización con métodos digitales, como la factura electrónica generando una compulsa de los ingresos del contribuyente vía tarjetas de crédito y débito, el entonces gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ordenó un estudio que develara las razones por las cuales aumentaba el circulante monetario, de acuerdo con información a la que **Proceso** tuvo acceso.

Entre diciembre de 2012 y noviembre de 2017 los billetes y monedas en circulación en poder del público pasaron de 733, 451.7 millones de pesos a un billón 494, 948 millones de pesos. Al primer bimestre de 2024, este indicador casi alcanza los tres billones de pesos.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto las tasas de interés también alcanzaron niveles muy altos que generaron restricciones crediticias. Al cierre de 2018 el Banco de México decretó que la tasa de interés de referencia se ubicara en su nivel más alto respecto de una década previa, en 8.25 por ciento.

Así, el banco central ha lidiado históricamente con factores desde el Poder Ejecutivo. Sin embargo, fue en el cierre de febrero de 2023 cuando la base monetaria se ubicó en dos billones 474 mil millones de pesos y cuando pasó a dos billones 430 mil 268.9 millones de pesos que se registró un ligero retroceso de 1.7%; fue entonces cuando el Banco de México confirmó que marginalmente la política monetaria podía influir en el efectivo con el que cuenta la economía. Después y hasta diciembre de 2023 el circulante monetario se disparó a niveles de dos billones 708 mil 854.5 millones de pesos hasta un nivel de tres billones 28 mil 645 millones de pesos, de acuerdo con la información del Banco de México al 1 de marzo.

Para el combate a la inflación resulta clave el control del circulante monetario. Investigaciones del Banco de México indican que a partir del momento en que el dinero disponible en la economía comience a bajar, tardaría al menos nueve meses para que la inflación converja con el objetivo de entre 3 y 4% marcado por el Banxico.

Ahora, sin embargo, se proyecta que será hasta el tercer trimestre de 2025 cuando se vislumbre la luz al final de túnel respecto de la inflación. 📊

JUSTICIA

Una maquinaria de impunidad sustenta la corrupción en Migración

Organizaciones no gubernamentales evidencian las investigaciones deficientes de la FGR en los casos de la masacre de Camargo, el accidente carretero de Chiapa de Corzo y el incendio de una estancia migratoria en Ciudad Juárez, las tres peores tragedias relacionadas con migrantes en el gobierno de López Obrador. Las indagaciones no afectaron los lazos de connivencia y colaboración entre funcionarios de migración y crimen organizado y tampoco se reparó el daño a familiares de las víctimas.



Reclamos contra Garduño. Letra muerta

Foto: Isabel Mateos Hinojosa

MATHIEU TOURLIERE

En los casos de la masacre de 17 migrantes en Camargo, del accidente de un tráiler en Chiapas que causó 56 muertos y del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 extranjeros, la Fiscalía General de la República (FGR) ha realizado investigaciones deficientes que no atacaron la corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) ni la colusión de servidores públicos con las redes de tráfico de migrantes y tampoco llevaron a la reparación del daño.

En las tres peores tragedias del sexenio de Andrés Manuel López Obrador en materia migratoria, donde decenas de migrantes murieron por asesinato extrajudicial, accidente o negligencia, se echaron a andar las "maquinarias de impunidad para que no suceda nada" y quedaron intocadas las estructuras de "beneficios económicos para el crimen organizado coludido con las autoridades", deplora la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Ana Lorena Delgadillo.

El 9 de diciembre de 2021 se desprendió la caja de un tráiler en la carretera que une Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas; en ella viajaban, amontonados, al menos 169 migrantes de cinco nacionalidades. El balance oficial fue de 56 muertes y 113 personas lesionadas, en un accidente que 41 organizaciones y 11 comités de familia atribuyeron a las "rutas y fronteras militarizadas" que "obligan a las y los migrantes a caer en manos de traficantes de personas".

Acto seguido, el entonces canciller Marcelo Ebrard Casaubón convocó una reunión con representantes de los países de origen de los migrantes y de Estados Unidos; el político anunció la creación de un "Grupo de Acción Inmediata" para dismantlar la red de tráfico de personas que operó el tráiler accidentado. Aseveró que "no permitiremos la impunidad".

Dos años más tarde, **Proceso** pidió, vía el sistema nacional de transparencia, información sobre los resultados de la iniciativa. De acuerdo con las respuestas de la Cancillería, después de conformarse, el "Grupo de Acción Inmediata" se volvió a reunir en una sola ocasión, un mes y medio después del accidente.

La reunión tuvo lugar el 26 de enero de 2022; participaron tres embajadores de México en diversos países, así como funcionarios de segundo nivel de la Cancillería, del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). También acudieron diplomáticos de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, así como dos representantes de la embajada de Estados Unidos en México.

Aunque se le pidió la orden del día y los acuerdos que derivaron de la reunión, la Cancillería aseveró que "no recibió o emitió documentación alguna relacionada" con lo requerido. Pasada esta junta, el Grupo de Acción Inmediata se quedó en el olvido.

En respuesta a una solicitud de información, la FGR indicó que, a consecuencia del accidente, abrió la carpeta de investigación número FED/FEMDH/UIDPM-CHIS/0001105/2021, la cual se encuentra judicializada y ante el Poder Judicial de la Federación. La dependencia, dirigida por Alejandro Gertz Manero, reservó los datos adicionales.

Aunque la FJEDD ya no acompaña este caso, Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral en la organización, asevera que "no se debería hablar de un accidente porque esto minimiza el fenómeno de los delitos que se cometen contra los migrantes: el accidente como tal, o sea el volteo del tráiler, es un efecto de todo lo que hay detrás, de la de macrocriminalidad, de la corrupción, del tráfico, de las extorsiones".

La carpeta de investigación de Chiapa de Corzo se sumó a las seis mil 370 que la FGR abrió entre enero de 2019 y diciembre de 2023, las cuales se iniciaron con poco más de cuatro mil personas detenidas, de acuerdo con una respuesta de la FGR a una solicitud de información enviada por **Proceso**. La FGR apenas judicializó 25% de sus investigaciones. Y su actuar se hizo al margen del INM, el cual, desde enero de 2019, sólo ha presentado 374 denuncias por tráfico de personas ante las fiscalías locales y la FGR. En respuesta a una solicitud de información, la dependencia precisó que desconocía el estatus de las carpetas.

Masacres y negligencia

En la masacre de Camargo la justicia llegó, pero a medias. El 22 de enero de 2021 agentes de la policía estatal de Tamaulipas, incluyendo del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), emboscaron una camioneta donde viajaban 17 migrantes de Guatemala y El Salvador y sus dos guías mexicanos. La investigación, basada en el testimonio de un policía colaborador, determinó que los uniformados remataron a los heridos y prendieron fuego a sus cuerpos.

En septiembre último, un juez local condenó a 12 policías por diversos delitos, incluyendo homicidio calificado, en un proceso abreviado; una decisión producto de una investigación de la fiscalía tamaulipeca, que los familiares de las víctimas celebraron. La fiscalía local emitió otras ocho órdenes de aprehensión, y una se ejecutó recientemente.

La FGR, por su lado, sigue sin terminar la investigación sobre la cadena de mando que llevó los policías a disparar, así como a dos agentes del INM y siete policías municipales de Escobedo, Nuevo León, quienes habían decomisado la camioneta un mes antes del ataque y la habían devuelto a su dueño. La FGR tampoco ha determinado los vínculos entre uniformados y los grupos de la delincuencia organizada.

Las organizaciones que acompañan a las familias también insisten en que la investigación no determinó el motivo por el que los agentes masacraron a los migrantes; es decir, las razones por las que recibieron la orden de emboscar la camioneta. "Las personas que han sido condenadas no han comentado cuáles fueron los intereses detrás de los hechos, y la única persona que declaró contra los demás policías no declaró sobre la motivación; no fue una decisión espontánea, lo que hemos visto a lo largo de la historia con estas masacres es que siempre hay alguien detrás", explica Ángel Escalante, asesor jurídico de la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala.

El abogado apunta a la responsabilidad de las autoridades del Estado mexicano en la masacre, ya que "las personas que cometieron el hecho lo hicieron bajo una actividad institucional y con armamento del Estado; eso involucra directamente al Estado, y es responsable de la reparación de estos daños".

La masacre de Camargo se sumó a las de San Fernando, en 2010; Cadereyta, en 2012, y Güémez, en 2014, así como de las fosas clandestinas de 2011, cuyos casos permanecen impunes.

Incendio sin castigo

En el incendio ocurrido en la noche del 27 de marzo de 2023 en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua, la FGR armó una investigación *fast track* –según Yesenia Valdez– que buscaba imputar delitos a algunos funcionarios y a los migrantes que prendieron fuego a sus colchonetas en protesta por la falta de agua y alimentos. Ese día los custodios huyeron del recinto, abandonando a los hombres encerrados en la celda colectiva que se estaba incendiando; 40 fallecieron y otros 27 sufrieron lesiones.

Pese a las reticencias de la FGR, los abogados de la FJEDD lograron impedir el cierre temprano de la carpeta de investigación para obligar los agentes ministeriales a ampliar sus indagaciones, a tomar los testimonios de los sobrevivientes, a revisar los antecedentes de incendios en estaciones migratorias –se reportaron al menos 10 casos desde 2019– y a determinar que el recinto no tenía las condiciones mínimas para ser un centro de detención.



La tragedia en Chiapas de 2021: 56 muertos

Foto: AP photo



Migración. Corrupción e impunidad

Foto: Yahir Ceballos

La carpeta de investigación de la FGR derivó en siete causas penales, cada una con diversas personas imputadas o detenidas por diversos delitos. El contralmirante Salvador González Guerrero, quien era titular de la oficina del INM en Chihuahua, permanece preso, pero busca una revisión de su medida cautelar para seguir su juicio en libertad. La audiencia inicial del caso está programada para agosto próximo.

El INM, por su parte, ofreció a las familias de las víctimas una bolsa de 140 millones de pesos como "solución alternativa" para evitar el enjuiciamiento de Francisco Garduño Yáñez, el comisionado del INM.



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Abusos y malversaciones

En los últimos tres años, organizaciones y activistas han exhortado al presidente Andrés Manuel López Obrador a sustituir a Garduño al frente del INM para que rinda cuentas por los casos de violaciones graves a los derechos humanos de los migrantes, pero sus reclamos quedaron en letra muerta. De hecho, en la investigación sobre el incendio de Ciudad Juárez, el funcionario está imputado por ejercicio indebido del servicio público.

Garduño, quien era el encargado de las cárceles federales, tomó el control del INM en el verano de 2019, con la misión de aplicar la política de contención migratoria que el gobierno de López Obrador acordó en junio de ese año con el gobierno de Donald Trump. El nuevo comisionado colocó a mandos militares en delegaciones del INM y el gobierno desplegó la Guardia Nacional para apoyar en la revisión y detención de migrantes en las carreteras.

Como producto de la militarización de la política migratoria, el número de aprehensiones se disparó: en 2023 el INM detuvo y "canalizó" a 686 mil 732 migrantes, tres veces más que en 2019.

El año pasado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que Garduño mantuvo en su equipo a 18 agentes que habían reprobado el proceso de certificación de confianza, usando como pretexto motivos de "seguridad nacional".

En un contexto de más de una década de agresiones y desaparición de migrantes, que padecen un importante subregistro –según la FJEDD, la FGR sólo ha recibido 38 denuncias por secuestro de migrantes entre 2006 y 2022–, la política de contención provocó un aumento de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, de las que la masacre de Camargo, el accidente de Chiapa de Corzo y el incendio de Ciudad Juárez son representativas.

Tan sólo el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió dos mil 493 denuncias por abusos perpetrados por agentes del INM, al ritmo promedio de 6.8 quejas por día. En su informe anual, el organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra señaló que emitió 37 recomendaciones ordinarias al INM en 2023, "que suman un total de 67 en lo que va de la actual gestión, un número sin precedentes en la historia de la CNDH", aseveró.

El INM ocupa el tercer sitio de las dependencias más denunciadas por violaciones a los derechos humanos, detrás del IMSS y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

El 9 de febrero último, la misma CNDH publicó un informe demoledor sobre las condiciones de detención de las personas migrantes en 49 estaciones del INM en 29 estados, a las que equiparó con "centros penitenciarios": documentó que los agentes migratorios y custodios cometen maltratos –incluyendo golpes, insultos o humillaciones–, que los centros de deten-



ción suelen tener una sobrepoblación de hasta 200% e impera la falta de atención médica.

Además, bajo la gestión de Garduño, el INM malversó recursos millonarios. En 2020, por ejemplo, la dependencia entregó más de 230 millones de pesos a empresas fantasma mediante contratos con sobrepagos, las cuales dispersaron el dinero en Estados Unidos, Israel, Suiza y Panamá. Estas empresas estaban vinculadas con la red de compañías del empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, conocido como el vende-

A raíz del incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez, tanto la ASF como la Secretaría de la Función Pública (SFP) analizaron las contrataciones del INM para las "instalaciones de albergues y puntos de revisión migratoria" en el país, y detectaron irregularidades graves. La SFP revisó los contratos de vigilancia entre 2019 y 2021 y observó 19 irregularidades en la administración de las empresas contratadas para custodiar los centros de detención.

La ASF, por su lado, determinó que la dependencia había adjudicado directamente contratos multimillonarios a empresas extrañas, como Grupo CauFi, una compañía de apenas 11 empleados que nunca había obtenido un contrato gubernamental superior a un millón de pesos, y que en 2021 recibió uno de 545 millones 532 mil pesos por parte del INM.

La ASF determinó otras irregularidades en el otorgamiento de un contrato por 151 millones 439 mil pesos a Grupo de Seguridad Privada Camsa, la cual estaba a cargo de la custodia de la estación migratoria de Ciudad Juárez cuando se incendió. Esta compañía apenas tenía cuatro trabajadores registrados ante el IMSS, y su domicilio era un inmueble desocupado.

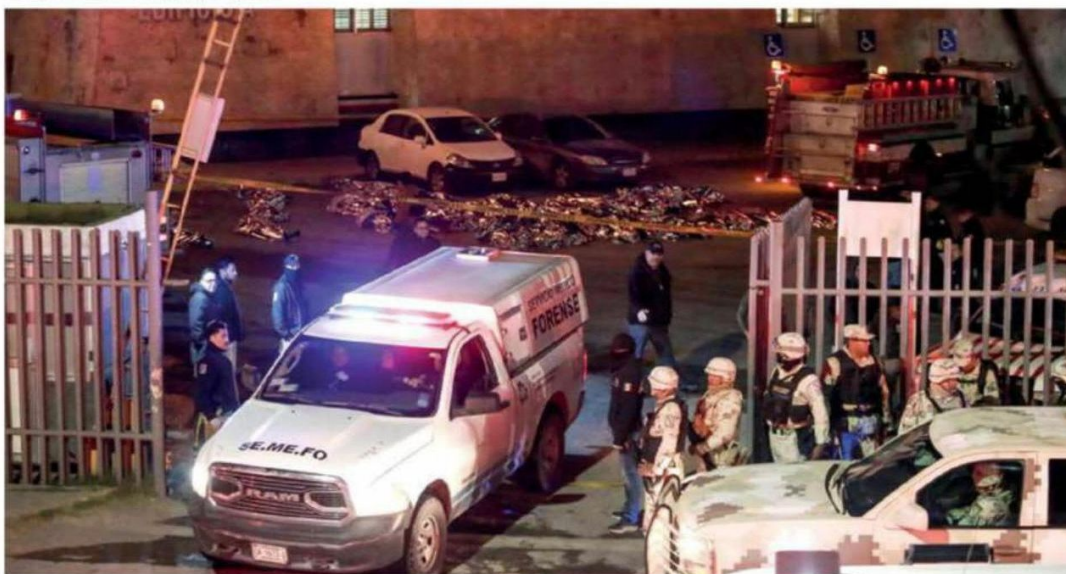
En su auditoría 13/2023, la SFP descubrió que, en 2022, la empresa no contaba con los permisos necesarios para operar en todos los estados de la República, lo que era un requisito para la entrega del contrato; también observó que la empresa subcontrató a los custodios sin registrarlos ante el IMSS, y que cobró por cientos de turnos no cubiertos. 🗑️

En un contexto de más de una década de agresiones y desaparición de migrantes, que padecen un importante subregistro –según la FJEDD, la FGR sólo ha recibido 38 denuncias por secuestro de migrantes entre 2006 y 2022–, la política de contención provocó un aumento de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes

dor del spyware Pegasus a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de López Obrador.

Incendio de la estación migratoria en 2023: 40 muertos

Foto: Christian Chavez /AP photo





Vuelo en globo

Lo encontré.

Conoce más en:
queretaro.travel

Tequisquiapan
Vuelo en Globo

SECRETARÍA DE
TURISMO
QUERÉTARO

QUERÉTARO
Y ENTONCES ENCONTRÉ MÉXICO.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



POLÍTICA

COYOMEAPAN

Entre caciques y la indiferencia oficial, así sobrevive uno de los municipios más pobres

Harta de la corrupción y los abusos de David y Araceli Celestino –ésta última diputada federal por el PT y candidata a una diputación local–, la gente del municipio nahua de Santa María Coyomeapan expulsó al alcalde Rodolfo García, impuesto mediante fraude y violencia por los Celestino, y tomó las instalaciones oficiales. Pese a que en los hechos no ejerció el cargo, García recibió el presupuesto y lo reportó como gastado en diversas obras, que los pobladores señalan como inexistentes o trucas. Y mientras el gobierno federal desoye las denuncias, el gobierno de Puebla ofrece salidas parciales o inviables al conflicto social que ya causó la ejecución extrajudicial de tres personas.

GABRIELA HERNÁNDEZ

SANTA MARÍA COYOMEAPAN, Pue.- En los dos años y cuatro meses que duró su gestión como alcalde, Rodolfo García López, del Partido del Trabajo (PT) y cuya familia mantiene su cacicazgo en el municipio, gastó el presupuesto superior a 260 millones de pesos de la demarcación nahua, una de las más pobres del país, sin ejercer el cargo y dejando a la población inmersa en una crisis política y social.

El 23 de febrero último, cuando faltaban menos de ocho meses para que concluyera su periodo, García López –esposo de la diputada federal Araceli Celestino, también del PT– solicitó licencia para separarse de un cargo que no ejerció, pues, según los habitantes, todo ese tiempo radicó en la ciudad de Tehuacán y apenas fue de manera esporádica a cuatro de las 44 localidades que conforman Coyomeapan.



COYOMEAPAN
Entre caciques y la indiferencia oficial,
así sobrevive uno de los municipios
más pobres

Entre caciques y la indiferencia oficial, así sobrevive uno de los municipios más pobres. En el municipio de Santa María Coyomeapan, Puebla, los habitantes se enfrentan a la corrupción y la violencia. El alcalde, Rodolfo García López, del Partido del Trabajo (PT), fue expulsado por los habitantes por no ejercer el cargo y haber gastado el presupuesto en obras inexistentes o trucas. La diputada federal Araceli Celestino, esposa de García, también del PT, solicitó licencia para separarse de un cargo que no ejerció. El gobierno federal desoye las denuncias, y el gobierno de Puebla ofrece salidas parciales o inviables al conflicto social que ya causó la ejecución extrajudicial de tres personas.

SANTA MARÍA COYOMEAPAN, Pue.- En los dos años y cuatro meses que duró su gestión como alcalde, Rodolfo García López, del Partido del Trabajo (PT) y cuya familia mantiene su cacicazgo en el municipio, gastó el presupuesto superior a 260 millones de pesos de la demarcación nahua, una de las más pobres del país, sin ejercer el cargo y dejando a la población inmersa en una crisis política y social.

POLÍTICA

Rodolfo García López. El derroche de 260 millones de pesos

Foto: Especial



David Celestino. Cacicazgo

Foto: Especial



Araceli Celestino. Corrupción

Foto: Especial



Esta situación prevaleció desde el arranque de su trienio, el 15 de octubre de 2021, cuando el ahora exedil tuvo que rendir protesta en el vecino municipio de Ajalpan —a más de hora y media de Coyomeapan— y desde entonces no pudo ingresar a la mayor parte del territorio, donde se supone fungía como presidente municipal, debido a que los pobladores que se oponen a él y a su familia montaron filtros en los accesos carreteros para impedirle el paso.

No obstante, el ayuntamiento, encabezado por García López, recibió las partidas presupuestales que correspondían al municipio y emitió informes en los que asegura haberlo gastado todo.

Pero García incumplió con las funciones que el artículo 115 constitucional le confiere a la autoridad municipal, como son brindar seguridad pública, limpieza, mantenimiento de calles, mercados y panteones, entre otras. Tampoco operó oficinas de recaudación, ya que el ayuntamiento reportó haber recabado cero pesos tanto por predial como por servicio de agua en 2022 y 2023.

En Coyomeapan no hay policía municipal. Desde el 22 de agosto de 2021 los habitantes expulsaron de su territorio a los integrantes de esa corporación. Ni siquiera hay patrullas y policías locales en la comunidad de San Juan Cuautla que, según la versión de García López, fue sede alterna del ayuntamiento.



POLÍTICA

Señalamientos contra los Celestino

Foto: telediario.mx/comunidad/



Durante este tiempo los pobladores se han organizado para suplir los servicios públicos con faenas y con recursos propios. Para su seguridad, participan en guardias comunitarias y nombran representantes que actúan como árbitros cuando surgen conflictos o alguien incurrir en faltas administrativas.

Al anunciar su separación del cargo, García López argumentó que lo hacía para que en este municipio se puedan desarrollar los comicios de 2024 "de la mejor manera".

En tanto, su esposa, la diputada federal Araceli Celestino, desplegó una intensa campaña para buscar la candidatura a la alcaldía de Tehuacán por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Sin embargo, al final sólo logró la postulación para la diputación local por el Distrito 25 de ese municipio.

Ante los reclamos de los pobladores de Coymeapan, el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, dio por hecho que la salida del edil resolvía la crisis, pues al realizarse las votaciones se renovará el ayuntamiento.

De acuerdo con integrantes de Unidad por Coymeapan, la resistencia se dividió porque el gobierno cooptó a algunos miembros y —como una forma de desarticularlos— dio voz a gente de Antorcha Campesina, organización que busca quedarse con el control político del municipio.

El 5 de marzo último, un habitante de nombre Armando Ramos fue asesinado en un ataque, en el contexto de la pugna electoral.

A partir de ese crimen, los filtros que los vecinos mantuvieron por más de dos años fueron retirados. Y a mediados de marzo, representantes de comunidades plantearon la posibilidad de suspender las votaciones del 2 de junio próximo en esta demarcación.

Al cierre de esta edición, la población estaba dividida entre los antorchistas que sostienen que hay condiciones para los comicios y líderes comunitarios que temen que en este contexto se desate más violencia, los Celestino busquen su retorno o gane otra fuerza política que cometa aún más atropellos.



Origen de la crisis

Coyomeapan se ubica en la Sierra Negra, la región con mayor grado de marginación de Puebla. De acuerdo con el Inegi, 88% de sus habitantes habla una lengua indígena; 95.5% vive en la pobreza y 74.5% percibe ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema, lo que coloca al municipio entre los 100 más pobres de México.

El conflicto social estalló la noche de las votaciones del 6 de junio de 2021, cuando distintas fuerzas políticas, sociales y religiosas conformaron el movimiento de resistencia Unidad por Coyomeapan, para oponerse al cacicazgo de los hermanos David y Araceli Celestino Rosas, quienes desde 2011 se turnaron por tres periodos la presidencia municipal.

Como otros grupos caciquiles de Puebla, los Celestino Rosas primero fueron priistas. Luego, en tiempos del gobernador panista Rafael Moreno Valle, se aliaron con éste y después se pasaron al lopezobradorismo —que antes combatieron— y a la llamada 4T, vía el PT.

Los habitantes denunciaron que, en días previos a los comicios de 2021, guardias blancas al servicio del entonces alcalde saliente David Celestino ingresaron a casas y agredieron a familias indígenas, a las que amenazaron o despojaron de credenciales de elector para imponer el triunfo en las urnas de García López, esposo de Araceli Celestino.

Los lugareños protestaron por el fraude y tomaron las instalaciones electorales. El 22 de agosto siguiente hicieron lo mismo con la Presidencia Municipal, la comandancia de la policía y el auditorio. Además, resguardaron con candados patrullas, vehículos oficiales, armas y municiones, y por ello no existe autoridad municipal.

Desde entonces expusieron públicamente las causas de su hartazgo. Por ejemplo, los Celestino recibieron recursos para construir en la cabecera municipal un campus universitario, un mercado, una casa de cultura, un hospital y una Casa del Abuelo, inmuebles que reportaron en operación,

pero que nunca fueron terminados de edificar y se encuentran en ruinas o son cascarones.

Asimismo los pobladores acusaron a esa familia de apropiarse de un paraje boscoso que era del municipio y de recursos de un programa federal, para construir cabañas que usufructuaban como campo turístico.

Pero lo que acabó por unir a la población contra los Celestino fue la preocupación por la presencia de gente armada y talamontes que depredaban los bosques en esa localidad, al tiempo que se disparó la venta y consumo de drogas, en particular cristal.

De acuerdo con el *Periódico Oficial del Estado*, entre el último trimestre de 2021 y diciembre de 2023 la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla entregó al ayuntamiento que encabezó García López 101.8 millones de pesos por participaciones federales; 25.7 millones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y 138.6 millones del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (Faismun).

En 2022 el entonces edil destinó 10.4 millones de pesos —según contratos que publicó en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)— para abrir una brecha entre Santiago Texcalcingo, en el estado de Oaxaca, y la junta auxiliar de San Juan Cuautla, en este municipio.

Mediante ese camino García pudo llegar a las poblaciones de Tepepa de Zaragoza, Tequixtepec, Huitzilatl y al propio San Juan Cuautla, donde radican mil 817 pobladores, que representan sólo 12% de los 14 mil 806 que habitan esta demarcación.

Pero vecinos de Cuautla relatan a **Proceso** que este camino no era una demanda de esta comunidad y sólo

se abrió para que García López tuviera una forma de entrar allí, donde el presidente auxiliar Abelardo Bolaños es su aliado político. Afirman que esta brecha más bien los ha perjudicado, pues ahora es usada por la delincuencia para entrar y salir de la zona.

A su vez, García López sostuvo que había gobernabilidad de Coyomeapan porque él instaló una sede alterna del Ayuntamiento en San Juan Cuautla, pero los pobladores dicen que ahí no despachó de manera permanente, ni operaron oficinas municipales. Cuando se necesitaba localizar al alcalde había que buscarlo en Tehuacán, a más de dos horas y media por carretera.

Los vecinos dicen que la última vez que vieron al municipal en Cuautla fue en octubre de 2023, cuando hizo una ceremonia para presentar su segundo informe.

... POLÍTICA

Gastos en entredicho

En la Plataforma Nacional de Transparencia, el ayuntamiento de Coyomeapan publicó un resumen de la Cuenta Pública 2022 en el que reporta ingresos por 115 millones de pesos y egresos de 113 millones: de éstos, 15 millones dice haberlos aplicado en el funcionamiento del ayuntamiento, 3.4 para ayudas y 94.8 en inversión pública.

Entre los gastos de funcionamiento se incluyó la nómina de 60 supuestos empleados de la comuna, pero el 30 de octubre de ese año el Comité Municipal de Transparencia declaró confidenciales los nombres de los trabajadores, alegando que su integridad física estaba en riesgo.

Al revisar los contratos que el expresidente municipal publicó en 2022, salta uno por 636 mil pesos para edificar dos canchas multiusos en la Segunda Sección de Coyomeapan, localidad a la que no ha ingresado y en donde no existen tales instalaciones.

Entre otros, el Ayuntamiento informa haber ejercido nueve millones de pesos en la construcción de cuartos dormitorio, sin especificar dimensiones, materiales ni la cantidad de edificaciones o beneficiados.

En Tequixtepec, una localidad de 131 habitantes y sólo 31 viviendas, García López reporta haber usado 3.4 millones de pesos para construir ese tipo de cuartos. Ahí, refiere un vecino, el ayuntamiento ofreció 50 dormitorios, pero sólo se iniciaron 25 y, con fotografías, muestra que esas construcciones a la fecha están sin terminar.

Otra obra que cuestionan está en Tepepa de Zaragoza. García López anunció en 2022 que edificaría un plantel para estudiantes de bachillerato. Sin embargo, sólo inició los trabajos y a la fecha en el terreno sólo hay materiales, piedras y una retroexcavadora.

En la revisión de la Cuenta Pública de 2022 del gasto federalizado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó un monto de 9.4 millones de pesos entregados a este municipio y detectó irregularidades en 100% de su aplicación. En las observaciones se menciona la compra de una camioneta Tundra por 530 mil pesos para Seguridad Pública, sin que el gobierno municipal haya prestado ese servicio a los habitantes.

En 2023 la administración del petista recibió 132 millones de pesos de participaciones federales a través de las partidas de Fortamun y Faismun. No obstante, en la página de la PNT no transparentó ningún gasto de ese año.

Ingobernabilidad

Inés Parra Juárez, diputada federal por Morena en el distrito de Ajalpan —que incluye a Coyomeapan—, señala que desde que los pobladores cerraron el paso a García López eran claras las condiciones de ingobernabilidad en el municipio, pero autoridades estatales y federales fueron omisas para actuar. En particular, indica, el Congreso de Puebla, donde Morena tiene mayoría.

El Artículo 57 de la Ley Orgánica municipal de Puebla establece, entre las causas para que el Congreso declare la desaparición de un Ayuntamiento, el que se suscite un conflicto “entre éste y la población del municipio que haga imposible el cumplimiento de los fines del mismo o el ejercicio de sus funciones”.

Parra, quien ha sido una voz crítica en Morena, advierte que ahora los legisladores poblanos son cómplices de los actos de corrupción que pudieron cometerse al haber permitido que se entregara el presupuesto a un alcalde imposibilitado para ejercer en plenitud el cargo.

Expone que el lema de Morena de “primero los pobres”, es sólo retórica, ya que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido conocimiento de este conflicto y ella misma informó en su momento a Alejandro Encinas cuando éste ocupaba la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, pero fueron omisos para impedir más injusticias contra este pueblo.

La diputada refiere que ni aun el asesinato de tres indígenas de este municipio, entre ellos un menor, el 9 de mayo de 2022 —calificado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como una ejecución extrajudicial— ameritó que se actuara para salvaguardar la seguridad y los derechos de esta comunidad se opuso a uno de los muchos cacicazgos que subsisten en Puebla.

Hasta ahora no se ha esclarecido la autoría intelectual de esa emboscada perpetrada por policías estatales ni la de otros ataques armados a esta comunidad.

Claudia Martínez, dirigente del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas (Conapa), dice que el conflicto postelectoral pudo resolverse en sus inicios si las autoridades estatales y federales hubieran atendido el hartazgo legítimo de los pobladores de Coyomeapan.

Sin embargo, sostiene, prevalecieron los acuerdos políticos que hizo con los Celestino el entonces gobernador Miguel Barbosa, y después su primo Julio Huerta Gómez, quien fue aspirante a candidato a gobernador por Morena.

La activista de Conapa recuerda que fue en el contexto de las primeras mesas de negociación que establecieron en el gobierno de Barbosa Huerta cuando fueron detenidos y apresados cuatro representantes de esta lucha, entre ellos la maestra Basilia Montaña, exconsejera del Instituto Nacional de las Mujeres, a quien le fabricaron "cargos absurdos" como robarse un sobre con dinero. También se giraron órdenes de aprehensión contra 32 pobladores que a la fecha siguen vigentes.

Aparte, agrega, este municipio ha sido "castigado" por el gobierno estatal, el cual le retiró el servicio del Registro Civil, así que la mayoría de niños que nacieron en estos dos años no cuentan con acta de nacimiento; tampoco se han expedido certificados de defunción.

El 17 de marzo último, con la presencia de observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), líderes nahuas acordaron que a principios de abril votarán en asamblea comunitaria si se suspenden los comicios y proponen elecciones extraordinarias bajo la observación de organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la CNDH.

Mientras tanto, se plantean nombrar un concejo municipal integrado por todas las corrientes políticas y religiosas del municipio.

La salida del edil García López, sostienen, realmente no dio respuesta a sus demandas como castigo para los Celestino, justicia para los indígenas asesinados y el retiro de órdenes de aprehensión que siguen vigentes contra miembros de este movimiento.

"La lucha se inició contra las corruptelas que cometieron los Celestino durante 11 años y ahora resulta que se sumaron tres años más", resume uno de los líderes. 📍



También dan "apoyo técnico" para ataques del narco con drones

RAFAEL CRODA

BOGOTÁ.- Los ataques con drones que realizan organizaciones criminales de México contra el Ejército y grupos rivales han tenido el "apoyo técnico" de exmilitares colombianos que trabajan para los cárteles del narcotráfico de ese país, aseguran oficiales retirados de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Las fuentes, que hablaron con **Proceso** con la condición de permanecer en el anonimato, afirman que entre los exsoldados profesionales colombianos que han sido reclutados por los cárteles mexicanos de la droga hay especialistas en la operación de drones y en el manejo de explosivos.

"Lo que sabemos es que los (exmilitares) colombianos han transferido conocimiento a los (cárteles) mexicanos para 'armar' drones con

artefactos explosivos de alto poder destructivo", señala un exoficial del Ejército de Colombia.

Afirma que él mismo ha servido de enlace para enviar a México a explosivistas y a operadores de drones capacitados en la Escuela Básica de Aeronaves Remotamente Tripuladas de la Fuerza Aeroespacial de Colombia.

"Un explosivista y un piloto de drones son una mancuerna mortífera que puede inclinar la balanza en una guerra irregular como la que se pelea (por parte de las organizaciones del crimen organizado) en México", señala.

Otras de las fuentes consultadas afirma que los operadores colombianos de drones forman parte, por lo regular, de unidades de inteligencia que realizan reconocimiento de terreno para ubicar posiciones

de organizaciones criminales y obtener información de sus movimientos, pero "fácilmente pueden usar ese conocimiento para desarrollar operaciones ofensivas" con esos aparatos.

Los ataques con drones ocurridos en México se concentran en los estados de la costa del Pacífico, como Baja California, Guerrero y Michoacán, precisamente donde se concentran las operaciones de los cárteles mexicanos que más exmilitares colombianos han reclutado: el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Un teniente retirado del Ejército de Colombia afirma que esas organizaciones del narcotráfico adquieren drones comerciales chinos que son adaptados como armas del aire con explosivos como C4, TNT y

Amonal, y con granadas de mano y morteros que estallan al hacer impacto con un objetivo.

"Son drones kamikaze que pueden funcionar como una fuerza aérea híbrida. Eso les da a los cárteles una ventaja táctica", señala el exteniente.

De acuerdo con un exsoldado profesional, en un grupo de WhatsApp de sus antiguos compañeros de armas se ha llegado a comentar que en México "hay colombia-

nos armando esos artefactos", los cuales son cada vez más utilizados por las organizaciones criminales mexicanas.

Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, los ataques de drones de la delincuencia cargados con explosivos pasaron de cinco en 2020 a 260 en el primer semestre de 2023.

El pasado 13 de marzo, un cartel de las drogas —presuntamente La Familia Michoacana— atacó con

drones cargados de explosivos un poblado de la Sierra de Tecpan de Galeana, en el suroccidental estado de Guerrero.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha realizado ataques con esos artefactos en varios estados, incluso en el occidental Michoacán, donde el pasado 29 de febrero murieron cuatro soldados en una emboscada que incluyó el uso de drones.

"Ahí hay mano colombiana", asegura uno de los exoficiales colombianos que habló con esta revista.

El secretario mexicano de Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, anunció el pasado 8 de marzo que el Ejército adquirirá tecnología para "contrarrestar la acción de los drones" y para ubicarlos y destruirlos antes de que causen daño.

El Congreso mexicano debate una iniciativa de ley para sancionar con penas de entre 20 y 53 años de prisión a quienes utilicen drones para atacar a la población o a las fuerzas militares. ●



Tecnología china y operadores colombianos en el narco
Foto: Juan José Estrada Serafin

..... NARCOTRÁFICO

Cárteles mexicanos reciclan a militares y exguerrilleros colombianos

Por medio de cuentas de WhatsApp, los narcotraficantes mexicanos reclutan a francotiradores, instructores de fuerzas especiales, comandos de operaciones urbanas, guías caninos, enfermeros, explosivistas, pilotos de drones y exguerrilleros, a quienes pagan generosamente. Esos elementos son muy valorados por su experiencia combatiendo terroristas y estructuras del narco en su propio país; la ganancia para el crimen organizado es doble: capta elementos altamente capacitados e instructores para su gente.



Foto: Especial

RAFAEL CRODA

BOGOTÁ.- Los principales cárteles mexicanos del narcotráfico están incorporando a sus filas a "decenas" de exmilitares colombianos con experiencia en guerra irregular para mejorar las "capacidades tácticas" de sus estructuras armadas.

Fuentes de inteligencia militar y exoficiales de rango medio involucrados en el proceso de reclutamiento dijeron a **Proceso** que, con esos hombres, que en su mayoría tienen entrenamiento de comandos, los cárteles están conformando unidades de élite para actuar con "mayor fuerza letal" frente a grupos enemigos en diferentes regiones de México.

Las fuentes consultadas afirman que, entre los exintegrantes del Ejército colombiano que están viajando a México "contratados" por las organizaciones del narcotráfico, hay francotiradores, instructores de fuerzas especiales, comandos de operaciones urbanas, guías caninos, enfermeros, explosivistas y pilotos de drones.

En la mayoría de los casos son militares retirados de alrededor de 40 años de edad, tras 20 años de servicio, que están en plenitud de facultades y han sido fogueados durante mucho tiempo en combates contra grupos armados irregulares, como guerrillas y estructuras del narcotráfico.

"Los narcotraficantes mexicanos se están llevando a personal militar de capacidades diferenciadas, porque eso les ha dado muy buenos resultados en sus guerras por el control de territorios y porque la ganancia para ellos es doble: ganan combatientes altamente capacitados y ganan instructores para su gente", indica una de las fuentes.

Varias fuentes con las que habló esta revista coinciden en que los cárteles mexicanos que más colombianos han reclutado son el de Sinaloa (CDS), el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Hasta Comandos Jungla

Según conoció este medio, dentro del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército de Colombia (identificado orgánicamente como CEDE2) se ha planteado la necesidad de realizar una "investigación de campo" sobre el tema y "tomar medidas" para prevenir el daño institucional que podrían causar las actividades ilegales de exmilitares colombianos en el extranjero.

En julio de 2021, al menos 24 mercenarios colombianos, en su mayoría militares en retiro, participaron en el asesinato del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo que llevó a políticos de Colombia a pedir al Ejército implementar algún tipo de monitoreo sobre exintegrantes de la institución que viajen al extranjero.

El CEDE2 habría tomado desde entonces medidas de control preventivo, lo que le habría permitido detectar en el último año y medio un "aumento inusual" de viajes de exmilitares colombianos a México, según una de las fuentes que habló con esta revista.

Asegura que, además de militares retirados, a México han viajado jóvenes soldados profesionales, menores de 30 años, que recién dejaron el Ejército, así como expolicías colombianos. Al menos uno de ellos, paradójicamente, formó parte de los Comandos Jungla, una unidad de élite de la Dirección Antinarcóticos (Diran) de la Policía Nacional de Colombia.



NARCOTRÁFICO

Chats de reclutamiento

Foto: Especial

Según uno de los exoficiales del Ejército que ha participado en las labores de reclutamiento para los cárteles mexicanos, hay información que indica que éstos también han incorporado a sus estructuras sicariales a desmovilizados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la desaparecida insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Hay tantos colombianos trabajando para los cárteles (mexicanos) que se han dado casos de enfrentamientos entre grupos en los que hay colombianos de lado y lado y terminan dándose bala entre ellos", señala el exoficial.



RAFAEL CRODA

Se fueron a México y "no se sabe nada de ellos"

BOGOTÁ.- El exsoldado profesional colombiano José Macana viajó a México a finales de agosto pasado para trabajar, supuestamente, como escolta en una empresa de seguridad. Al llegar a ese país, sin embargo, resultó que el verdadero contratante era un cartel de las drogas con operaciones en los estados de Michoacán y Guerrero.

La esposa del militar retirado, Maritza, quien omite su apellido porque tiene miedo, dice a esta revista que desde el 15 de noviembre pasado no sabe nada de su marido, con quien tiene dos hijos.

"Al principio, cuando llegó allá —dice Maritza— hablábamos todos los días por (videollamadas de) WhatsApp, estaba contento, pero luego comenzó a decirme, en clave, porque no podía hablar bien, que lo habían engañado, que las cosas no estaban bien".

De Michoacán, estado al que llegó con otro exmilitar colombiano con el que viajó a México, lo trasladaron a Guerrero, donde se volvió a comunicar con su esposa.

"Me dijo que los tenían aguantando hambre y se veía muy delgado. Ahí había más colombianos. Sé que hay muchos allá trabajando", cuenta Maritza.

El exsoldado José Macana, quien formó parte del Regimiento de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano, cumplió 50 años de edad en México. Han pasado cinco meses sin noticias de él.

La señora Maritza llora cuando habla de su esposo. Ella tiene esperanzas de encontrarlo con vida, pero llama a los gobiernos de México y Colombia a que unan esfuerzos para poder hallarlo e investigar a los responsables de su desaparición.

"Les pido de todo corazón que me ayuden a buscarlo; tengo fe en encontrarlo con bien", señala.

Ella presentó una denuncia por desaparición ante la Fiscalía General de Colombia, pero le advirtieron que sería un proceso lento porque tendrían que pedir la colaboración de México.

"Aquí falta justicia —dice— porque las personas que se los están llevando (los intermediarios) son colombianos que saben que están engañando a otros colombianos al ofrecerles un trabajo que no es legal".

El sargento que apareció

Otro exmilitar colombiano, el sargento retirado Andrés Mauricio Cáceres, quien había viajado a México el pasado 12 de marzo y había desaparecido, fue localizado el pasado domingo 24, luego de que su esposa, Jelen Johanna Marulanda, hizo un llamado desesperado para que le ayudaran

a encontrarlo. El propio presidente, Gustavo Petro, anunció un día después que el exmilitar había sido hallado en buen estado y que sería repatriado por la Embajada de Colombia en México.

Su esposa había perdido contacto con él desde el 17 de marzo último. Lo único que sabía de su marido es que luego de unos días de permanecer en el estado de Michoacán se escapó de "las personas" para las cuales trabajaba y andaba huyendo de ellos "en el monte".

En su última comunicación él le había dicho que nada de lo que le habían prometido era verdad "y que sus principios no le permitían estar allí", por lo cual decidió escaparse del grupo que lo había contratado para supuestas labores de seguridad.

En un video que difundió el pasado 22 de marzo la Asociación Colombiana de Soldados e Infantes de Marina Profesionales en Retiro y Pensión de las Fuerzas Militares (Acosipar), Jelen Johanna aparece llorando.

"No sé qué hacer —aseguró—, nadie me da una razón, simplemente me dicen 'vaya a la Cancillería a Bogotá y haga la denuncia'. Tengo mucho miedo y temo por su vida".

El presidente de la Acosipar, el



NARCOTRÁFICO

Dice que el incentivo de los exmilitares y expolicías que viajan a México es puramente económico.

"Allá les ofrecen de 2 mil 500 a 4 mil dólares por mes y eso es mucho dinero para soldados profesionales en situación de retiro", asegura.

Cada año se retiran de las Fuerzas Militares de Colombia unos 10 mil 500 efectivos que, en su mayoría, reciben pensiones mensuales de entre un millón 300 mil pesos colombianos (unos 335 dólares) y tres millones 150 mil pesos colombianos (unos 800 dólares).

En la mayoría de los casos son militares retirados de alrededor de 40 años de edad, tras 20 años de servicio, que están en plenitud de facultades y han sido fogueados durante mucho tiempo en combates contra grupos armados irregulares, como guerrillas y estructuras del narcotráfico.

exsoldado Raúl Musse Pencue, dice a esta revista que tiene conocimiento de que varios exmilitares colombianos que han viajado a México a trabajar para los cárteles de la droga —algunos con engaños, otros con conocimiento de que se involucrarían en una actividad ilegal— siguen perdidos en ese país, algunos desde hace varios meses.

"Tenemos información de que hay varios exmilitares colombianos desaparecidos en México", asegura.

Exigencia para México y Colombia

De acuerdo con Musse Pencue, quien tiene entrenamiento de comando, señala que incluso uno de sus amigos, también con experiencia en fuerzas especiales, fue reclutado en 2023 por un cartel mexicano junto con otros exmilitares colombianos, y desde octubre pasado "no se sabe nada de ellos, están perdidos".

Explica que familiares de los exmilitares le han comentado que fueron contratados para trabajar "en seguridad", pero que "ya a lo último, estaban con grupos de dudosa reputación" que no dan razón de su paradero.

"Yo llamo a los gobiernos de Colombia y México a coordinar acciones para buscar a estos compañeros y para abordar conjuntamente este problema que afecta la seguridad de los dos países", señala Musse Pencue.

El presidente de la Asociación Colombiana de Soldados e Infantes de Marina Profesionales en Retiro y Pen-

sión de las Fuerzas Militares (Acosipar) agrega que la búsqueda de empleo de los militares colombianos retirados en el exterior se produce porque sus pensiones "son muy bajas" y el mercado laboral interno es limitado. Según dice, fuera de Colombia es conocido el buen nivel de entrenamiento que tienen.

El investigador y docente de la Universidad Externado de Colombia, Andrés Macías Tolosa, señala que las actividades ilegales son "una posibilidad más" que se les presenta a los exintegrantes de las Fuerzas Militares y esto se debe a la débil política de la institución hacia los veteranos, quienes no cuentan con una adecuada atención social, psicosocial y económica y se retiran relativamente jóvenes, a los 38 o 40 años, con muchos años de vida laboral por delante.

"Eso abre la posibilidad de que puedan ser reclutados por actores ilegales, como los cárteles mexicanos, o como mercenarios, como ocurrió con los que participaron en el asesinato del presidente de Haití (Jovenel Moïse)", afirma.

Para el doctor en estudios de paz y conflicto de la Universidad de Tokio y profesor de la materia "Mercenarios y seguridad privada" en la Universidad Externado, el reclutamiento de exmilitares colombianos de élite por parte de cárteles mexicanos apunta



Militares colombianos: si no se van a Ucrania, terminan en México

Foto: @cgfm.mil.co

a convertirse "en un tema muy complejo de seguridad" para México.

De acuerdo con Macías Tolosa, para las Fuerzas Militares de Colombia también es un asunto delicado por la cantidad de personal que se retira cada año —10 mil 500 hombres— con un alto nivel de capacitación para la guerra y con pensiones que en muchos casos no les alcanzan para mantener a sus familias.

El académico recomienda reforzar las políticas para los veteranos y tomar medidas que les permitan una vida digna después de pasar a retiro. Por ejemplo, dice, las Fuerzas Militares podrían capacitarlos en oficios que amplíen sus posibilidades laborales.

..... NARCOTRÁFICO

Unos cinco mil exmilitares colombianos combaten en el extranjero

Foto: @cgfm.mil.co

Esto significa que, en México, pueden quintuplicar y hasta septuplicar los ingresos que tienen en Colombia, lo que resulta atractivo no sólo para los militares pensionados sino también para jóvenes en activo cuyos salarios en el Ejército, como soldados profesionales y suboficiales, oscilan entre 450 y 900 dólares cada mes.

Reclutamiento en línea

El sistema de reclutamiento en Colombia comienza en los cientos de grupos de WhatsApp de exmilitares, en los cuales participan miles de soldados profesionales, suboficiales y oficiales activos y en retiro, quienes se integran en comunidades digitales de acuerdo con sus coincidencias generacionales y sus especialidades, o según los regimientos y unidades en los que han prestado servicios.

En esos grupos se ofrecen trabajos legales e ilegales y se corre la voz sobre lugares en los cuales puede haber oportunidades de empleo.

Cuando las ofertas son para trabajos legales, llegan de empresas de seguridad privada en Colombia. Pero a esos grupos de WhatsApp también llegan propuestas para incorporarse a las Fuerzas Armadas de Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Ucrania.

Esto significa que, en México, pueden quintuplicar y hasta septuplicar los ingresos que tienen en Colombia, lo que resulta atractivo no sólo para los militares pensionados sino también para jóvenes en activo cuyos salarios en el Ejército, como soldados profesionales y suboficiales, oscilan entre 450 y 900 dólares cada mes.

En estos últimos casos siempre hay de por medio contratos de prestación de servicios, seguros de vida, vacaciones, pasajes aéreos y muy buenos sueldos, que varían entre 3 mil dólares, para un soldado regular con entrenamiento de comando, y 12 mil dólares para un oficial con grado de mayor.

Pero el proceso de selección para ingresar a las Fuerzas Armadas de Dubái o de los EAU es extremadamente riguroso, los cupos son limitados y las convocatorias son esporádicas. La siguiente mejor opción para los exmilitares colombianos es Ucrania, donde se libra una cruenta guerra regular contra el poderoso y bien equipado Ejército ruso.

En Ucrania, donde el contratante es el Ministerio de Defensa de ese país, los salarios son atractivos —al menos tres mil 500 dólares—, pero el riesgo de morir en combate es muy alto. Esto, porque los mercenarios son enviados a la primera línea del frente para luchar contra las fuerzas rusas.

Además, los extranjeros interesados en alistarse en el Ejército ucraniano deben llegar a ese país por sus propios medios y sólo el pasaje aéreo a Varsovia, capital de Polonia, que es a donde suelen llegar para seguir el viaje por tierra, tiene un costo de alrededor de cuatro millones de pesos (un mil 50 dólares).

Otro punto en contra de esa opción es que se han presentado varios casos de colombianos muertos en combate, y a los familiares no les han cumplido con el millonario seguro de vida pactado.

"Irse con los cárteles mexicanos es malo porque se sabe de antemano que es una actividad contraria a la ley, pero los militares, como todos, tenemos familias, y queremos ayudarlas; aquí no hay futuro", afirma un exsoldado profesional que tiene proyectado partir a México si no logra concretar un préstamo para viajar a Ucrania.

Estimaciones conservadoras de asociaciones de militares retirados indican que puede haber unos cinco mil de ellos laborando en el exterior, la gran mayoría en actividades legales.

El intermediario officioso

Algunos de los exmilitares consultados afirman que hay "cientos" de sus colegas trabajando para los cárteles mexicanos, pero otros hablan de "decenas". Coinciden, eso sí, en que cada semana aumenta la cifra.

En la primera semana de marzo pasado, por ejemplo, viajó a México un grupo de 12 comandos colombianos, a quienes un cártel de las drogas les envió dinero para comprar sus pasajes de avión. Un contacto los esperó en el aeropuerto internacional de la ca-





pital mexicana, los dividió en tres cuadrillas y les dio pasajes aéreos para las ciudades de Colima, Tepic y Zacatecas, donde los ubicaron en diferentes “casas de seguridad”.

El exoficial del Ejército que los contactó y organizó su partida a través de chats de WhatsApp dice que el cártel, al que no quiso identificar, le pidió “tres grupos de fuerzas especiales”, cada uno de ellos de 12 hombres, tal como se conforman esas unidades en Colombia. Asegura que por ese trabajo recibió 100 millones de pesos colombianos, unos 25 mil dólares.

“Es gente altamente entrenada —asegura—. Les está yendo muy bien porque conocen las tácticas de la guerra irregular, saben cómo hacer inteligencia y reconocimientos y saben cómo es la vuelta (la manera) para controlar territorios y tomarse los puntos que les interesan a los señores de allá”.

Este año, el Ejército y la Guardia Nacional de México, así como la policía de Zacatecas, han detenido en ese estado a tres colombianos que dijeron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Me avisan por interno”

Una conversación en un grupo de WhatsApp de exmilitares conocido por esta revista transcurrió textualmente así, con faltas de ortografía y dedazos incluidos:

“Buenas tardes sres Vendiciones, es para una vuelta en Mejico de milit. con pasaptes (militares con pasaportes)”.

“En Mex para trabanar en que disculpe la pregunta. y salarios?”

“un cartel en anillo se sgur. De un patron. (en un anillo de seguridad de un jefe narco) 800 (dólares) x semana y 1000 (dólares) especialistas”.

“1000 dlr. o pesos?”.

“lo primero”.

“que especialidades?”

“Instructores combate avanzado, tiradores de presicion (francotiradores), enfermeros, dro-neros (operadores de drones), artillero.50, quia (guía) Knino (a los guías caninos les dan perros que ellos acaban de entrenar y los asignan a anillos de seguridad de los capos para prevenir atentados explosivos)”.

“A bueno muchisimas grcs”.

“Vendicion mi amigo, quien dese (dese) ir dan los pasajes (aéreos), me avisan x intern (me avisan por interno)”.

Un exsubteniente colombiano que formó parte de las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas del Ejército relata que estuvo cuatro meses en México en 2023, en las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que le tocó “frentear” (pelear) en varias ciudades de “la Península” (de Baja California), entre ellas Tijuana, Ensenada y La Paz. Dice que la experiencia “fue muy dura”, porque el riesgo “resultó mucho más alto” del que imaginaba.

“Estuve en varias tomas de perímetros urbanos en control de otros grupos —indica— y esas son guerras muy bravas que no salen en la prensa. Allá todos tienen fusilería pesada, M16, M4, AK (47), SCARs, y artillería punto 50. Ése es un viaje de ida en el que no se sabe si hay regreso. Yo me les volé (se escapó) cuando mataron a dos amigos que habían viajado conmigo. Los metieron en bolsas blancas de basura y los enterraron en una fosa”.



..... NARCOTRÁFICO



Colombianos y venezolanos, en las filas de los cárteles mexicanos
Foto: Especial

Hace unos días, la esposa de un sargento primero en retiro que viajó a México el pasado 12 de marzo dijo que su marido se escapó de la gente que lo contrató y andaba huyendo en "en el monte del sur de México".

También hay historias de incumplimiento en los pagos acordados; de exsoldados a los que los cárteles les retienen sus pasaportes para que no puedan regresar a su país cuando ellos quieran, y de mucha hostilidad por parte de sicarios mexicanos y venezolanos renuentes a la disciplina militar.

"Hay mucho venezolano allá, son buenos para desplazamientos en motos, pero son güevas (torpes) para dar plomo (disparar)", dice una de las fuentes.

Los militares colombianos tienen muy buena reputación mundial por su riguroso entrenamiento y el



NARCOTRÁFICO

conocimiento que han adquirido de la guerra irregular tras más de medio siglo de combates contra las guerrillas y los grupos del narcotráfico.

Un exteniente de una unidad de fuerzas especiales que está en Sinaloa contó a un antiguo compañero de armas que cuando él llegó a ese estado mexicano, el año pasado, lo que imperaba en el grupo que le encomendaron entrenar y dirigir es “la táctica de la masa”, que consiste en enfrentar a los enemigos con incursiones atropelladas, con una multitud de sicarios en motos y en camionetas, disparando de manera anárquica, lo que producía “muchas bajas”.

El exteniente puso orden, les enseñó a los muchachos “tácticas de combate urbano”; los entrenó en el uso de fusiles de asalto, en técnicas de inteligencia y reconocimiento de las líneas enemigas, lo que se tradujo en “tomas más limpias” y en “más terreno ganado”, según dijo a su amigo en una llamada por WhatsApp.

“Estuve en varias tomas de perímetros urbanos en control de otros grupos — indica— y esas son guerras muy bravas que no salen en la prensa. Allí todos tienen fusilería pesada, M16, M4, AK (47), SCARs, y artillería punto 50. Ése es un viaje de ida en el que no se sabe si hay regreso.”

También le contó que no siempre es fácil imponer un régimen de disciplina en las estructuras armadas de los cárteles mexicanos porque “la mayoría de los chinos (jóvenes) son buena vida (desordenados) y a algunos no les gusta que uno vaya con ese nivel de exigencia”. 📍



DERECHOS HUMANOS

Chiapas

REHENES

del narco

Acostumbrados a la protesta social, a la movilización, a las disputas por la tenencia de la tierra y a que su estado tiene una condición de paso, receptora y expulsora de migrantes, los chiapanecos –cuya población en su mayoría es indígena y rural– observan con terror la violenta penetración del narcotráfico en sus comunidades por parte del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación, que mantienen un profundo control sobre la economía y los servicios, con estrategias criminales que han causado graves impactos sociales, económicos y psicológicos a la población.

GABRIELA COUTIÑO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.– En medio de una fuerte balacera, pobladores de por lo menos siete comunidades ubicadas alrededor de la presa La Angostura abandonaron sus hogares. “Más de media de hora de balazos, carros quemados. Las balas caían sobre los techos de las casas”, cuenta *Pedro*, habitante de este lugar. Su nombre fue cambiado por temor a represalias.

Dejaron tras de sí, esparcidos, toda clase de objetos, desde zapatos hasta anaqueles vacíos, trastes, una que otra mochila vieja y motocicletas. Eso fue a mediados de enero. “Se sabía que había enfrentamientos en otro lado, no en nuestras comunidades. Pero esta vez tuvimos que salir huyendo por el monte”, recuerda *Pedro*.

Huían de uno de los enfrentamientos que se vuelven cada vez más frecuentes en Chiapas: el Cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La confrontación que ambos sostienen en diversas regiones del país se expandió hasta esta entidad.

Los chiapanecos están acostumbrados a la protesta social, a la movilización (sobre todo campesina y magisterial), a las disputas por la tenencia de la tierra y a que su entidad tiene una condición de paso, receptora y expulsora de migrantes. Pero hoy observan con terror la violenta penetración del narcotráfico.

Desde un refugio en Comitán, *Pedro* narra que salió de su comunidad junto con su esposa, sus hijos, su madre de la tercera edad y sus cuñadas. “Por los enfrentamientos, que estaban exagerados”. No hubo tiempo de sacar ni sus documentos. “Ahí dejamos todo: nuestros animalitos y nuestro humilde hogar. Salimos caminando rápido hacia la presa y vimos que otras familias se encontraban en la misma situación que nosotros. Salieron sin nada”, describe.

Chiapas
REHENES
del narco

El conflicto armado en Chiapas se ha intensificado en los últimos años, con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ejerciendo un control sobre la economía y los servicios en varias regiones del estado.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.– En medio de una fuerte balacera, pobladores de por lo menos siete comunidades ubicadas alrededor de la presa La Angostura abandonaron sus hogares. “Más de media de hora de balazos, carros quemados. Las balas caían sobre los techos de las casas”, cuenta *Pedro*, habitante de este lugar. Su nombre fue cambiado por temor a represalias.

Chenalhó. Dejan todo atrás

Foto: Isabel Mateos Hinojosa @Cuartoscuro

DERECHOS HUMANOS



Cuenta para esta investigación que los pobladores de los ejidos Nueva América, Corona del Rosal y Benito Juárez, Chicomuselo; Chejel y Puerto Rico, de Socoltenango, y de Nuevo Resplandor, en La Concordia, huyeron luego de un enfrentamiento entre "los malos", como los pobladores llaman a los grupos criminales, que comenzó el domingo 14 de enero.

Sandra, quien también vive desplazada en Comitán y a quien se le cambió el nombre por seguridad, dice que en su comunidad se quedaron unas 20 familias que ya no pudieron salir. "Tengo una sobrina que seis días aguantó hambre solita. A los seis días la fui a sacar de su casa y tenía mucho pánico. Salí brincando, mirando a su alrededor, y me decía si no estaban por ahí los señores. Le dije que no. Es que también se dice que estaban reclutando a los varones, y más a los jóvenes. Por eso mucha gente se fue a dormir a sus solares, potreros, cuevas, mucha gente salió huyendo por eso".

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), junto con el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género Guatemala-México, la Red Nacional de Organismos civiles de Derechos Humanos, y la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Totes han estado documentando la violencia que se registra en las regiones Sierra y Fronteriza, donde principalmente se presenta la presencia de los grupos criminales.

En enero, estas organizaciones civiles presentaron el informe "Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos". Registran dos desplazamientos forzados masivos. El primero fue el 26 de mayo de 2023, en comunidades de La Candelaria, Lajerío y Benito Juárez de Frontera Comalapa, de donde salieron entre 600 y mil 500 personas, las cuales regresaron a los pocos días escoltadas por el Ejército mexicano, que realiza patrullajes disuasivos.



DERECHOS HUMANOS

El segundo ocurrió en enero de este año, los días 15, 16 y 17, en las comunidades de Chicomuselo, Socolte-nango y La Concordia (alrededor de la presa La Angos-tura, que es el embalse más grande de México). Según datos del Frayba, en esta última ocasión fueron cerca de tres mil las personas desplazadas.

Los testimonios documentan que la huida de las fa-milias está ocurriendo a través de veredas y montañas a donde llegan a refugiarse por días. Dejan atrás sus medios de vida; es decir, sus animales domésticos, el maíz, el café, algunos vehículos y los medios de labranza que quedan a merced de la rapiña.

Pedro también asegura que otras personas huye-ron ante el ingreso de tropas del Ejército mexicano, que lanzaron gases lacrimógenos cuando la gente les re-clamó que no actuaban contra los grupos del crimen organizado.

Para intentar salvarse, la mayoría de los desplazados llega a las cabeceras municipales cercanas e incluso a las ciudades grandes, como lo son Comitán, San Cristó-bal de las Casas y la capital, Tuxtla Gutiérrez.

Estrategia de control criminal

Dora, una mujer desplazada en Comitán que también pide reservar su verdadero nombre, espera volver a su casa porque piensa que no podría acostumbrarse a lo fresco del sitio donde ahora vive. "Lo más triste es venir aquí. Nuestro lugar es caliente y aquí frío, y pues los ni-ños se enferman".

Relata que ellos salieron de día, "cuando estaba más fuerte la balacera. Bajamos por Resplandor caminan-do para llegar a la presa; en la lancha quedaron todas nuestras cosas. Se quedó nuestra casa con nuestros animales, nuestras gallinas, mis marranitos".

Otras familias, recuerda, se refugiaron en sus sola-res, que son galeras que se construyen cerca de la mil-pa para descansar mientras trabajan la tierra. Algunos hombres decidieron sacar a su familia y ellos se queda-ron a cuidar las pertenencias.

Los grupos criminales que se disputan el territorio mantienen un profundo control de la población, la eco-nomía y los servicios con estrategias de terror que han causado graves impactos sociales, económicos y psicoló-gicos a la población, de acuerdo con el seguimiento que han registrado las organizaciones no gubernamentales.

Una escena que relatan los pobladores ocurrió el 22 de septiembre, en la localidad de Chamic, en Frontera Comalapa. Un grupo armado que se hizo llamar el Cártel Chiapas se dio a conocer desfilando en un largo convoy con armas de grueso calibre, disparando al aire y ame-nazando al Cártel de Sinaloa. Por ello, en la zona se corrió la versión de que podría ser una fachada del CJNG.

"El conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Ge-neración (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS) por el control del territorio en Chiapas represen-ta uno de los episodios de mayor impacto so-cial, económico y político en el estado", detalla en otro informe la organización Otros Mundos, que trabaja por la defensa del territorio contra megaproyectos extractivistas y tiene presencia en la región fronteriza.

"La violencia es descomunal –continúa el documento–, con acciones masivas jamás vis-tas, como el reclutamiento de jóvenes, la vio-lación de mujeres, el cobro de piso, las extor-siones, las desapariciones, desplazamientos masivos, los secuestros, el robo de casas y otras propiedades inmuebles, las fosas clandestinas; el cerco armado a comunidades enteras, tortu-ras, asesinatos, decapitados, entre otros indica-dores terribles".

Esta asociación civil identifica los intereses económicos que alimentan la pugna entre los grupos delictivos en Chiapas: la apropiación de los terrenos, ranchos y viviendas; el control de negocios, como la venta de alcohol, café, maíz, palma de aceite, gas y gasolina; el cobro de pi-so, las extorsiones, los secuestros, el recluta-miento, la prostitución y la trata de personas; el tráfico de drogas, armas y migrantes, "entre otros muchos negocios".

Las regiones afectadas tienen actividades productivas relacionadas con lo agropecuario y el comercio. Asimismo Otros Mundos seña-la dos nuevos elementos que aparecen en esa lucha por el control territorial. Uno es el aisla-miento de las comunidades para evitar que se infiltre el cártel contrario. "Esto se traduce en el cierre de entradas y salidas de la comunidad, el corte de las comunicaciones, de la luz, del su-ministro de agua, de los servicios como son los hospitales, bancos, escuelas y mercados". Otro es la conformación de organizaciones locales dentro de las comunidades, que aparentan au-tonomía, pero siguen instrucciones del grupo delictivo.

Éste ha sido el caso de la organización El Maíz, en el municipio de Chicomuselo, que obli-ga a los pobladores a hacer barricadas, vigilan-cia, retenes, marchas y bloqueos para evitar la entrada del Ejército mexicano. También usa a la población como escudo humano en los enfren-tamientos armados.



Las organizaciones coinciden en que la población civil "ha sido tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa", según se lee en su documento. Esto se logra con acciones como el corte de suministros de servicios básicos como los alimentos, gasolina y electricidad.

Eso ocurre en la región de La Frailesca, zona donde se ubica la presa La Angostura. Las balsas que cruzan los 100 kilómetros del embalse llevan a bordo la desbandada de pobladores, que venden sus cosechas a bajo precio.

Las organizaciones denuncian que el control por parte de los grupos criminales armados debilita, fragmenta y daña el sentido de la vida comunitaria, además de que destruye las dinámicas de las tomas de decisiones al interior de la misma.

Otro impacto que ha detectado el Frayba es que alrededor de cinco mil trabajadores de la educación de los niveles básico y medio superior no acuden a clases o no asisten a sus centros educativos en las zonas violentas, porque tienen miedo de que les pase algo.

Como ocurre con el resto de la población, los maestros se niegan a hablar sobre la situación que se vive en las regiones Sierra y Fronteriza por miedo. "No tenemos datos exactos. En algunas escuelas sí hay clases, en otras no", dijo un vocero (que también pide omitir su nombre) de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que está adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organización magisterial disidente y la de mayor número de profesores en el estado.

Al respecto, la Secretaría de Educación confirmó por medio del área de comunicación social que en escuelas de varios de los municipios que viven desplazamiento no hay clases presenciales "por protección de los niños, niñas y jóvenes", y que se están llevando a cabo clases en línea o con cuadernillos que tienen los alumnos, aprovechando el protocolo que se estableció durante la pandemia de covid-19. Pero

la dependencia no respondió a la petición para conocer cuántas escuelas se encuentran en esta situación y de qué localidades.

Asimismo las organizaciones a cargo del informe "Asedio a la vida cotidiana..." afirman que, en toda la región fronteriza asolada por el conflicto armado, "la delincuencia organizada interactúa con funcionarios del gobierno conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial". Además, que la infiltración en el gobierno es de tal magnitud que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio.

Gobierno con otros datos

Desde 2021 la zona limítrofe con Guatemala se encuentra en una guerra no reconocida por los gobiernos federal y estatal, ambos del partido oficial Morena. En los últimos meses, la violencia ha ocasionado zozobra e incertidumbre que está generando desplazamientos de manera masiva o "gota a gota" de cientos de familias.

Así, alejado por mucho tiempo de la presencia de grupos criminales que han experimentado otros estados y regiones, Chiapas se convirtió poco a poco en uno de los escenarios más violentos de este conflicto abierto entre las dos organizaciones delictivas más grandes del país.

La Iglesia católica, por medio de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, así como varias organizaciones defensoras de derechos humanos asentadas en el estado y organismos empresariales, hacen llamados de emergencia a las autoridades para que reconozcan la situación y actúen.

"Tememos por la vida de tantas hermanas y hermanos, por las comunidades y pueblos de esta zona fronteriza y de otras partes del estado de Chiapas. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes a poner su mirada en estas comunidades y pueblos, y a que logren la atención urgente a las demandas de paz de nuestros pueblos, favoreciendo el Estado de derecho". Así lo expresó la Diócesis de San Cristóbal en una carta que difundió el 21 de diciembre en sus redes sociales, firmada por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y sus colaboradores.

La Iglesia católica, por medio de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, así como varias organizaciones defensoras de derechos humanos asentadas en el estado y organismos empresariales, hacen llamados de emergencia a las autoridades para que reconozcan la situación y actúen.

"Tememos por la vida de tantas hermanas y hermanos, por las comunidades y pueblos de esta zona fronteriza y de otras partes del estado de Chiapas. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes a poner su mirada en estas comunidades y pueblos, y a que logren la atención urgente a las demandas de paz de nuestros pueblos, favoreciendo el Estado de derecho". Así lo expresó la Diócesis de San Cristóbal en una carta que difundió el 21 de diciembre en sus redes sociales, firmada por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y sus colaboradores.

***** DERECHOS HUMANOS

Comunidades, bajo sitio del narco

Foto: Isabel Mateos Hinojosa @Cuartoscuro



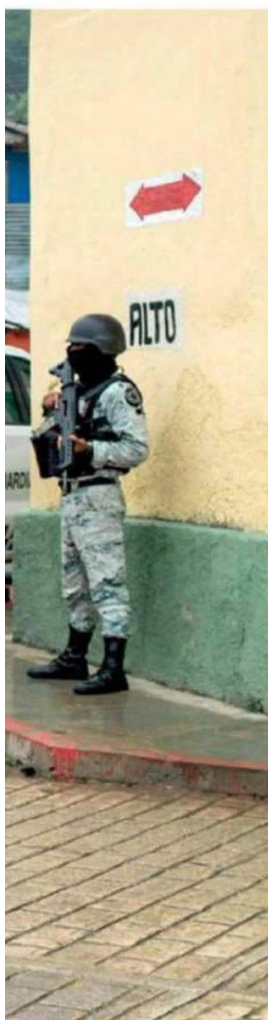
No obstante, desde el inicio del éxodo causado por los grupos armados, los gobiernos federal y estatal han minimizado la situación. Su argumento es que Chiapas es el estado más seguro del país, pues la cifra de homicidios es una de las más bajas de todo México.

Sin embargo, el gobierno no cuenta con un registro que mida el impacto que ha generado esta situación de guerra para la población, en su mayoría indígena y rural. La Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado, instancia encargada de atender a población desplazada, tiene cifras mucho menores que las organizaciones de la sociedad civil que documentan y acompañan a víctimas, como es el caso del Frayba y de Otros Mundos.

De hecho, en un comunicado que publicó el 23 de enero pasado, el Frayba criticó a la Secretaría de Protección Civil estatal, por minimizar la situación. En principio, señala que la dependencia se refiere a los desplazados como "personas en situación de vulnerabilidad ante un hecho socio-organizativo", con lo que no se apega al reconocimiento dentro de la propia ley estatal para la prevención y atención del desplazamiento interno, vigente desde 2010.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, asegura en entrevista que el desplazamiento forzado en Chiapas es intermitente; es decir, la gente sale, pero luego regresa. También explica que en ocasiones el desplazamiento ha sido disperso, que muchas veces las familias se refugian con familiares y que muchos han regresado a sus comunidades por sus propios medios, aunque el gobierno cuenta con un plan de retorno institucional.





Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que el estado cuenta con 21 mil comunidades y sólo 266 centros poblacionales grandes, donde se dispersan seis millones de habitantes. El secretario de Protección Civil dice que esta disgregación poblacional dificulta acudir a todos los lugares que sufren desplazamiento para ver qué necesita la gente.

El funcionario afirma que al 9 de febrero tenía un registro de mil 570 personas desplazadas, en todo el estado y por diversas causas, no solamente por la violencia. Luego, reconoce que el número de personas desplazadas "llegó a ser en algunos momentos de cerca de cinco mil".

Aun así, García Moreno considera que "la cifra no rebasa la atención del gobierno". Y presume que dicha atención consiste en dar albergue temporal en algunas instalaciones del gobierno, víveres, y dialogar para posteriormente hacer el retorno con las familias que aceptan, con resguardo del Ejército.

Sobre el desplazamiento masivo de enero, afirma que únicamente ocurrió en Chicomuselo y la cifra de los desplazados fue de tres mil 780.

La Iglesia católica también calcula que el número de desplazados en esa ocasión fue de cerca de cuatro mil, "con todo lo que eso significa: el desarraigo del pueblo, de su comunidad, de la escasez de alimentos y medicamentos, el dejar la rutina diaria, como el trabajo", afirma el sacerdote Gilberto Hernández García, asesor pastoral de la Arquidiócesis de Tuxtla y director de Cáritas.

Sin embargo, las cifras de Otros Mundos son mayores. Expone, por ejemplo, casos de localidades en el municipio de Chicomuselo que salieron obligadas por uno de los grupos delictivos en mayo de 2023. Ahí, unas 200 familias enteras huyeron de Puerto Rico; alrededor de 800 personas salieron de la comunidad de Cuatro Camino y 450 más de San Antonio; del Ejido Nueva Morelia salieron unas 500 personas. Lo mismo sucedió con casi todas las familias de Galicia; aproximadamente 180 habitantes de Jolentón, y otros más de El Cerecillo y 20 de Noviembre.

Esta asociación civil coincide en la imposibilidad de calcular con exactitud el número de personas desplazadas, ya que hay regiones donde no se puede tener acceso. "El gobierno afirma una cantidad de personas atendidas en albergues, pero no toda la población desplazada ha llegado a refugiarse en ellos", apunta en su reporte.

Aun así, en el informe "Asedio a la vida cotidiana...", las otras organizaciones calculan una cifra alarmante. Consideran que desde 2021, cuando se agudizó la confrontación entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG, hasta febrero pasado, alrededor de 10 mil personas de las regiones mencionadas han sido víctimas de desplazamiento forzado.

"Son fenómenos que le pegan muy fuerte a nuestras comunidades, y lanzan una señal muy negativa de que estamos siendo rebasados por el crimen y estamos perdiendo. Hay una sensación de inseguridad muy grande", agrega el sacerdote Hernández García.

El gobernador del estado, Rutilio Escandón, nunca habla del tema públicamente. Para esta investigación se solicitó una entrevista a la Secretaría de Gobierno, pero no hubo respuesta. A diferencia del gobernador, en la conferencia matutina del 8 de enero último, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto. Lo hizo para responder la pregunta de una reportera.

El mandatario reconoció la irrupción violenta de grupos armados y dijo que lo han hecho para controlar el paso de la droga por puntos de la frontera con Guatemala. Sin embargo, admitió no tener el dato de cuántas personas fueron desplazadas de la zona. "Son muy pocos", aseguró.

Mientras López Obrador habla pausadamente desde el Palacio Nacional, Dora cree más en su fe. "Confiamos en Dios que se componga la situación porque queremos regresar a nuestras casas. Es triste porque años de vivir tranquilos y salir por esto es muy triste".



Guerrero

DESPLAZADOS

con fuego de drones

En las comunidades de la sierra guerrerense el infierno viene del cielo: la delincuencia organizada ahuyenta a la población, desde 2022 les lanza bombas con drones chinos para tener el control sobre las rutas de la droga y de la industria minera. Ranchos, casas, escuelas y las pertenencias se quedan en los pueblos: vacas, cerdos, borregos, gallinas y perros deambulan solos. Apenas un puñado de hombres se armó como autodefensas con la esperanza de recuperar lo perdido.

LUIS DANIEL NAVA

Eran poco después de las diez de la mañana cuando se escuchó a lo lejos un extraño zumbido en Plan Verde, comunidad de 150 habitantes enclavada en la sierra de Guerrero. Luego, una fuerte explosión. Pronto se supo que una granada había caído del cielo y abierto un boquete en el techo de la cancha de la escuela primaria, en ese momento vacía. Sus esquivas alcanzaron la puerta de un salón ubicado a un lado, donde había niños que tomaban clase ese 31 de agosto de 2023.

Ahí se sembró el terror. “Nos espantamos, no sabíamos qué estaba pasando. Entonces agarré y, como pude, me llevé a los niños”, recuerda María Teresa Cerón, la única maestra de preescolar de la zona, quien debe atender los tres grados de la escuela, ubicada frente a la cancha de la primaria. Su

salón está a 20 metros de donde cayó el explosivo. Se apresuró a reunir y resguardar a sus alumnos, que jugaban en el patio porque era la hora del recreo. Ningún niño resultó herido.

Fue un ataque con dron. Pero no fue uno más de los que la población de Plan Verde había vivido ya en ese mes de agosto, que consistieron en dejar caer artefactos explosivos en las inmediaciones de la comunidad. Éste fue el primer ataque cometido directamente al centro del poblado.

Los drones con explosivos han obligado a los habitantes a huir despavoridos, incluidos bebés, niños y ancianos. “Salimos con lo que teníamos en la mano por el miedo, sin pertenencias. Pensamos que era la definitiva, que pues ya, hasta ahí nada más habíamos llegado, que iban a llegar personas armadas y nos iban a matar, a torturar a los niños”,

Guerrero
DESPLAZADOS
con fuego de drones

El ataque con dron en Plan Verde, Guerrero, el 31 de agosto de 2023.

Eran poco después de las diez de la mañana cuando se escuchó a lo lejos un extraño zumbido en Plan Verde, comunidad de 150 habitantes enclavada en la sierra de Guerrero. Luego, una fuerte explosión. Pronto se supo que una granada había caído del cielo y abierto un boquete en el techo de la cancha de la escuela primaria, en ese momento vacía. Sus esquivas alcanzaron la puerta de un salón ubicado a un lado, donde había niños que tomaban clase ese 31 de agosto de 2023.

Dron de fabricación china

relata la profesora. Propiedades y pertenencias se quedaron en los pueblos: vacas, cerdos, borregos, gallinas y perros.

Los drones equipados con bombas o granadas son la más reciente tecnología empleada por los cárteles mexicanos. En Guerrero, entidad del Pacífico sur de México, empezaron a utilizarse a partir de 2022, de acuerdo con registros de la prensa local.

En 2023, la organización criminal La Familia Michoacana multiplicó su uso contra la organización rival Los Tlacos, grupos de autodefensas, y contra la población de al menos 10 comunidades de San Miguel Totolapan (regiones de Tierra Caliente y Sierra), Heliodoro Castillo (Sierra), Cocula (Norte) y Petatlán (Costa Grande).

El propósito del uso de nuevas armas por parte de las organizaciones criminales es atemorizar a la gente o ejecutar órdenes de homicidios de personas que directamente están resistiendo procesos de dominio, explotación o control territorial, explica el investigador Gabino Solano Ramírez.

Solano es coordinador de la Maestría en Estudio de Violencias y Gestión de Conflictos en la Universidad Autónoma de Guerrero. También afirma que este recurso de los grupos "es una escala más en los instrumentos que se usan para generar el miedo. Todos los instrumentos son graves, pero puede ser más efectivo cuando el propósito es que la gente salga de sus comunidades por el miedo".

En Plan Verde, que se caracteriza por sus casas de madera en medio de superficies de pasto verde, pinos, encinos y oyameles, la estrategia funcionó. Los pobladores caminaron durante tres horas, a menos de cinco grados centígrados y bajo la lluvia. Cruzaron senderos en el bosque, hasta los poblados de Las Máquinas, Chichalaco y Toro Muerto. Varios niños enfermaron de gripe y tos.

Algunas familias llegaron hasta la noche a la Estación Toro Muerto y se instalaron en la iglesia, con desplazados de cuatro comunidades vecinas. Otras familias se fueron más lejos: a Atoyac, Tépica, San Jerónimo y Acapulco. Sobrevivieron con la poca comida que les brindó la población y algunas despensas que les dio el Ejército.

Al enterarse de que ya había soldados patrullando en Plan Verde, algunos regresaron el 1 de octubre. Al día siguiente lo hizo la mayoría. Una decena de familias sigue refugiada, incluso en otros estados vecinos.

En diciembre de 2023, habitantes de El Parotal, en la sierra del municipio de Petatlán, aseguraron un dron que cayó por una falla mecánica tras soltar una bomba.

"Andaba volando arriba y tiró una bomba", narra uno de los habitantes de El Parotal en un video que ha sido reproducido por varios medios de comunicación. El dron tuvo una falla mecánica después de enredarse en un árbol y por eso se desplomó. "La bomba cayó adentro de la casa, una bomba de lumbre, y él cayó afuerita de la casa", cuenta.

Por las grabaciones recuperadas de las cámaras del dron se dieron cuenta de que éste había sido usado para lanzar explosivos durante varios meses en las comunidades de esta zona de Petatlán, entre ellas a El Parotal y La Palma, según explicaron para esta investigación.

Al consultar empresas que fabrican este tipo de artefactos, así como a fotógrafos usuarios de estos equipos, se conoció que el modelo corresponde a un dron M350 RTK de la empresa china DJI. Esta firma es fabricante mundial de drones civiles y tecnología creativa para cámaras y describe dicho modelo en su página de internet. El artefacto opera a una distancia de 15 kilómetros, con poca iluminación, en zonas agrestes o de espesa vegetación. Además resiste climas extremadamente fríos o calurosos.

Es considerado por DJI como un aparato ideal para la seguridad pública, aunque también se utiliza para otros fines: elaboración de cartografía, ingeniería forestal y obras de infraestructura. Logra un alcance de 450 metros de altura y puede cargar 2.7 kilogramos. También cuenta con una cámara con sensor de movimiento (visión nocturna).

En contraste, los explosivos que han expulsado los drones en Michoacán son de elaboración artesanal. Contienen balines, clavos y pedazos de fierro. Estas esquilas se expanden de 10 a 20 metros y pueden perforar fácilmente techos o puertas de aluminio.

Uno de los habitantes de la comunidad de Plan Verde, Leonor Hernández Barragán, ruega ayuda a la gobernadora Evelyn Salgado y al presidente Andrés Manuel López Obrador: "Tenemos miedo. Muchos han emigrado y mucha gente está sufriendo la violencia. Queremos vivir en paz para que nuestros niños tengan educación, porque, si esa gente llega, se cierran las escuelas y ya no nos visitan los médicos".

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización no gubernamental con sede en Guerrero que apoya a desplazados, calcula que en los últimos siete años más de 30 mil personas de distintas localidades y municipios en el estado han sido víctimas de desplazamiento forzado interno.

Guerrero. Desplazamiento forzado interno
Foto: José Luis de la Cruz / Procesofoto



Control de la industria minera

La profesora María Teresa relata que los maestros dejaron de venir a Plan Verde por la violencia. Por esa razón ella tuvo que capacitarse para dar clases a los niños de preescolar, que tuvieron que salir durante ese mes de la comunidad, por miedo a los criminales.

Ahora que los niños volvieron, le cuentan sus sueños. "Quieren ser doctores, militares y padres. Eso me motiva a seguir, con miedo y todo, pero pues aquí estamos", dice la maestra, sentada en un pupitre de su salón de madera pintado de azul.

Algunos pueblos afectados por el desplazamiento forzado interno en Guerrero están situados en el llamado Cinturón de oro, un corredor de minas a cielo abierto, la mayoría de explotación de oro y plata; otros, sobre hectáreas concesionadas por el gobierno federal a empresas hasta después del año 2050. Unos más se ubican en reservas de bosque.

En agosto y septiembre de 2023, cinco comunidades de esa zona padecieron ataques, sobre todo con drones artillados, que obligaron a 500 personas a desplazarse.

Proceso recorrió dos de esas comunidades: Plan Verde y Linda Vista. Habitantes de esta última comunidad consideran que un motivo de los ataques es controlar las minas de oro en la zona.



Miguel Ángel Mijangos Leal es miembro de la organización Procesos Integrales para la Gestión de los Pueblos (PIAP) y desde hace una década estudia los cambios que causan las mineras en las poblaciones. Indica que con el avance de proyectos de exploración y operación con fines extractivos se agudizó la guerra entre grupos delictivos por el control de esas zonas, mientras la población queda condenada al desplazamiento o a la extorsión.

Para el sacerdote y defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez, este desplazamiento forma parte de una actividad "macrocriminal" para explotar los recursos minerales, hídricos, forestales y hasta la producción de enervantes, pues ha observado que, tras un episodio de desplazamiento, grupos externos se apoderan de esos bienes. Él dirige el Centro de Derechos de Víctimas de la Violencia Minerva Bello. Desde su fundación en 2018, brinda acompañamiento jurídico, de salud y psicológico a víctimas de desplazamiento forzado.

Las minas pueden dejar "una rentabilidad muy grande, por la maquinaria, por los sindicatos, por la propia cuota que se le ponga a la nómina de los trabajadores, y esa es otra manera de obtener ganancias", explica el religioso.

—Pero las minas siguen operando con normalidad, ¿cuál es el papel o la relación del crimen con las mineras? —se le cuestiona.

—No es que el grupo del crimen organizado tenga interés en explotar, porque no tiene la tecnología ni el conocimiento. Ellos están aprovechando toda la industria que genera alrededor.

Velázquez considera que el desplazamiento se da por la intención de controlar la economía en torno a las mineras. Cuando llega una nueva concesión, los grupos criminales se hacen presentes en la zona para "negociar" las condiciones. Enfatiza que las comunidades desplazadas son víctimas de un sistema de injusticia. "Son los que no tienen rostro, no tienen voz, y en ese anonimato continúan siendo violentados sus derechos. Y no hay ley que los ampare", reitera.

A fines de agosto de 2023 el sacerdote denunció públicamente que tres ataques con drones a la comunidad Nuevo Caracol, del municipio de Tlacotepec, en la cuenca del Río Balsas, dejaron dos muertos. Esto no fue confirmado por las autoridades.

Por su parte, Mijangos describe las tres principales estrategias de las mineras para entrar a estos territorios. La primera: convencen a la población al ofrecer so-

luciones para las necesidades que el Estado no satisface. Por lo común, sobornan a los representantes legales y agrarios de la comunidad para tener acceso a sus asambleas, donde ofrecen infraestructura, empleo y el pago de una renta por sus tierras.

La segunda estrategia es la violencia e intimidación. Miguel Ángel Mijangos asegura que cuando las comunidades rechazan las ofertas, algunas empresas utilizan al crimen organizado para doblegarlas. También refiere que hay casos donde empresas mineras compran tierras ejidales, lo que está prohibido.

"Y aunque luego pierden los juicios (en el Tribunal Agrario), ya ganaron tiempo, ya invirtieron y a los pueblos sólo les queda negociar, aunque después no les cumplan", dice Mijangos.

Aun si la comunidad gana el juicio, para entonces las mineras ya realizaron inversiones y destruyeron parte del territorio. La población se ve obligada a continuar el proyecto aceptando una renta anual por hectárea, concluye el experto.

Independencia, otra razón

Gil Hernández, un comisario de aspecto espigado y tímido, y Leonor Hernández Barragán, un poblador de más de 60 años, guían al equipo de esta investigación entre viviendas abandonadas de Plan Verde. Las puertas están cerradas; las galeras, vacías. En algunas casas aún deambulan cerdos flacos o patos que buscan refugio bajo las construcciones de madera.

Leonor, que ha visto crecer a tres generaciones en Plan Verde, expresa su temor de que el lugar se convierta en un pueblo fantasma controlado por los grupos criminales: "La gente tiene mucho miedo por las bombas que echan. Ya le tiraron al techado de la escuela y pueden seguir con las casas", comenta. Reconoce que hay quienes piensan en huir de nuevo, aunque en Plan Verde un grupo de hombres con rifles de asalto cuida el territorio.

Los comisarios de 66 comunidades se dijeron dispuestos a defender con su vida a sus familias, su territorio y los bienes naturales. Por ese motivo se armaron como autodefensas. Incluso repelieron un ataque armado el 30 de agosto y detuvieron el ingreso de sicarios de La Familia Michoacana.

Después de visitar Plan Verde, el equipo acudió a Linda Vista. Es una comunidad que se ubica en el corazón helado de la sierra, a dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, entre las regiones Costa Grande y Tierra Caliente.

El acceso es por Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande. Hay que subir por los retazos de una carretera y un camino de terracería destruidos por el tiempo y la lluvia. Es un viaje de 132 kilómetros, ocho horas a bordo de una vieja camioneta de ruta tipo Van.

El camino se vuelve más frío, lluvioso y accidentado a cada kilómetro. "¿Por qué se arriesgan a ir hasta allá?", pregunta al equipo una pasajera. Es una maestra de la zona que, con una decena de colegas, se dirige en la Van a sus escuelas. Los maestros cuentan que dejaron de subir todo septiembre porque se enteraron en los noticieros de que las intermediaciones de sus centros educativos se habían convertido en campo de batalla.

Ya en la comunidad los pobladores son amables y la autoridad ofrece buen trato. Pero el miedo de que en cualquier momento se presente un nuevo ataque armado cala igual que el frío imperante.

Linda Vista no esconde su origen. Desde que los adultos vieron la luz, ya se cultivaba la amapola, hasta que el precio de la goma de opio cayó en 2021. Hoy buscan subsistir con la siembra de aguacate, durazno y maguey.

Una reciente refriega armada entre integrantes de La Familia Michoacana y la población causó la suspensión del transporte público por un mes, así como de las clases en las tres escuelas. Estos servicios sólo se reanudaron cuando arribó un destacamento de militares. Quienes no regresaron fueron el médico y los dos asistentes que atendían la Casa de Salud Pública. Por eso continúa cerrada y los servicios de salud se ofrecen en una clínica privada.

Un mapeo elaborado por la organización PIAP, con base en información de la Secretaría de Economía, muestra que el corporativo Exploraciones Mineras Parreña posee en Linda Vista una concesión minera vigente, en una superficie de dos mil 91 hectáreas con el título 237217.

En el municipio de San Miguel Totolapan, Exploraciones Mineras Parreña tiene la concesión de 27 mil 53 hectáreas con vigencia hasta 2062. Es una filial de la empresa Fresno PLC, que pertenece a la poderosa familia Baillères. Ésta, de acuerdo con *Forbes*, tiene la cuarta fortuna más grande del país y es propietaria de minas, tiendas departamentales y compañías de seguros.

Pese a la situación, la localidad –de unos mil habitantes– es todavía un pequeño centro de comercio para las comunidades vecinas. Hay una tienda de abarrotes surtida, ropa, calzado, fichas de internet, una cocina económica, una farmacia, expendio de gasolina y transporte con una salida al día para la Costa Grande.

Las autoridades de Linda Vista creen que una posible causa de los ataques que los han orillado a salir es que este pueblo busca constituirse como un nuevo municipio. Alegan que están lejos de la cabecera de San Miguel Totolapan, que es la sede de todos los servicios del gobierno, y no llegan salud ni educación de calidad, tampoco el presupuesto para obras públicas o caminos.

Por esto, en 2022 conformaron un comité de seguimiento y las actas de adhesión de 17 comisarias, pero les hace falta un acta donde el cabildo de San Miguel Totolapan acepte que esta comunidad se separe.

Eudocio Barragán, líder de la comunidad y gestor del proyecto, sostiene que el ayuntamiento de San Miguel Totolapan no está de acuerdo con la separación de Linda Vista: "De ahí se nos viene una ola de amenazas, a tal grado que hace tres meses se agrava la situación. Nos empiezan a tirar explosivos con drones".

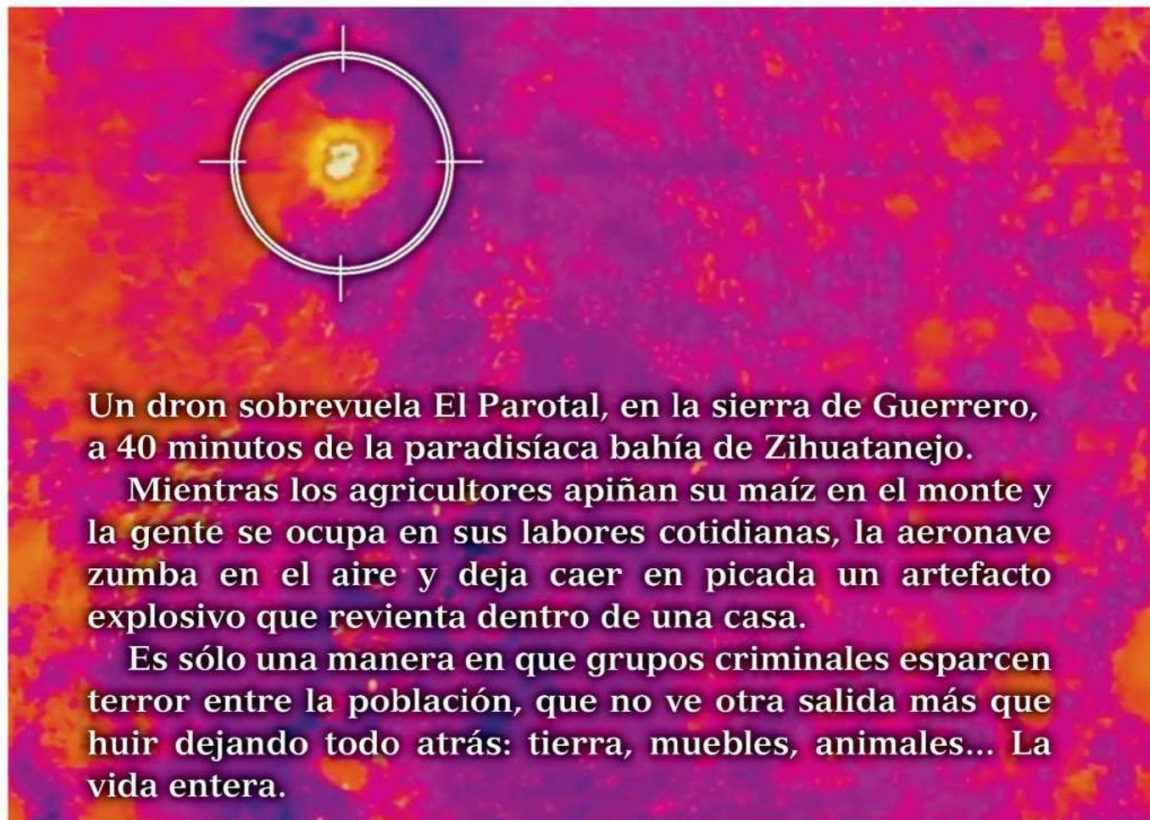
El cabildo no se opone a la creación de nuevos municipios, como lo pretende hacer Linda Vista, asegura el alcalde de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios, quien niega haber amenazado o atacado a la comunidad. Sin embargo, asegura que en el proyecto hay anomalías, como contemplar puntos de la región que no tienen viviendas ni son localidades.

Vázquez fue nombrado alcalde interino el 17 de noviembre de 2022, luego de que el 5 de octubre de ese año presuntos integrantes de la organización delictiva La Familia Michoacana asesinaron al alcalde Conrado Mendoza Almeda, a su padre, que también había sido alcalde, y a 18 personas más.

La gestión para la creación de Linda Vista como nuevo municipio y su separación de San Miguel Totolapan, asegura el alcalde, está en manos del Congreso del estado. Sin embargo, el mismo Congreso informó para esta investigación que el trámite está detenido debido a la violencia criminal que se vive en ese municipio de Tierra Caliente.

Por toda esta situación, la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, no duda en decir que en la Sierra de Costa Grande "se está viviendo una guerra civil".

***** DERECHOS HUMANOS



Desterrados por el narco

EL INVISIBLE

desplazamiento forzado en México

VERÓNICA ESPINOSA, PATRICIA MAYORGA Y JOSÉ GIL OLMOS

En México se vive una disputa armada entre grupos de la delincuencia organizada por el territorio y las economías locales. Los narcotraficantes han extendido su poder a la imposición de cobros por la explotación de minas, madeiras preciosas, productos agrícolas, tráfico de migrantes y otros productos, que les generan ganancias millonarias.

Aterrorizados por el creciente poderío bélico de estos grupos armados irregulares, cientos de miles de mexicanos se han visto obligados a huir de sus casas y esconderse en montañas, cerca de bosques o incluso en zonas urbanas marginadas en busca de



Desterrados por el narco
EL INVISIBLE
desplazamiento forzado
en México



Cientos de miles de personas han tenido que huir de sus casas para sentirse a salvo de la imparable guerra entre los poderosos Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, con apoyo de grupos criminales locales. Tan sólo en 2023 se registraron más de 40 hechos de éxodo por violencia en al menos once estados del país. Mientras, el gobierno mexicano se mantiene entre la impunidad, la inacción y el no querer reconocer la gravedad de la situación.

seguridad. Es el resultado de una guerra que inició hace casi ya dos décadas en nombre del combate al narcotráfico y que se ha prolongado con la atomización de los grupos delictivos, pero sin que por muchos años se reconociera oficialmente la existencia de conflictos armados internos.

Tan sólo en 2023, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una organización no gubernamental que forma parte de la Red Internacional de Derechos Humanos, registró más de 40 hechos de desplazamiento por violencia en al menos once estados: Chiapas, Chihuahua, Zacatecas,



DERECHOS HUMANOS

Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Estado de México. Esto representa un aumento de 160% con relación a 2022, cuando se presentaron 25 eventos.

Esta investigación de **Proceso**, en alianza con CONECTAS, muestra cómo el desplazamiento fruto de la violencia de grupos criminales se ha incrementado en el actual sexenio. Los grupos criminales destierran a pobladores para apoderarse de rutas del trasiego de droga o para la trata de personas migrantes que viajan hacia la frontera con Estados Unidos. Mientras, las familias prefieren salir para evitar el reclutamiento de sus hijos jóvenes para actividades ilícitas o que sus comercios, producción agrícola y negocios deban pagar "cobro de piso" a esos grupos.

En 2014, durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido, en un informe, que el contexto de violencia generalizada y exacerbada en diversas zonas de México era causante del desplazamiento forzado de miles de personas. Además, acusaba a las autoridades por minimizar el fenómeno.

En junio de 2023, transcurridos cuatro años del actual gobierno, la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jiménez-Damary, señaló el recrudecimiento de la violencia, el incremento del desplazamiento forzado como uno de sus efectos, así como la falta de respuesta y acciones de gobierno para responder a la población afectada.

Jiménez-Damary había estado en el país entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022. En ese tiempo, se reunió con autoridades federales estatales, organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas y académicas, así como con gente desplazada de Oaxaca, Chihuahua, Chiapas y Guerrero.

"Personas desplazadas internas, representantes de Pueblos Indígenas y organizaciones de la sociedad civil describieron casos de desplazamiento interno vinculados a desapariciones, violencia sexual, violencia por razón del género, feminicidios, homicidios, masacres, reclutamiento, trabajo forzado o extorsiones, entre otros", expuso esta abogada especializada en desplazamientos forzosos y migraciones, basada en lo recogido durante su visita. Mientras esto ocurre, prevalece la "impunidad" y la "ausencia del Estado", apuntó en el informe.

Asimismo, la relatora subrayó que el gobierno no cuenta con cifras que permitan conocer la magnitud del desplazamiento y los perfiles de las personas desplazadas. Uno de los pocos datos oficiales relacionados con el tema es del Censo de Población y Vivienda del 2020, levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y según el cual 251 mil 513 personas se mudaron a otro municipio debido a la violencia criminal y la inseguridad, entre 2015 y 2020.

En contraste, la CMDPDH estima que, hasta octubre de 2023, había 386 mil personas desplazadas de manera forzada en México. Esta cifra representa casi la mitad de la población de un estado como Colima.

Dura realidad

Sin un registro que muestre la magnitud de este fenómeno cada vez más evidente, pero desatendido por el gobierno federal a lo largo de ya casi tres sexenios, el desplazamiento forzado interno es una dolorosa cotidianidad en numerosas comunidades. Esto ha sido particularmente grave en zonas rurales e indígenas, lo mismo en la sierra de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos que en los límites al sur con Guatemala.

Un equipo de reporteros de **Proceso** viajó a algunas de estas comunidades. Entrevistaron a personas que permanecen en zonas sitiadas y a otras que sólo vieron la opción de huir y dejarlo todo, en pueblos de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y Chiapas, estados donde la CMDPDH ha documentado desplazamiento forzado durante el actual sexenio.

Hallaron, por ejemplo, que en Guerrero hay familias que sufren un doble desplazamiento. En 2019 salieron de una comunidad del corredor de la Sierra Madre del Sur que pertenece al municipio de Leonardo Bravo, uno de los principales productores de la goma de opio en México. Encontraron refugio en las tierras cálidas de Chichihualco. Pero desde 2023 las balaceras, amenazas y presencia de grupos criminales en esta última comunidad cerca de la capital del estado, Chilpancingo, nuevamente los empujan a salir de lo que creyeron una nueva oportunidad de vida.

Lejos de ese lugar, un hombre de Palmas Altas en la Sierra de Jerez, Zacatecas, en el centro-norte de México, se queja lastimosamente: "Aquí se sintió como si se acabara el mundo", al recordar los truenos de la balacera y el chirriar de las camionetas de los narcos del Cártel Jalisco Nueva Generación, la noche del 4 de marzo del 2021. Los criminales expulsaron a los pobladores a punta de metralleta, dejando más de medio pueblo vacío. A la fecha, los vecinos sólo han podido volver de manera intermitente, mientras enfrentan graves pérdidas de su patrimonio.

En el norte de México, la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, muestra casas quemadas o destruidas. Los árboles están como cadáveres tirados a los lados del camino y hasta los templos católicos se encuentran cerrados. El silencio envuelve pueblos abandonados por las amenazas de los criminales que, ante la baja del precio de la goma de opio y la marihuana, han tomado la tala de árboles y el control de la minería como su nuevo negocio. Esa zona forma parte del famoso "Triángulo dorado" (región entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango) donde el narcotráfico se ha entronizado desde hace décadas.

En ese sitio, del lado de Sinaloa, la tierra de Joaquín Chapo Guzmán, hay miles de personas expulsadas de las zonas históricamente controladas por el Cártel de Sinaloa. Fueron forzadas a dejar sus tierras y muchas de ellas llegaron en calidad de invasores en las periferias del estratégico puerto turístico, comercial y pesquero de Mazatlán. Además de sufrir la falta de servicios, son presa de políticos que los engañan con supuestas escrituras de propiedad.

La descomunal batalla que se ha desplegado entre los dos cárteles más poderosos del país, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, también se extendió al sur del país. Atraídos por la posibilidad de traficar con los miles de inmigrantes que ingresan al país por Chiapas y por controlar las zonas de aterrizaje de las cargas aéreas del narcotráfico semiocultas en la selva, ambos grupos expulsan de los municipios a lo largo de las zonas fronterizas y sierra a miles de personas, en una crisis que apenas muestra su rostro.

Mientras tanto, en Michoacán, en el Pacífico sur, los desplazados han encontrado en municipios como Coahuayana, una zona costera bordeada de bosques, la protección de autodefensas y autoridades locales que brindan tierras y trabajo. Otros continúan su recorrido hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, donde piden refugio y asilo político, expulsados por extorsiones, secuestros y asesinatos.

"Después de un desplazamiento, incluso mucho tiempo después, hay amenazas muy graves a la vida e integridad de las personas. Muchas veces, los agentes criminales persiguen a las personas después de su desplazamiento. Por eso vemos cada vez más personas de Michoacán, Guerrero, ahora de Chiapas también, en la frontera norte, porque saben, entienden, que es ahí donde tienen la oportunidad de escapar", enfatiza Laura Alvarado, oficial de desplazamiento de la CMDPDH.

Para esta investigación se solicitó información vía transparencia y se buscó a funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del gobierno federal y de los 32 estados para conocer registros, programas y atención a las personas desplazadas. En la mayoría de los casos, los gobiernos estatales y las fiscalías se declararon incompetentes para informar sobre el desplazamiento forzado.

Una respuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Baja California ejemplifica la falta de coordinación entre autoridades para atender a quienes llegan a la frontera norte: desde 2019, "diversas instituciones de la administración pública federal han empezado a realizar esfuerzos con el fin de planear y construir la respuesta gubernamental a la problemática, pero no se dan a conocer a esta comisión para prestar la ayuda necesaria en cada caso en particular, motivo por el cual, no tenemos canalizaciones de víctimas, por este fenómeno".

En noviembre de 2023 la situación fue expuesta en un reporte elaborado por el colectivo EPUMx, un conglomerado de 100 organizaciones, redes y colectivos de sociedad civil nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en México. Fue difundido previo a la comparecencia del gobierno mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en lo que se denomina Examen Periódico Universal (EPU), el 24 de enero de 2024 en Ginebra.

En el documento, el colectivo asentó que hay distintos niveles de violencia que generan múltiples violaciones a derechos humanos, que conllevan corrupción, marginación, impunidad. Ello "provoca la ruptura del tejido comunitario y desplazamiento forzado de miles de personas de sus territorios históricos". EPUMx destacó como graves los eventos de desplazamiento en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Guerrero.

Preocupación internacional

Al inicio del gobierno presidencial de Andrés Manuel López Obrador se reconoció por primera vez, de manera oficial, que la violencia por el crimen organizado es una causa del desplazamiento forzado interno en México. Eso ocurrió en abril de 2019, mediante el pronunciamiento hecho por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación asumió el tema y comenzó a publicar una bitácora de actividades en su página oficial. Sin embargo, hasta ahora éstas sólo han consistido en cursos, asistencia a foros, publicaciones de estudios sobre el fenómeno y capacitaciones a funcionarios, según el registro entre abril de 2019 y diciembre de 2023. Se solicitó entrevista con personal de dicha unidad a través de correos institucionales y el área de Comunicación Social, pero no hubo respuesta.

Daniel Márquez Bocanegra, también oficial de desplazamiento interno de la CMDPDH, dijo a **Proceso** que, a pesar del reconocimiento público hecho por el actual gobierno, no existe una política nacional para atender el fenómeno. Eso tiene consecuencias importantes en las víctimas: desintegración familiar, victimizaciones, pérdida de identidad, de propiedades y medios de subsistencia; afectaciones físicas, emocionales, sociales, mientras las personas no hallan una solución específica para su situación.

Con visitas, informes y recomendaciones formales, organizaciones no gubernamentales e instancias nacionales e internacionales, como la ONU y la CIDH, han pedido al gobierno mexicano que, de manera urgente, tome acciones para frenar la violencia de los grupos criminales que provoca el desplazamiento forzado.

También han subrayado que el gobierno de López Obrador —que termina su mandato el 30 de septiembre no ha levantado un registro de las víctimas. Tampoco se han ofrecido soluciones permanentes a quienes fueron forzados a salir de sus lugares de residencia. Asimismo, recuerdan que está pendiente de aprobar una ley para asignar responsabilidades y presupuesto con el fin de atender a las víctimas, la cual se encuentra detenida en el Senado de la República.

En sus recomendaciones, Jiménez-Damary urgió al gobierno mexicano a que adopte, sin más demora, la ley general sobre el desplazamiento interno. También insistió en que debe alentar a que en los 32 estados se tengan leyes locales, con la asignación presupuestaria y un sistema administrativo adecuado, crear los registros estatales y que estos confluyan en un registro nacional.

Aunque es cierto que ha habido propuestas de reformas y de ley federal por legisladores de varios partidos desde 1998 hasta el 2020, ninguna ha prosperado hasta convertirse en ley vigente. Por ejemplo, el 20 de septiembre del 2020, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la diputada Rocío Barrera Badillo del partido oficial Morena. Se trata de una ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en México; reconoce de forma explícita la presencia del crimen organizado y el narcotráfico como factor del desplazamiento forzado interno.

“No hay voluntad política para reconocerlo y aprobar la Ley”, admite la senadora de Morena, Nestora Salgado, originaria de Guerrero y quien el 6 de septiembre del 2023 hizo una excitativa para que se aprobara y emitiera el dictamen de esta ley que les fue enviada por la Cámara de Diputados.

“Es un tema de voluntad política” que cae directamente en la secretaría de Gobernación; “independientemente de que aquí aprobemos o de que haya aprobado en Diputados, se habla de presupuesto. Si el presidente ha repetido que no debe haber un techo para atender los derechos humanos, se supone que hay recursos”, sostiene la senadora.

Por su parte, la CMDPDH señala que el gobierno se escuda en que hace falta una ley de desplazamiento para atender a las víctimas, pero podría actuar porque la mayoría de sus necesidades están previstas en otras leyes. Y, a casi cinco años desde que el actual gobierno federal reconoció el desplazamiento forzado interno, “la mayoría de las personas en situación de desplazamiento interno en México sigue enfrentándose a los mismos retos y vulnerabilidades de hace cinco años, sin poder contar con programas o instituciones que ofrezcan respuestas adecuadas para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales”, remarca la organización.

El presidente, por su parte, minimiza el problema y sólo lo toca cuando las y los reporteros le preguntan en las conferencias diarias. Por ejemplo, en marzo de 2022, sobre la situación de desplazamiento en Aguila, Michoacán, dijo que “se está buscando que la gente regrese a sus comunidades, a sus pueblos”. Recientemente, el 8 de febrero, sobre el éxodo de comunidades en Chiapas, reconoció no tener cifras, pero insistió en que “son muy pocos” los afectados, porque la situación “ya se ha tranquilizado bastante”. 📍

SI FUÉRAMOS TU EX, NOS ODIARÍAS PORQUE NOS VAS A ENCONTRAR EN TODOS LADOS.

Estamos en televisión, radio,
periódico y plataformas digitales.



CON TODO PARA
INFORMAR A MÉXICO.



HERALDO
MEDIA GROUP

U EX,
PORQUE
ONTRAR

EN TODOS LADOS.
Estamos en televisión, radio,
periódico y plataformas digitales.





Imagen de portada:
Miguel Dimayuga

06

AYOTZINAPA

OPERACIÓN SILENCIO
Así el Ejército ocultó información
sobre el caso Ayotzinapa

REDACCIÓN

16

DERECHOS HUMANOS

DESTERRADOS POR EL NARCO
El invisible desplazamiento
forzado en México

**VERÓNICA ESPINOSA,
PATRICIA MAYORGA Y
JOSÉ GIL OLMOS**

GUERRERO
Desplazados con fuego de drones

LUIS DANIEL NAVA

CHIAPAS
Rehenes del narco
GABRIELA COUTIÑO

PRECIO DE VENTA

\$70.00



32

NARCOTRÁFICO

Cárteles mexicanos reciclan a militares y exguerrilleros colombianos

RAFAEL CRODA

40

POLÍTICA

COYOMEAPAN
Entre caciques y la indiferencia oficial, así sobrevive uno de los municipios más pobres

GABRIELA HERNÁNDEZ

46

JUSTICIA

Una maquinaria de impunidad sustenta la corrupción en Migración

MATHIEU TOURLIERE

51

ECONOMÍA

INFLACIÓN:
El sabor amargo del dinero en efectivo por las elecciones, remesas y apoyos sociales

CLAUDIA VILLEGAS

56

OPINIÓN

¿Cuál es su democracia?

KAROLINA GILAS

Ideología y violencia

JAVIER SICILIA

Las debilidades del primer piso

OLGA PELLICER

La guerra de los "locos extremistas" en Gaza

CARLOS MARTÍNEZ ASSAD

64

INTERNACIONAL

La guerra sin tregua de Israel, ahora contra la ONU

ANNE MARIE MERGIER

70

CULTURA

Voz y lengua indígenas, en su universidad

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

La Red de Teatros del IMSS, gran proyecto desperdiciado

ESTELA LEÑERO FRANCO

76

DEPORTES

ENTRENADORES DE GIMNASIOS:

La mano que mece la cuna del dopaje

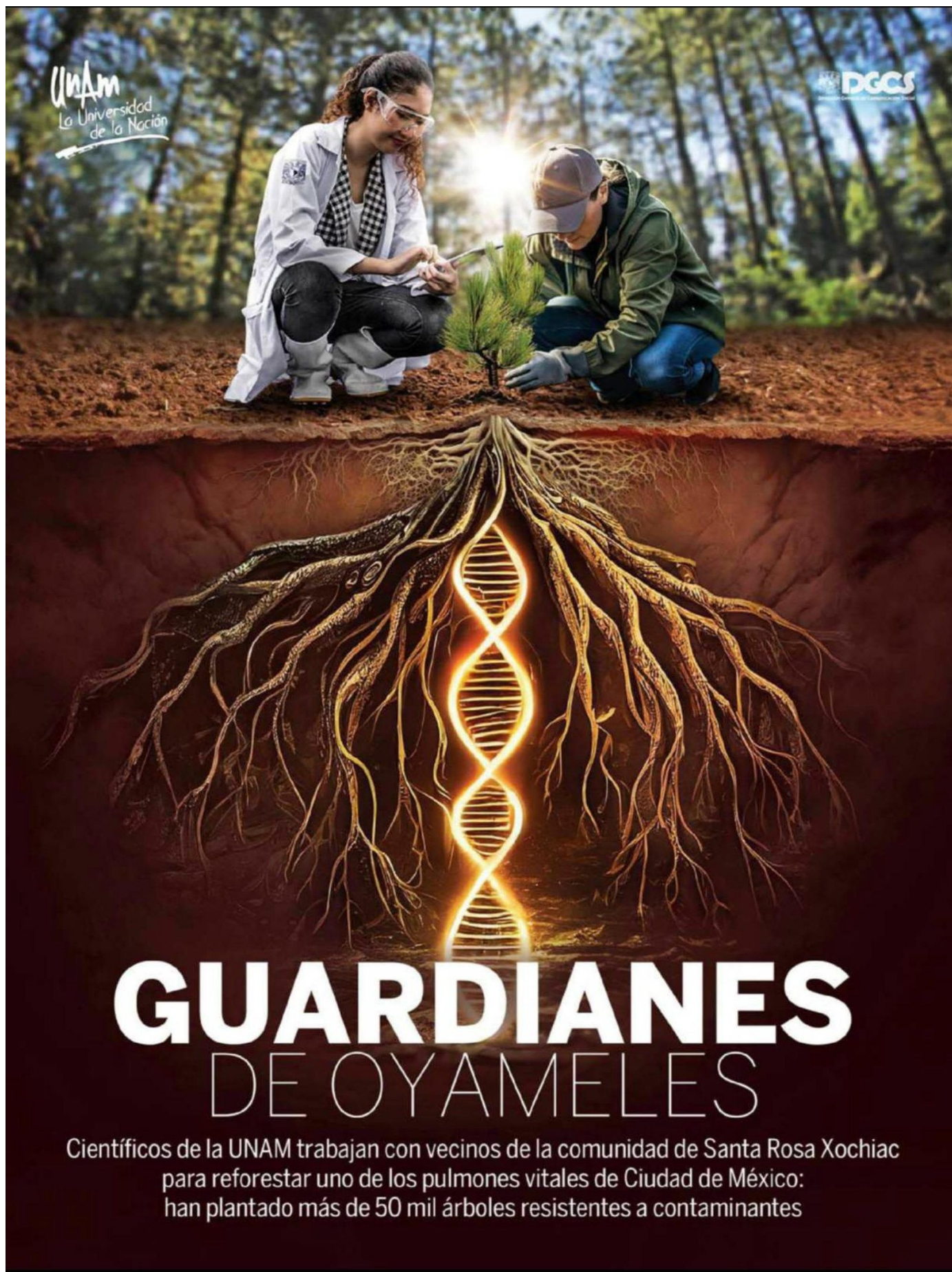
KARLA CABRAL,
JOSÉ LUIS MACÍAS,
RICARDO OLÍN Y
BEATRIZ PEREYRA

82

CARTÓN

Ayotzinapa, 10 años
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ







En México:

Entre enero y mayo de 2018, el **29%** de las reclamaciones presentadas en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), fueron realizadas por personas mayores a 60 años.

*Fuente CONDUSEF

¿Cómo puedes evitarlo?



Si se presenta en tu domicilio una persona fingiendo ser un "ejecutivo del Banco" para cambiarte tu tarjeta NO ABRAS. **Nunca le entregues tu tarjeta ni tu NIP a nadie.**

Si lo haces arriesgas tu patrimonio.



Teclea la dirección de nuestro sitio www.banamex.com en la barra de búsqueda, nunca entres por medio de buscadores, ligas o links.

Nunca des clic a ligas que recibas por Whatsapp, SMS o Email.



Cuidado con el fraude por WhatsApp, si te piden dinero por este medio fingiendo ser un conocido, antes de hacer cualquier transferencia, válidalo directamente hablando con la persona que te lo solicita.



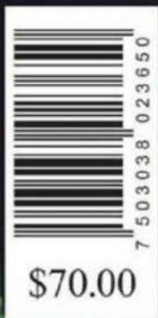
Y recuerda la REGLA DE ORO:

No compartas tu información personal, contraseñas o códigos. Ni envíes dinero a cuentas que no conoces.



AYOTZINAPA

OPERACIÓN SILENCIO DE LA SEDENA



***** AYOTZINAPA

Cienfuegos y Sandoval. Guion preestablecido
Foto: Eduardo Miranda



REDACCIÓN

La mayoría de la información relevante sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, recopilada por el Ejército antes, durante y después de los sucesos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014, fue "ocultada" por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el expediente sobre ese caso que fue integrado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Conocidos por **Proceso**, diferentes elementos probatorios en poder de la FGR indican que, en mayo de 2022, a raíz de las reiteradas solicitudes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional ordenó a todas las unidades de la Sedena enviarle la "información física" que tuvieran sobre de la desaparición de los 43 normalistas.





Testimonios en poder de la Fiscalía General de la República apuntan a que la Secretaría de la Defensa Nacional resguarda material sensible sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en 2014 y que le ocultó a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso, igual que a los padres de las víctimas. Y aunque esto implica la desobediencia a la orden presidencial de que el Ejército proporcionara toda la información que poseyera a la comisión, los mandos militares instruyeron a su personal para negar la existencia de esos materiales.

El relato de una fuente de la FGR



durante todo este tiempo el Centro Militar de Inteligencia resguardó toda esa información que se generó de los hechos ocurridos en Iguala referente al caso Ayotzinapa, cuando pasaron los hechos también en Iguala había el C.E.R.F.I. Iguala, que significa Centro Regional de Función de Inteligencia, que se encontraba dentro de las instalaciones del campo del veintisiete Batallón, ellos también llevaban actividad de monitorear actividades telefónicas y radiocomunicación, esas comunicaciones tiempo después fueron remitidas al Centro Militar de Inteligencia a través de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, dependiente de la Sección Segunda de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (S-2), ahí también venían datos de comunicaciones de Policías de Iguala, las cuales contenían datos sobre las actividades cuando agarraron a los estudiantes, el personal militar del Vigésimo séptimo batallón de Infantería ubicado en Iguala Guerrero, tardó en salir de sus instalaciones debido a que en aquel entonces el Comandante del Batallón tenía vínculos con Guerreros Unidos, ya que a través de los O.B.I. (Órganos de Búsqueda de Información), tenían datos que dicho comandante asistió al velorio de alias "El Chaparro", jefe de plaza de los Guerreros Unidos en Iguala,

Esa información, que el Ejército ha negado a la CoVAJ –en los últimos meses, ya con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador–, fue “concentrada” y “resguardada” en las instalaciones del Centro Militar de Comunicaciones (CMC) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, ubicado en el Campo Militar 37-C, en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, dijeron a la FGR testigos de esos hechos.

Los testimonios y pruebas documentales en poder de la Fiscalía indican, además, que la Sedena decidió cambiar todas las terminales y equipos de cómputo de los analistas de inteligencia que han procesado información del caso Ayotzinapa, para evitar que integrantes de la CoVAJ encontraran esos datos digitales en caso de que el presidente López Obrador ordenara darles acceso a ellos.

Esa información digital se almacenó en los servidores que se encuentran en las instalaciones del Centro Militar de Inteligencia (CMI), expusieron testigos a un fiscal de la FGR, quienes probablemente ahora se encuentran refugiados en otro país.

También denunciaron que el Centro Militar de Comunicaciones (CMC) ocultó información del caso Ayotzinapa obtenida de manera directa por ese organismo, que cuenta con equipos para la interceptación de llamadas de teléfonos satelitales, los cuales usaba el grupo criminal Guerreros Unidos –implicado en la desaparición de los normalistas– en los lugares de la sierra guerrerense donde no llegaba la señal de telefonía celular.

***** AYOTZINAPA

Protesta en el Campo Militar No. 1. Exigencia por la verdad

Foto: Gerardo Luna



Un memorándum interno del 4 de agosto de 2022, dirigido a la Subjefatura de Inteligencia (o Sección Segunda) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, indica de manera expresa lo que ya se venía poniendo en práctica en la Sedena desde 2021: que las peticiones que “son impulsadas desde diversos frentes por la CoVAJ” deben ser respondidas “en el sentido de que esta Dependencia de Gobierno (la Sedena) no realiza actividades de monitoreo o intervención de comunicaciones privadas”.

La estrategia de la Sedena para ocultar información sobre lo ocurrido con los 43 normalistas en la llamada Noche de Iguala incluyó la adopción de un protocolo interno que establece, de antemano, lo que hay que responder ante la CoVAJ y cómo hacerlo.

Diferentes soportes documentales que tiene la FGR indican que al menos desde 2021, cuando la Sedena determinó dejar de acatar la instrucción inicial de López Obrador de entregar a la CoVAJ todos los reportes de inteligencia militar relacionados con el caso Ayotzinapa, la institución castrense acordó internamente cómo eludir la entrega de la información solicitada.

Además, señala que las respuestas deben ser “consensuadas” entre la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ), la Asesoría Jurídica (presumiblemente la del general secretario, Luis Crescencio Sandoval), la S-2 (Inteligencia Militar) y “la Plataforma E.M.C.D.N.” (Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional), tras lo cual deberán ser enviadas a la CoVAJ o a la FGR “por el representante legal de esta Secretaría”, que es el jefe de la UAJ.



AYOTZINAPA



Es decir, la instrucción interna a las diferentes unidades de la Sedena que han dado seguimiento a las actividades en la Normal de Ayotzinapa, a la Noche de Iguala y a la investigación del caso no fue responder con la verdad, sino con un guion preestablecido que niega que tenga más información sobre el caso y que los militares realicen espionaje telefónico.

Mensajes urgentes a DN-1

Un gran número de documentos de la propia Sedena en poder de la CoVAJ y de la FGR corroboran que esa institución, contrario a lo que afirma, ha hecho de la interceptación de comunicaciones una parte integral de sus operaciones cotidianas y que esa práctica habría permitido a DN-1, como se denomina en la documentación militar al secretario

de la Defensa Nacional (en ese entonces, el general Salvador Cienfuegos) conocer en tiempo real los sucesos de la Noche de Iguala.

Sobre todo porque DN-1 (el general Cienfuegos) había solicitado desde varios días previos al 26 de septiembre de 2014 dar seguimiento permanente a los normalistas de Ayotzinapa por los preparativos que hacían para viajar a la Ciudad de México, para participar en la conmemoración del 46 aniversario de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 por parte del Ejército.

En el expediente de la FGR sobre el caso Ayotzinapa, que incluye 56 averiguaciones previas que van de 2014 a 2023, hay varios mensajes FCA (Formato Cifrado Arcano) de carácter urgente, con fechas de 25 y 26 de septiembre de 2014 en los que la 35 Zona Militar (35ZM) en Chilpancingo, con jurisdicción militar sobre Iguala, le informa a DN-1 y a la S-2 de manera cronológica y pormenorizada las actividades de los normalistas en la región, incluyendo Iguala.

De acuerdo con el consecutivo de los mensajes FCA, que van del G.A.O.I./5170 al G.A.O.I./5190, se enviaron al menos 20 documentos de ese tipo entre el 25 y el 26 de septiembre de ese año, con referencias como "SALIDA DE ESTUDIANTES" y "ACTVS. DE AYOTZINAPA", la mayoría firmados por el comandante de la 35 Zona Militar de la época, general Alejandro Saavedra Hernández, acusado el año pasado por la CoVAJ de no intervenir ante el ataque armado contra los normalistas.

De acuerdo con los testimonios y documentos que tiene la FGR, DN-1 recibía reportes de los movimientos de los estudiantes –recopilados por los Órganos de Búsqueda de Información (OBI), como denomina el Ejército a su personal que hace inteligencia de campo, uno de los cuales estaba infiltrado en la Normal de Ayotzinapa– y también de las comunicaciones interceptadas a Guerreros Unidos el 26 de septiembre y los días posteriores.

Un testigo le dijo a un fiscal que uno de los muchos sistemas para interceptar las telecomunicaciones de Guerreros Unidos era Pegasus, software espía israelí que replica a las terminales de los operadores del Centro Militar de Inteligencia (CMI) casi en tiempo real (en entre uno y dos minutos) los mensajes de texto y los audios de las llamadas telefónicas (en entre cinco y 10 minutos).

La Sedena niega que realice interceptaciones, rechaza la existencia del Centro Militar de Inteligencia y recomienda dar respuestas "consensuadas" a la FGR sobre el caso Ayotzinapa

EM.C.D.N. (Secreto)
"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana".
Subjfa. Intl. 2200-6244
Para atención del C. Gral. Bgda. D.E.M. Subjefe Intl. EM.C.D.N.
4 Ago. 2022.
Asunto:
Se informa sobre los requerimientos de la Fiscalía General de la República (F.G.R.) a esta Secretaría sobre el caso "Ayotzinapa", relacionados con el acrónimo C.M.I.

- D. 16 Ene. 2021, derivado de la respuesta otorgada por la S.D.N. respecto del caso Ayotzinapa, el peticionario hizo uso del recurso de revisión, por lo que en reunión de trabajo entre los Organismos involucrados, se acordó ratificar la respuesta anterior, en el sentido que se después de hacer una nueva y exhaustiva búsqueda de información, no fue posible conocer el origen de los datos publicados en la página de la Secretaría de Gobernación.
- E. 10 Mar. 2022, citada F.G.R. realizó un nuevo requerimiento de información, como sigue:
"Que centros militares de inteligencia (C.M. Intl.) han sido creados durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2018...". (Ver anexo "D").
- Para dar respuesta a este requerimiento se realizó una junta a la que asistieron representantes de la Unidad de Asuntos Jurídicos (U.A.J.), Asesoría Jurídica, S-2 (Intl.) y Plataforma, consensuando responder al requerimiento anterior de la siguiente forma:
- En relación a la pregunta "Que centros militares de inteligencia (C.M. Intl.) han sido creados durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2018", me permito hacer el conocimiento de usted que no se creó ninguno.

III. Consideración.
Se infiere que las peticiones que ha recibido la S.D.N. a través de diversas instancias sobre el caso "Ayotzinapa", versan sobre el mismo requerimiento y por lo que es conveniente que las respuestas sean consensuadas entre la U.A.J., Asesoría Jurídica, S-2 (Intl.) y Plataforma EM.C.D.N. y deberán ser emitidas por el representante legal de esta Secretaría (U.A.J.) desde el ámbito de su competencia, en el sentido que esta Dependencia de Gobierno no realiza actividades de monitoreo o intervención de comunicaciones privadas.

IV. Recomendación.
Cuando esta Secretaría reciba peticiones de información de diversos Organismos en materia de Inteligencia Militar, se convoque a reuniones de trabajo entre la U.A.J., Asesoría Jurídica, S-2 (Intl.) y Plataforma EM.C.D.N. y que la respuesta consensuada se otorgue a través de la U.A.J., en los términos que se acuerden.

Respetuosamente,

AYOTZINAPA

Las interceptaciones de la Sedena en Iguala



SECRETARÍA
DE LA
DEFENSA NACIONAL
C.R.F.I. CENTRO.
DIRECCIÓN.

C.R.F.I. "CENTRO".- IGUALA, GRO.

C. CMTE. IX. R.M.- CUMBRES DE LLANO LARGO, GRO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3/a. DE LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; 14, 15, 16 Y 29 FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 3/a. 10, 11, 12 Y 17 DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y F.A.M., 3/a., 6/a. 7/a. Y 9/a. DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA S.D.N. ME PERMITO REMITIR A ESA SUPERIORIDAD, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN TÉCNICA, POR SER DE INTERÉS A ESE MANDO TERRITORIAL:

(SECRETO)

MENSAJE F.C.A.
"2014, Año de Octavio Paz"

"URGENTE".

FECHA: 27 SEP. 2014
REF.: INFORMACIÓN

Buen día...no me confundí parec q uv6 muertos
Como te fue con la balacera? No saigas. Esta peligroso. Cuidate
Aqui en Iguala. Anoche como a las diez hubo varios muertos dicen. Despues del informe de la presidenta del dif
Laura esta graba un paciente es de la cama 54 ya esta agonizando alparecer es de alternitiano su familia edta en urgencias para k estes alpendiente
Javi n vayas a hir px el hospi esta muy feo fue una masacre pior k aguas blancas
Encuidado aqi balasiam un autobus x pemex
Buenos dias compadre... Seria preferible que hoy no abras tu negocioanoche hubo balaceras y desmadres feos por toda la ciudad.
Si hubo muertos, estaban 3 cuerpos d ayotzinapos y 1 señora. Me dejaron verlos.
Tokis yamale alos otros cabrons k ay pado estoy enserrad en panaderia siguen matand
A que bien mi sr presidente. Gracias. Se entero de la fiesta que hicieron los chavos por el centro con los juguetes que les trajo rapido y furioso?
ya estoy en la ferre pero nos vinieron a dejar aun cabron aki cerkita esta muerto
Q pasa hay un problema? O xq le tienen enserrados?
raro los demás jovenes huyeron entra la maleza a orilla de carretera piden ayuda del ayuntamiento a las 24:30 aproximadamente

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tiene elementos para sostener que la Sedena posee "información crucial sobre los posibles responsables (de las 43 desapariciones) y sobre el destino de los jóvenes", expuso en su sexto y último informe, en julio de 2023, que la información parcial que proporcionó la dependencia por instrucciones del presidente a partir de 2020 indica que hay más reportes que no se quieren entregar.



De acuerdo con los protocolos internos, la información del ataque armado, ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, debió haber escalado con rapidez en la cadena de mando y llegado a la Sección Segunda del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDN), que depende directamente del secretario de la Defensa Nacional.

Al principio, los analistas del CMI pensaron que lo que ocurría en Iguala era un enfrentamiento entre los grupos delictivos Guerreros Unidos y Los Rojos, que se disputaban la plaza, pero, a medida que avanzaba la noche del 26 de septiembre en las comunicaciones interceptadas se mencionaba a los "ayotzinapos", como criminales y policías les decían a los normalistas.

Sandoval. Opacidad
Foto: Octavio Gómez

En un mensaje FCA del 12 de octubre de 2014, la 35 Zona Militar puso de conocimiento de DN-1 y varias unidades de la Sedena las transcripciones de las conversaciones telefónicas interceptadas por la inteligencia militar a Guerreros Unidos los días 26 de septiembre y 4 de octubre de ese año, lo que indica la existencia de esos archivos que han sido negados de manera reiterada a la CoVAJ.

La FGR tiene evidencias de que el Ejército mexicano monitoreaba desde 2011 las llamadas y mensajes de telefonía celular de integrantes de Guerreros Unidos, entre ellos: Alejandro Cholo Palacios, Gildardo López Astudillo, Cabo Gil; los hermanos Casarrubias Salgado y el subdirector de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares.

El 26 de septiembre hay una secuencia de reportes de inteligencia militar que proporcionó la Sedena a la CoVAJ, la cual, sin embargo, se interrumpe a las 22:15 horas, justo cuando se producía la persecución, agresión, detención y desaparición de los normalistas, lo que ha llevado al GIEI a hablar de un "apagón informativo" en la información suministrada por la institución castrense a los investigadores.

Ese "apagón" ha sido mantenido por los militares pese a los esfuerzos de la CoVAJ, el GIEI y la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa de la FGR, incluso pese a la orden inicial del presidente López Obrador al Ejército de abrir sus archivos, una orden que luego se diluyó y se transformó en respaldo absoluto a la versión del Ejército de que ya entregó toda la información a los investigadores del caso.

López Obrador avala esa versión pese al cúmulo de evidencias de que hay reportes que los militares ocultan y de que hubo una operación concertada al interior de la Sedena para "concentrar" la información de inteligencia del caso Ayotzinapa en las instalaciones del Centro Militar de Comunicaciones (CMC) en el Campo Militar 37-C, en San Miguel de los Jagüeyes, y en los servidores del CMI, aunque los testigos no especificaron si esos expedientes físicos y electrónicos siguen almacenados y bajo resguardo en esas unidades.

La discreta S-2

La Sección Segunda del EMCDN (S-2, de la que forma parte la Subjefatura de Inteligencia) es una unidad de especial importancia de la Sedena, pues es la que maneja la inteligencia militar y coordina todos los organismos de inteligencia del Ejército, incluso algunos ultrasecretos cuya existencia no es reconocida públicamente por la institución castrense.

La FGR, por ejemplo, tiene pruebas documentales de la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI) y de las interceptaciones que realiza, pero la Sedena niega que ese centro exista.

Un documento que forma parte del expediente de la FGR sobre el caso Ayotzinapa indica que, en efecto, el CMI no aparece en el organigrama oficial del Ejército y la Fuerza Aérea por la naturaleza secreta de sus actividades, aunque existe en los hechos

y tiene un director, un comando operativo de inteligencia, analistas, un grupo de contrainteligencia y un área de ingenieros electrónicos y en sistemas.

Todos los militares asignados al CMI pertenecen orgánicamente a la Sección Segunda del EMCDN y están en calidad de comisionados en esa unidad, que resulta clave en todo el entramado militar alrededor del caso Ayotzinapa.

Testigos, cuyas afirmaciones están respaldadas por pruebas documentales y archivos digitales incorporados al expediente sobre el caso, hicieron ante los fiscales pormenorizados relatos sobre el seguimiento que diferentes unidades de inteligencia del Ejército dieron a Guerreros Unidos entre 2011, cuando ese grupo se escindió de La Familia Michoacana, y 2016.

Esto significa que el espionaje militar a las actividades criminales de Guerreros Unidos comenzó a finales del sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012) y se extendió hasta dos años después de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, que ocurrió y fue objeto de una cuestionada investigación en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018).



SECRETO



AYOTZINAPA

Las afirmaciones de otro testigo de la FGR

La Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional ordenó la centralización de la información física generada del caso Ayotzinapa para ser resguardada en las instalaciones del C.M.C. del E.M.C.D.N. (Centro Militar de Comunicaciones del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional),

(...)

y el cambio de la totalidad de las terminales de los analistas o equipos de cómputo

López Obrador llegó a la Presidencia en 2018 con la promesa de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas y abrir los archivos de la Sedena sobre el caso, lo que se cumplió parcialmente hasta finales de 2021. A partir de entonces los militares se enfrascaron en una constante negación pese a que sus propios documentos desmentían las respuestas que daban a la CoVAJ y a la FGR.

Testigos dijeron a la FGR que la información "resguardada" por el CMI incluye la que fue recopilada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), que operaba en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala y monitoreaban llamadas telefónicas y de telecomunicaciones en esa región.

La FGR tiene soportes documentales de que el CRFI espía, antes, durante y después del 26 de septiembre de 2014 a Guerreros Unidos, a la policía de Iguala y a estudiantes y profesores de la normal de Ayotzinapa, entre otros sujetos de interés, y de que existe más información que podría llevar a determinar el paradero de los 43 desaparecidos.

Los archivos físicos y electrónicos que se pusieron bajo resguardo del CMI y del Centro Militar de Comunicaciones (CMC) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDN) contienen datos de comunicaciones de policías de Iguala en los momentos en que detuvieron y atacaron a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014 y en que recibían instrucciones de los jefes de Guerreros Unidos sobre cómo proceder.

Los datos indicaban que el comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala en esa fecha, coronel José Rodríguez Pérez (luego ascendido a general y hoy detenido por delincuencia organizada y desaparición forzosa) tenía vínculos con Guerreros Unidos.

Las fuentes indicaron que, según los OBI, el coronel Rodríguez Pérez había asistido en marzo de 2014 al velorio de Mario el Chaparro, jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala y quien murió ahogado en la laguna de Tuxpan. Las interceptaciones telefónicas realizadas por la DEA en Chicago a Guerreros Unidos corroboran los vínculos de ese y otros militares con el grupo criminal.

Según las evidencias en poder de la FGR, además del CRFI, en Iguala actuaba una célula de inteligencia del Ejército que contaba con equipo para interceptar llamadas telefónicas vía amplificadores pasivos del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM, por sus siglas en inglés), receptores PRI00 y SDR y el programa israelí Universal Forensic Extraction



Device (UFED), usado para extraer datos de teléfonos celulares, laptops, tabletas, PC y memorias externas.

Además, el CMI utiliza desde 2011 el *software* israelí Pegasus, que es más sofisticado que el UFED porque permite el acceso a cualquier acción de voz, datos, audio, fotografías y video que el usuario realiza en un celular, programa también empleado para espiar a integrantes de Guerreros Unidos que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Negar todo, la línea oficial

El 1 de octubre de 2021 la CoVAJ publicó en su página web, "por instrucciones del presidente" López Obrador, dos intercepciones que realizó el CMI el 26 de septiembre de 2014 y el 4 de octubre del mismo año a comunicaciones por mensajes de texto entre policías y jefes de Guerreros Unidos.

En el intercambio de mensajes del 26 de septiembre, entregado por la Sedena a la CoVAJ, y que tienen en el encabezado las siglas EMDN (Estado Mayor de la Defensa Nacional) y CMI (Centro Militar de Inteligencia), el subdirector de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, le dice al jefe regional de Guerreros Unidos, *Cabo Gil*, que le va a entregar a 21 personas que tiene en un autobús para que "los revienten ustedes" y que, además, tiene a "17 en la cueva" (17 estudiantes habían sido llevados esa noche a la comisaría de barandillas de la policía de Iguala).

En la comunicación del 4 de octubre de 2014, ocho días después de la desaparición de los 43, Alejandro Cholo Palacios, un jefe de Guerreros Unidos, le pregunta en un mensaje de texto a un presunto policía de Tepic-coahuila, identificado como Ramón en el documento del CMI: "DIONDE LO TIENESS" (sic), a lo cual responde: "EN UNA CUEVA", lo cual hace suponer que se referían a estudiantes que seguían con vida.

Este documento de la conversación entre el Cholo y Ramón, que fue entregado por la Sedena a la CoVAJ, es tan fundamental en la investigación que en octubre de 2021 la FGR solicitó a la institución militar tener acceso a la transcripción completa (que existe, según un testigo protegido) de los mensajes intercambiados por esos dos delinquentes.

Una respuesta de la Sedena a la FGR del 13 de diciembre de ese año afirma que "después de haber realizado una exhaustiva búsqueda de información en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, no se localizó evidencia documental que atienda su requerimiento; toda vez que no se monitorea ni se intervienen comunicaciones".

Es decir, el argumento siempre fue el guion pactado internamente para dar respuestas a las solicitudes de información sobre el caso Ayotzinapa.

El 13 de octubre pasado López Obrador dijo en su conferencia de prensa mañanera que él "personalmente" está "conduciendo" y "dirigiendo" la investigación del caso Ayotzinapa, lo que hace suponer que conoce las declaraciones y evidencias en poder de la FGR sobre las maniobras de la Sedena para ocultar información a la CoVAJ y a la Fiscalía Especial, que hasta septiembre de 2022 dirigía Omar Gómez Trejo y que ahora encabeza Rosendo Gómez.



Protestas por los 43. Ejército, órdenes para mentir

Foto: Gerardo Luna

El deslinde de la CNDH

Una investigación del caso Ayotzinapa, que suelen encomiar los persistentes defensores de la "verdad histórica" ante el cúmulo de delitos cometidos por los mandos de la PGR para cerrar el expediente, es la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó el 28 de noviembre de 2018, tres días antes de la toma de posesión del presidente López Obrador.

Más que una investigación, la denominada "Recomendación No. 15VG/2018" fue en lo sustancial un análisis de las investigaciones, peritajes, evidencias, testimonios y diligencias realizados por la PGR y el GIEI a lo largo de los cuatro años que le llevó a la CNDH publicar ese documento que respalda varias de las tesis de la "verdad histórica".

Por ejemplo, la CNDH, entonces presidida por Luis Raúl González Pérez, sostiene que la versión de la PGR que tiene "mayor número de elementos probatorios" es que el basurero de Cocula fue el destino final de los 43 normalistas.

Incluso, el documento elaborado por la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, a cargo de José Trinidad Larrieta, cuestiona los peritajes del experto José Torero (encargado por el GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que descartan que en el vertedero de Cocula se hubiera producido la incineración de 43 cadáveres en un lapso de 16 horas.

En el expediente de la FGR del caso Ayotzinapa figura un oficio del 5 de enero de 2020, en el que la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, afirma que Larrieta "se extralimitó" en funciones que tenía la oficina a su cargo, pues actuó más como autoridad ministerial que como defensor de los derechos humanos.

Piedra Ibarra, que en esa época sí mostraba preocupación por los abusos cometidos por militares, critica en el documento que la oficina de Larrieta haya pedido a la Sedena que colabore ampliamente con la PGR para esclarecer la desaparición de los normalistas, pero que, al mismo tiempo, haya omitido solicitar a la ahora Fiscalía investigar a los elementos del Ejército que no cooperaban con la investigación.

Larrieta tomó como válidos testimonios que ya habían sido invalidados porque los declarantes fueron torturados y, sobre la actuación de los militares en esos hechos, se limita a hacer una cronología con base en la información divulgada en los informes del GIEI y a indicar que la PGR debe investigar más a fondo las omisiones de algunos oficiales y su falta de acción ante los ataques armados a los estudiantes.

La verdad verdadera

El primer decreto expedido por el presidente López Obrador a unos días de asumir el gobierno, en diciembre de 2018, fue el de la creación de la CoVAJ, organismo presidido por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien estaría a cargo de coordinar los esfuerzos institucionales para esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa y asistir a los padres de los desaparecidos.

Encinas renunció en octubre último, luego de conocerse que sus labores al frente de la CoVAJ provocaron malestar en la Sedena y que fue objeto de espionaje con Pegasus, el programa usado por el Ejército.

Según la nueva investigación desarrollada por la CoVAJ y la Fiscalía Especial desde 2019, la "verdad histórica" fue una "construcción" del gobierno de Peña en la que se omitió, entre muchas otras cosas, que había militares coludidos con Guerreros Unidos, como los generales José Rodríguez Pérez y Rafael Hernández Nieto y el capitán José Martínez Crespo, los tres procesados por delincuencia organizada y desaparición forzada, al igual que 11 militares más.

La "verdad histórica" también omitió que los estudiantes fueron divididos en varios grupos, uno de ellos, según la CoVAJ, integrado por seis normalistas que permanecieron vivos algunos días en "la Bodega Vieja", hasta que el 30 de septiembre de 2014 "El Coronel" (presumiblemente el entonces coronel Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería) reportó que "se encargarían" de esos seis jóvenes.

La CoVAJ desmoronó "la verdad histórica", pero en el momento en que el presidente López Obrador cerró filas con los militares y avaló su negativa a entregar más información que pudiera conducir al paradero de los 43 normalistas, este gobierno, como el anterior, carece de material probatorio que conduzca a determinar el paradero de los estudiantes. 📍